



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

TESIS:

El deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación y su aparente contravención a la presunción de buena fe del poseedor.

Autora:

Bach. Fonseca Quiroz Erlita

Asesor:

Mag. Yzquierdo Hernández Leopoldo

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Fecha de sustentación: 23/02/2024

LAMBAYEQUE, 2024.

Tesis denominada “El deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación y su aparente contravención a la presunción de buena fe del poseedor”
presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA, por:



.....
Bach. Fonseca Quiroz Erlita

Autor



.....
Mag. Yzquierdo Hernández Leopoldo

Asesor

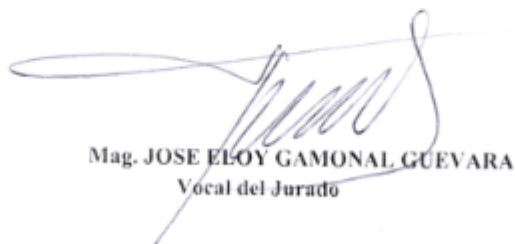
APROBADO POR:



Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
Presidente del Jurado



Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE
Secretario del Jurado



Mag. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA
Vocal del Jurado

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicado a mis padres, por ser los pilares fundamentales de mi vida, quienes me brindaron su apoyo, orientación y amor incondicional, con la única finalidad de hacer de mí una mejor persona, tanto en el aspecto personal como profesional, a quienes les estoy eternamente agradecida.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a Dios, por ser mi guía que me ilumino y oriento para poder concluir esta hermosa carrera de Derecho, y a mi querida madre por su apoyo incondicional.

Agradezco a mis amigos y familiares, por apoyarme cuando más las necesite, por extender su mano en los momentos difíciles y por el amor brindado cada día.

Agradezco a mi asesor de tesis por su apoyo en la elaboración de la presente tesis, y a mi querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por formarme académicamente en esta hermosa carrera de Leyes.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 15-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Erlita Fonseca Quiróz.**

Siendo las 11:00:00 a. m. del día viernes 23 de febrero del 2024 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias I de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**EL DEBER DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DEL BIEN EN EL DELITO DE RECEPTACIÓN Y SU APARENTE CONTRAVENCIÓN A LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL POSEEDOR**", designados por Resolución N° 143-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 01 de junio del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA.
SECRETARIO : Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE.
VOCAL : Mag. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA

La tesis fue asesorada por Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ, nombrada por Resolución N°143-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 01 de junio del 2022.

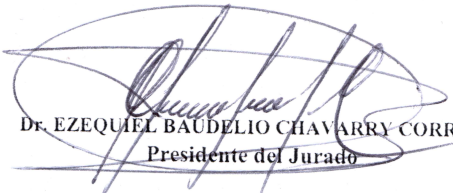
El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 84 de fecha 20 de febrero 2024.


La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Erlita Fonseca Quiróz** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADO con la nota de (Dieciséis) en la escala vigesimal, mención de Buena

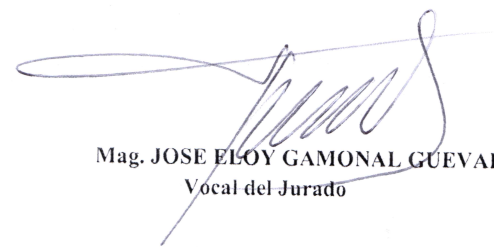
Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12 : 35 .m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 23 de febrero del 2024


Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
Presidente del Jurado


Dr. AMADOR NICOLAS MONDOÑEDO VALLE
Secretario del Jurado


Mag. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA
Vocal del Jurado

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mag. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación de la bachiller en DERECHO Erlita Fonseca Quiróz, Titulada EL DEBER DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DEL BIEN EN EL DELITO DE RECEPCIÓN Y SU APARENTE CONTRAVENCIÓN A LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL POSEEDOR, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 13% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 27 de febrero del 2024



MAG. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ
D.N.I. 16667328
ASESOR



Bach. Erlita Fonseca Quiróz

DNI: 71650184

Autora

EL DEBE DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILICITA DEL BIEN EN EL DELITO DE RECEPCIÓN Y SU APARENTE CONTRAVENCION A LA PRESUNCION DE BUENA FE DEL POSEEDOR

INFORME DE ORIGINALIDAD

13%

INDICE DE SIMILITUD

13%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

8%

2

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

1%

3

idoc.pub

Fuente de Internet

1%

4

[Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo](#)

Trabajo del estudiante

<1%

5

www.scielo.org.co

Fuente de Internet

<1%

6

www.studocu.com

Fuente de Internet

<1%

7

es.scribd.com

Fuente de Internet

<1%

doku.pub

MAG. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ
D.N.I. 16667328
ASESOR

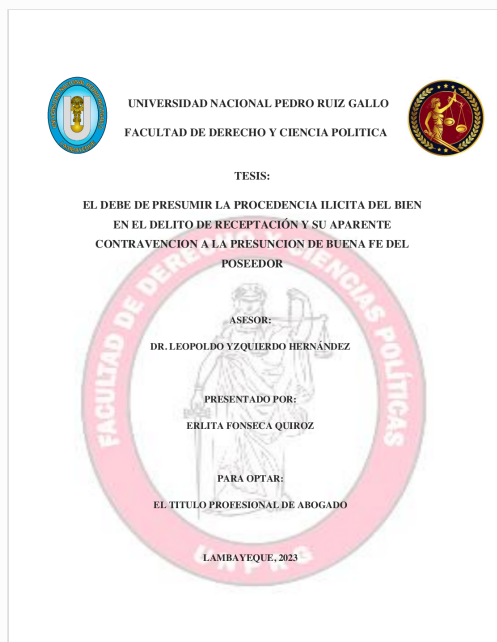


Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Erlita Fonseca Quiroz
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: INFORME FINAL
Nombre del archivo: INFORME_FINAL-TERMINADO-ERLITA_MODIFICADO_TODO_1....
Tamaño del archivo: 1.06M
Total páginas: 150
Total de palabras: 37,980
Total de caracteres: 198,933
Fecha de entrega: 28-feb.-2024 09:36a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega... 2306945719



Derechos de autor 2024 Turnitin. Todos los derechos reservados.


MAG. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ
D.N.I. 16667328
ASESOR

INDICE GENERAL

DEDICATORIA

iii

AGRADECIMIENTO

iv

INDICE GENERAL

v

INDICE DE TABLAS

ix

INDICE DE FIGURAS

xi

RESUMEN

xii

ABSTRACT

xiv

INTRODUCCION

1

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS

5

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 5

1.1.1. Planteamiento del problema 5

1.1.2. Formulación del problema. 8

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO..... 8

1.2.1. Justificación del estudio 8

1.2.2. Importancia del estudio 9

1.3. OBJETIVOS..... 10

1.3.1. Objetivo General 10

1.3.2. Objetivos Específicos 10

1.4. HIPÓTESIS 11

1.5. VARIABLES 11

1.5.1. Variable independiente	11
1.5.2. Variable dependiente.	11
1.6. MÉTODOS.....	11
1.6.1. Métodos Generales	11
1.6.2. Métodos Jurídicos	12
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL	13
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION	13
2.1.1. TESIS.	13
2.1.2. ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS	14
2.2. BASES TEÓRICAS	15
2.2.1. EL DELITO DE RECEPCIÓN	15
2.2.2. CRITERIOS JURÍDICOS-DOCTRINARIOS DE LA POSESION Y LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL POSEEDOR, EN EL DERECHO CIVIL PERUANO	23
2.2.3. LOS ALCANCES JURIDICOS DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL POSEEDOR DE BIENES MUEBLES, EN UN CONTEXTO DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DEL BIEN	47
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	51
1. METODOLOGÍA	51
1.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN	51
1.1.1. Tipo de investigación	51
1.1.2. Nivel de investigación	51
1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION.....	51
1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA	52

1.3.1. Población	52
1.3.2. Muestra	53
1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	53
1.4.1. Técnicas	53
1.4.2. Instrumentos	55
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS	55
4.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS	55
CAPÍTULO V: CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS	96
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	96
5.1.1. DISCUSIÓN SOBRE EL PRIMER OBJETIVO: Analizar la estructura del delito de receptación .	96
5.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO: Explicar los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en un contexto del deber u obliga de presumir la procedencia ilícita del bien, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano.	99
5.1.3. DISCUSIÓN SOBRE EL TERCER OBJETIVO: Analizar los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020	105
5.1.4. DISCUSIÓN SOBRE EL CUARTO OBJETIVO: Proponer los criterios para imputar correctamente responsabilidad penal, al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, para efectos de imputar el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor.	114
5.2. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LAS VARIABLES	116
5.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que	

incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación.	116
5.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: La contravención de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles	118
5.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	124
5.4. APORTE CIENTÍFICO	126
CONCLUSIONES	129
RECOMENDACIONES	131
BIBLIOGRAFIA	132

INDICE DE TABLAS

TABLA 1	La receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana	56
TABLA 2	La receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia los delitos de hurto y robo	58
TABLA 3	Todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal	59
TABLA 4	Los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano	61
TABLA 5	Situaciones fácticas, en que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión	63
TABLA 6	La exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor	65
TABLA 7	Quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona el dominio y/o la posesión de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión careza de facultad para hacerlo, debe imputársele el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien	67
TABLA 8	Cuando se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación	69
TABLA 9	Opiniones de los expertos sobre la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación	71

TABLA 10	Opiniones de los expertos sobre los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano	75
TABLA 11	Opiniones de los expertos sobre cuando la presunción de buena fe de la posesión, no es aplicable a favor del poseedor de un bien mueble	79
TABLA 12	Opiniones de los expertos sobre tener que presumir que toda posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario	83
TABLA 13	Opiniones de los expertos sobre quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona la posesión inmediata de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo	87
TABLA 14	Opiniones de los expertos sobre en qué situaciones fácticas se debe exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor	91
TABLA 15	La estructura típica del delito de receptación	96
TABLA 16	Contrastación de la hipótesis	124

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1	La receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana	56
FIGURA 2	La receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia los delitos de hurto y robo	57
FIGURA 3	Todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal	59
FIGURA 4	Los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano	60
FIGURA 5	Situaciones fácticas, en que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión	62
FIGURA 6	La exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor	64
FIGURA 7	Quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona el dominio y/o la posesión de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión careza de facultad para hacerlo, debe imputársele el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien	66
FIGURA 8	Cuando se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación	68

RESUMEN

La investigación realizada esta titulada como: “EL DEBER DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DEL BIEN EN EL DELITO DE RECEPCIÓN Y SU APARENTE CONTRAVENCION A LA PRESUNCION DE BUENA FE DEL POSEEDOR”, es básica, descriptiva simple, no experimental de corte transversal y de enfoque mixto, ya que, la problemática jurídica investigada se debe a que el legislador establece un “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa” como un elemento normativo del tipo penal (subjetivo), es decir, un ciudadano tiene el conocimiento necesario para identificar que un bien es de procedencia ilícita, es decir, no se exige el elemento volitivo. De acuerdo con lo indicado, este “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa”, estaría contraviniendo el “principio de la presunción de buena fe del poseedor”, ya que, descarta la posibilidad que la cosa (mueble) se ha adquirido u obtenido de buena fe, bajo la nube de la ignorancia o desconocimiento que la cosa (mueble) es de procedencia ilícita.

En la realización de la investigación se logró recolectar datos e información en un solo momento, mediante técnicas e instrumentos propios de una investigación cualitativa (entrevista a especialistas en derecho penal y civil) y una cuantitativa (análisis de requerimientos acusatorios y disposiciones fiscales de archivos, y, una breve encuesta a la comunidad jurídica); en donde la muestra está conformada por diez (10) participantes especializados en el derecho civil y penal (jueces, fiscales, y abogados litigantes especializados en derecho civil y penal) conocedores de la problemática investigada; también conformada por cuatro (04) acusaciones fiscales y nueve (09) disposiciones de archivo del distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de recepción, y, por cien (100) miembros comunidad jurídica chiclayana (conformada por bachilleres y titulados) con la finalidad de conocer su perspectiva socio-jurídica sobre la problemática investigada.

De acuerdo a lo obtenido en las encuestas y a las entrevistas realizadas a los expertos, así como, de la información desarrollada en el marco teórico, se concluye como hipótesis final que: “Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, si han tenido consideración que el sujeto ha actuado de buena fe, al momento de la adquisición u obtención del bien mueble (compra, donación, entre otros), entonces, no ha contravenido la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el periodo 2019-2020”.

Palabras Claves: delito de receptación, deber de presumir la procedencia ilícita del bien, la presunción de buena fe del poseedor.

ABSTRACT

The research carried out is titled as: “THE DUTY TO PRESUME THE ILLICIT ORIGIN OF THE PROPERTY IN THE CRIME OF RECEPTION AND ITS APPARENT CONTRAVENTION TO THE PRESUMPTION OF GOOD FAITH OF THE OWNER”, it is basic, simple descriptive, non-experimental, cross-sectional and focused. mixed, since the legal problem investigated is due to the fact that the legislator establishes a “duty or obligation to presume the illegality of the thing” as a normative element of the criminal type (subjective), that is, a citizen has the necessary knowledge to identify that a good is of illicit origin, that is, the volitional element is not required. According to what is indicated, this “duty or obligation to presume the illegality of the thing” would be contravening the “principle of the presumption of good faith of the possessor”, since it rules out the possibility that the thing (movable) has been acquired. or obtained in good faith, under the cloud of ignorance or lack of knowledge that the thing (furniture) is of illicit origin.

In carrying out the investigation, it was possible to collect data and information in a single moment, using techniques and instruments typical of a qualitative investigation (interview with specialists in criminal and civil law) and a quantitative one (analysis of accusatory requirements and fiscal provisions of files, and, a brief survey of the legal community); where the sample is made up of ten (10) participants specialized in civil and criminal law (judges, prosecutors, and trial lawyers specialized in civil and criminal law) knowledgeable about the problem investigated; also made up of four (04) tax accusations and nine (09) filing provisions of the fiscal district of Lambayeque, to impute criminal responsibility to the citizen who failed to comply with the duty or obligation to presume the illegality of the thing in the crime of reception, and, by one hundred (100) members of the Chiclayan legal community (made up of high school graduates and graduates) in order to know their socio-legal perspective on the problem investigated.

According to what was obtained in the surveys and the interviews carried out with the experts, as well as the information developed in the theoretical framework, it is concluded as

a final hypothesis that: “The criteria that have been applied in the fiscal district of Lambayeque, to impute criminal liability to the citizen who failed to comply with the duty or obligation to presume the illegality of the thing in the crime of receipt, if they have considered that the subject has acted in good faith, at the time of acquiring or obtaining the movable property (purchase, donation, among others), then, has not contravened the presumption of good faith of the possessor of movable property, in the period 2019-2020.”

Key Words: crime of reception, duty to presume the illicit origin of the property, the presumption of good faith of the possessor.

INTRODUCCION

Se desarrollo la presente tesis con el título: “EL DEBER DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILICITA DEL BIEN EN EL DELITO DE RECEPTACIÓN Y SU APARENTE CONTRAVENCION A LA PRESUNCION DE BUENA FE DEL POSEEDOR”. Abordando un estudio netamente teórico determinadas instituciones del derecho penal como la “teoría del delito” (específicamente un aspecto de imputación objetiva) y derecho civil, en cuanto a la “presunción de buena fe del poseedor”; así mismo, la estructura típica del delito de receptación.

Se elaboró la presente investigación en razón a las constantes investigaciones fiscales y procesos penales sobre receptación, específicamente en su modalidad de presumir la procedencia ilícita del bien que se ha recibido o adquirido. En ese sentido, se observa que diariamente en la praxis fiscal, se imputa la conducta criminal de “receptación” por el hecho de adquirir o recibir un bien de procedencia ilícita, basándose en el incumplimiento de presumir o sospechar la procedencia ilícita del bien, que se exige en el tipo penal de receptación.

Al respecto, se puede advertir que el legislador establece una exigencia normativa de presumir la procedencia ilícita de un objeto (bien mueble) que constituye un elemento subjetivo en el delito de receptación, lo cual aparentemente contraviene el principio de “presunción de buena fe del poseedor”, conforme a lo establecido en el Código Civil.

En el Perú, los ciudadanos están acostumbrados a la adquisición u obtención de sus cosas, de manera directa sin exigir un documento (boleta o factura) que acredite el acto de adquisición u obtención de la cosa, esto es, la posesión o propiedad de la cosa, es decir, se realiza de manera convencional o consensual (verbalmente). Este tipo de situación descrita, quien adquiere u obtiene la cosa, actúa con la confianza que la cosa es de origen lícito, mas no está presumiendo que lo adquirido es de procedencia ilícito. En ese sentido se formulan las siguientes interrogantes: ¿Todo ciudadano tiene el deber u obligación de presumir la ilicitud

de la cosa que pretende adquirir u obtener? ¿Se debe imputar responsabilidad penal al ciudadano que no presumió la ilicitud de la cosa que pretende adquirir u obtener?

Teniéndose en cuenta lo precisado, se origina un aspecto problemático entre el “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa” (por parte de quien adquiere u obtiene) y la “presunción de buena fe del poseedor” en el derecho civil. Lo cual, en la práctica fiscal, esta situación, genera cierta dificultad para establecer objetivamente cuando se ha incumplido el “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa”, sin contravenir la “presunción de buena fe”; es por ello que, a nivel de investigación al no poder demostrarse que se haya incumplido este deber, se procede a disponer su archivo, o, asumiéndose que se ha incumplido este deber de presumir la ilicitud, se dispone su acusación (en el requerimiento acusatorio), sin embargo, no se sustenta con los elementos probatorios suficientes.

En el ámbito jurídico se han desarrollado ciertos trabajos de investigación sobre la receptación, desde diversos enfoques, entre ellos tenemos los siguientes:

La realizada por Sevilla (2015), se orientó a realizar un análisis de la receptación y su repercusión en justicia penal en el Ecuador, concluyendo que la redacción de este delito se vulnera la presunción de inocencia, en razón que se procesara judicialmente a una persona que no pueda demostrar la titularidad del bien mediante una documentación, y, consecuentemente se presumirá ser autor del delito de receptación.

La realizada por Aldas (2015), se orientó a realizar un análisis de la receptación, desde una perspectiva crítica legal y doctrinaria, concluyendo que se comete receptación cuando se tiene conocimiento de la procedencia ilícita del bien adquirido, o, cuando, se debió asumir que el bien procedía de un delito en razón de las circunstancias de su adquisición como sería el precio muy bajo, ausencia de otorgamiento de comprobante, o, se está ofertando en un lugar de dudosa reputación.

La realizada por Lozano (2019), se orientó a poder sugerir la modificación del texto normativo de la receptación, con la finalidad de incorporar “la culpa” como elemento subjetivo en el delito de receptación; concluyendo que la “culpa” como elemento subjetivo

tiene una presencia relativa en el delito de receptación, ya que la redacción del art. 194 del C.P. se encuentra la frase “debía presumir”, es por ello que, es necesario su modificación.

La realizada por Mendoza (2020), se orientó a establecer si el “debía presumir” como elemento subjetivo en la receptación, está conformado por “elementos volitivos”; concluyendo que únicamente se imputara a título dolo la conducta ilícita de receptación, cuando el “debía presumir” se asuma como un dolo eventual, esto es, desde la perspectiva de una concepción normativa, con la finalidad de evitar un “error de tipo”.

Conforme a lo descrito por los diversos autores e investigadores, al momento de establecer esta exigencia normativa (presunción de ilicitud de la cosa o bien) como un elemento subjetivo en este delito, el legislador está estableciendo indirectamente una exigencia de un “deber de cuidado” a pesar que el delito es de carácter doloso; lo que obliga a realizar un análisis minucioso para conocer las razones de la tipificación de este delito, en cuanto a la exigencia de “presumir la procedencia ilícita del bien”, que significa un deber u obligación de presumir la “presunción de ilicitud de bien”.

Por lo tanto, ante esta problemática surge la siguiente interrogante: ¿Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, han contravenido la presunción de buena fe del poseedor, en el periodo 2019-2020?; es por ello que, se recurrió a la búsqueda fuentes informativas (libros, jurisprudencia, revistas, entre otras); también, la aplicación de una entrevista a diez (10) especialistas en derecho penal y civil (jueces, fiscales, y abogados litigantes especializados en derecho civil y penal) conocedores de la problemática investigada, y, una encuesta a cien (100) miembros comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados) con la finalidad de conocer su perspectiva socio-jurídica sobre la problemática investigada.

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera:

El capítulo I: comprende los aspectos metodológicos que se han tenido en cuenta para efectuar la presente tesis, tales como: el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, justificación e importancia, entre otros.

El capítulo II: comprende los aspectos teóricos, como: Antecedentes de la investigación y las bases teóricas sobre el delito de receptación, los criterios jurídicos-doctrinarios de la posesión y la presunción de buena fe de la posesión en el derecho civil peruano; y, los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en un contexto de presumir la procedencia ilícita del bien.

El capítulo III: comprende los aspectos metodológicos que se han tenido en cuenta para efectuar la presente tesis, tales como: tipo, nivel y diseño de la investigación, así como, las técnicas e instrumentos utilizados para buscar y recabar información relevante para los fines de la presente tesis.

El capítulo IV: comprende los datos recopilados mediante las técnicas e instrumentos, procediéndose a su respectivos análisis y procesamiento, en aras de efectuar la respectiva contrastación de la hipótesis

El capítulo V: comprende la contrastación de la hipótesis y la discusión de los resultados obtenidos conforme a cada objetivo planteado en la presente tesis.

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1.1. Planteamiento del problema

El delito de receptación, como parte de los tipos penales adscritos a los delitos contra el patrimonio, se configura en el curso de relaciones jurídicas donde se trasmite un bien (generalmente, uno mueble) cuya procedencia es ilícita, esto es, vedada por Derecho. Ahora bien, tal ilicitud no deviene del Derecho civil o comercial sino que deriva de la infracción consciente de los tipos penales establecidos por el legislador de modo que obliga a que el Derecho penal sea la disciplina jurídica que englobe su tratamiento de allí que el Código penal precisa la procedencia ilícita del bien, ya sea de manera directa (pleno conocimiento de la ilicitud) o indirecta (presumir la ilicitud), lo que lleva a identificar a un delito de carácter general de modo que, ante tal escenario, no hay necesidad de un especial deber jurídico de cuidado o de una especial condición de los bienes transmitidos ilegalmente para configurar la comisión de este delito.

De acuerdo a la descripción típica de este delito, se configura la receptación de manera directa, esto es, un conocimiento directo de la procedencia ilícita del bien, o, de manera indirecta, esto es, el agente debería presumir la procedencia ilícita o delictiva del bien.

Ahora bien, corresponde indicar que para configurar el delito de receptación existen tres elementos cognoscitivo - normativo, comisivo y negativo determinados por la jurisprudencia penal de lo que cabe dar cuenta.

Respecto del primero de ellos consiste en obrar en conocimiento de que dicho objeto del delito tiene relación con el delito contra el patrimonio originario al amparo de las máximas de la experiencia; ahora bien, un aspecto controversial tiene que ver

con la acreditación de dicha situación a efectos de determinar si se trata de un delito de robo o de hurto o el de receptación.

El segundo consiste en la acreditación de la participación del agente de modo que se identifica a quien ayuda a la perfección del delito cometido.

El tercero consiste en el sujeto activo, que comete la receptación, no tiene que ver con el comisor del delito originario (hurto o robo) de modo que haya independencia entre el comisor y el agente que materializa la receptación.

De acuerdo con la redacción del ilícito de receptación, se advierte que el legislador establece un “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa” que se adquiere como un elemento normativo del tipo penal (subjetivo), es decir, un ciudadano promedio, tiene el conocimiento necesario para identificar que un bien es de procedencia ilícita, es decir, no se exige el elemento volitivo. De acuerdo con lo indicado, este “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa”, estaría contraviniendo el principio de “presunción de buena fe del poseedor”, ya que, descarta la posibilidad que la cosa (mueble) se ha adquirido u obtenido de buena fe, bajo la nube de la ignorancia o desconocimiento que la cosa (mueble) es de procedencia ilícita.

En este aspecto, advertimos una “disyuntiva normativa” entre la regulación civil sobre la “presunción de buena fe del poseedor” y el “deber de presumir la ilicitud del bien” establecida en el tipo penal de receptación. Donde la última, asume como valedera la obligación de quien obtiene o recibe, bajo cualquier título jurídico un bien, debe presumir que su origen es ilícito. Si bien la adquisición o la obtención de la cosa (o bien mueble) es ilegítima o ilícita, no se descarta el hecho que el autor o sujeto activo haya actuado de buena fe.

En el Perú, los ciudadanos están acostumbrados a la adquisición u obtención de sus cosas, de manera directa sin exigir un documento (boleto o factura) que acredite el acto de adquisición u obtención de la cosa, esto es, la posesión o propiedad de la

cosa, es decir, se realiza de manera convencional o consensual (verbalmente). Este tipo de situación descrita, quien adquiere u obtiene la cosa, actúa con la confianza que la cosa es de origen lícito, mas no está presumiendo que lo adquirido es de procedencia ilícito. En ese sentido se formulan las siguientes interrogantes: ¿Todo ciudadano tiene el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa que pretende adquirir u obtener? ¿Se debe imputar responsabilidad penal al ciudadano que no presumió la ilicitud de la cosa que pretende adquirir u obtener?

En la practica fiscal, se suele atribuir responsabilidad penal a todo ciudadano que adquirido u obtenido una cosa (mueble) de origen ilícito (como un objeto de un delito previo de un hurto o robo), sin tener en consideración que el sujeto haya actuado de “buena fe”, al momento de la adquisición u obtención (compra, donación, entre otros), dejándose de lado o ignorando la “presunción de buena fe del poseedor” en el derecho civil.

Teniéndose en cuenta lo precisado, se origina un aspecto problemático entre el “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa” (por parte de quien adquiere u obtiene) y la “presunción de buena fe del poseedor” en el derecho civil. Lo cual, en la práctica fiscal, esta situación, genera cierta dificultad para establecer objetivamente cuando se ha incumplido el “deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa”, sin contravenir la “presunción de buena fe”; es por ello que, a nivel de investigación al no demostrarse que se haya incumplido este deber, se procede a disponer su archivo, o, asumiéndose que se ha incumplido este deber se dispone su acusación (en el requerimiento acusatorio), sin embargo, no se sustenta con los elementos probatorios suficientes.

Es necesario precisar que la presunción de buena fe de los bienes materia de posesión, se encuentra reconocida en los artículos 906°, 907°, 914°, 932° y 948° del Código Civil. Y, en virtud de dichos dispositivos legales, se presume que “la posesión de una cosa o bien es de buena fe”, salvo prueba en contrario (presunción iuris tantum), y, que se está adquiriendo el dominio de estas, salvo que infrinja la

ley penal, a pesar que el “quien recibe” haya actuado de buena fe. Así como, el hallazgo de un objeto perdido genera el “deber de entregar” (entendido como un deber general, dirigido al ciudadano común) a la autoridad competente.

Por lo tanto, es necesario establecer si los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, han contravenido la presunción de buena fe del poseedor, en el periodo 2019-2020.

1.1.2. Formulación del problema.

¿Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, han contravenido la presunción de buena fe del poseedor, en el periodo 2019-2020?

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

1.2.1. Justificación del estudio

La justificación teórica, reside en que se proporcionara ciertos conocimientos jurídicos relacionados al “deber u obligación de presumir la ilicitud del bien” en la receptación, redactada como “el presumir la procedencia ilícita del bien”. Así mismo, se abordará teóricamente respecto a la “presunción de buena fe de la posesión”, establecida en el vigente Código Civil. La cual ayudara a poder fundamentar correctamente un requerimiento acusatorio en el distrito fiscal de Lambayeque. Por lo tanto, es una relevante fuente de conocimiento y de futuras investigaciones en el ámbito socio jurídico, por cuanto se estudió ciertas instituciones jurídicas (delito de receptación, y la presunción de buena fe del poseedor), con la finalidad de explorar ciertos aspectos teóricos que permitieron conocer y comprender el fenómeno (problemática) investigado.

Tiene una justificación práctica, por cuanto, la investigación realizada permitirá conocer los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el periodo 2019-2020. Y, posteriormente, proponer los criterios que se deberían tener en cuenta para fundamentar correctamente un requerimiento acusatorio en el distrito fiscal de Lambayeque.

Tiene justificación metodológica, ya que se aplicó métodos, técnicas e instrumentos que permitieron la realización de la misma desde un enfoque descriptivo simple y cualitativo. Esto es, se aplicaron técnicas de investigación que permitió obtener adecuadas fuentes bibliográficas, una eficiente recolección de datos, entre otros aspectos metodológicos, con la finalidad de probar las hipótesis planteadas y otorgar la confiabilidad del instrumento utilizado, lo que permite que los resultados obtenidos sirvan para posteriores investigaciones con los mismos y/o similares temas a tratar.

1.2.2. Importancia del estudio

La presente investigación es necesaria, debido a las constantes investigaciones y procesos sobre receptación, específicamente en su modalidad de presumir la procedencia u origen ilícito del bien recibido. En ese sentido, se observa en la práctica fiscal diaria, que se atribuye responsabilidad penal en el delito de receptación, basándose en haberse incumplido presumir la procedencia u origen ilícito del bien recibido, entendida como un elemento subjetivo del tipo penal en estudio.

Este un aspecto sobre el cual no repara el Código penal quien desarrolla la exigencia de un deber de cuidado; lo que obliga a adentrarse en el análisis de los motivos legislativos para la tipificación de este delito en dicha orientación. Por ende, será

necesario realizar un análisis teórico minucioso de ciertas instituciones del derecho civil y penal.

También, es necesaria esta investigación, ya que, si fuera necesaria se aportará una mejora en la redacción del ilícito de receptación, el cual debe ser necesariamente compatible con la regulación de la normativa civil sobre “la presunción de buena fe de la posesión de un bien” siendo un aspecto no valorado por el legislador al momento de la construcción del tipo penal del delito de receptación.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Establecer si los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, han contravenido la presunción de buena fe del poseedor, en el periodo 2019-2020.

1.3.2. Objetivos Específicos

Analizar la estructura del delito de receptación.

Explicar los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en un contexto del deber u obligación de presumir la procedencia ilícita del bien, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano.

Analizar los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020.

Proponer los criterios para imputar correctamente responsabilidad penal, al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, para efectos de imputar el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor.

1.4. HIPÓTESIS

Si los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, no ha tenido consideración que el sujeto haya actuado de buena fe, al momento de la adquisición u obtención del bien mueble (compra, donación, entre otros), entonces, contravendría la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el periodo 2019-2020.

1.5. VARIABLES

1.5.1. Variable independiente

Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación

1.5.2. Variable dependiente.

La contravención de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el periodo 2019-2020.

1.6. MÉTODOS

1.6.1. Métodos Generales

Método inductivo. - de la revisión de las fuentes documentales (libros, revistas y jurisprudencia) sobre “el deber de presumir o la presunción de ilicitud del bien” en el delito de receptación y “la presunción de buena fe del poseedor”; así como, de las entrevistas realizadas a los especialistas en derecho respecto al presente tema de investigación, se proponga soluciones generales para la problemática a estudiarse.

Método deductivo. – de la información recopilada en las fuentes bibliográficas (que se encuentra plasmado en el marco teórico) y de las entrevistas a los

especialistas en derecho civil y penal, con la finalidad de arribar a determinadas conclusiones respecto a la problemática que se abordó, esto es, para lograr el objetivo general planteado en la presente investigación.

Analítico. – se utilizó este método, ya que, se realizó un análisis teórico-normativo de la figura penal de receptación y la figura civil de presunción de buena fe del poseedor.

1.6.2. Métodos Jurídicos

Literal. – se utilizó, debido a que se efectuó un análisis de como actualmente se encuentra regulado la “figura penal” del delito de receptación; así como, la institución civil: “la presunción de buena fe del poseedor”.

Ratio Legis o lógico. - se utilizó, con la finalidad de encontrar las causas o razones jurídicas de existir del “delito de receptación”; y, de “la presunción de buena fe del poseedor”.

Sistemático. - por cuanto el “delito de receptación”; y, “la presunción de buena fe del poseedor”, responde al cumplimiento de los principios contemplados en el derecho, así como, derechos reconocidos en la constitución.

Dogmático. - se utilizó para desarrollar teóricamente sobre el “delito de receptación”; y, “la presunción de buena fe del poseedor”. Es por ello que “se trata de un método único de las ciencias jurídicas, que se orienta a la interpretación del derecho” (Ramos Nuñez, 2018).

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

2.1.1. TESIS.

Yanes (2015), realizó un trabajo de investigación, orientado a realizar un análisis estricto de la receptación y su repercusión en justicia penal en el Ecuador, concluyendo que “en la redacción de este delito se vulnera la presunción de inocencia, en razón que se procesará judicialmente a una persona que no pueda demostrar la titularidad del bien mediante una documentación, y, consecuentemente es válido imputarle la comisión de este ilícito penal, por cuanto, se ha incumplido el “deber de diligencia”, consistente en acreditar la titularidad y procedencia del bien obtenido mediante la documentación pertinente. Ese sentido, al no demostrar la existencia de estos documentos, se presume que los objetos recibidos – en venta, custodia, donación, entre otro título que justifique la posesión - son de procedencia ilícita. De tal manera todos los ciudadanos serian receptadores de bienes de dudosa procedencia.

Davalos (2015), realizó un trabajo de investigación orientado a realizar un análisis de la receptación, desde una perspectiva crítica legal y doctrinaria de la sentencia judicial N° 18282-2013; concluyéndose que “el delito de receptación se comete cuando: i) Se conoce la procedencia ilícita del bien, como es el caso, de un comerciante que compra diversos bienes a bajo precio sabiendo perfectamente que quien le está vendiendo se dedica a la comisión de hurto, robo o un delito aduanero; ii) Se debe asumir que un bien procede de un delito, dado que se está ofertando a un precio muy bajo, no se otorga ningún documento para probar la titularidad y procedencia del bien (como sería un comprobante de pago), o se está ofertando en un lugar de dudosa procedencia. También, se concluye que se ha establecido en la doctrina la denominada “receptación en cadena”, la cual consiste en que un bien de origen ilícito es transferido u otorgado a varias personas, esto es, pasa por varias personas, generándose la llamada “receptación en cadena”.

Sánchez (2017), realizó un trabajo de investigación orientado a determinar la incidencia de la imposición de la pena en el ilícito de receptación en Cuzco; concluyéndose que la imposición de la pena en el delito de receptación, incide directamente aquellos que han recibido o adquirido bienes de procedencia ilícita, el cual se tenía pleno conocimiento, o mininamente debían presumir la procedencia ilícita de estos, dada las características en cómo se han adquirido o recibido los bienes.

Lozano (2019), realizó un trabajo de investigación orientado a sugerir la modificación del texto normativo de la receptación, con el fin de configurar la “culpa” como elemento subjetivo en el delito de receptación; concluyendo que la “culpa” como elemento subjetivo tiene una presencia relativa en el delito en mención, ya que la redacción del art. 194 del C.P. se encuentra la frase “debía presumir”, es por ello que, es necesario su modificación. En ese sentido, la influencia de la culpa en el delito de receptación, se evidencia en la “ausencia de intención en la comisión del delito”, manifestado en la frase “debía presumir”, la cual sería un “forma culposa” en la comisión de este ilícito penal.

Mendoza (2020), realizó una investigación en donde se orientó a establecer si el “debía presumir” como elemento de la tipicidad subjetiva en la receptación está constituido por “elementos volitivos”; concluyendo que únicamente se imputara a título “doloso” la conducta ilícita de receptación, cuando el “debía presumir” se asuma como un dolo eventual, esto es, desde la perspectiva de una concepción normativa (solo conocimiento), con la finalidad de evitar un “error de tipo”, o desconocer “algún elemento de la tipicidad objetiva y subjetiva” del delito de receptación.

2.1.2. ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Meini Méndez (2005), realizó un artículo especializado, sobre el delito de receptación, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema; concluyendo que la receptación sustitutiva y en cadena están debidamente tipificada en el artículo 194

del C.P., entonces, no se asumirá que la “receptación sustitutiva” a penas se encuentra tipificada. En ese sentido, al asumirse este criterio establecido en la ejecutoria suprema N° 2607-2004, se debe descartar de plano la existencia de figura penal de “receptación sustitutiva”, y, consecuentemente, se podría afirmar que todo testaferro, que desee permanecer en la impunidad, debe recurrir a esta ejecutoria; dando lugar a un gran debilitamiento de la lucha contra la corrupción.

Bosch Sacramento (2017), realizó un artículo jurídico denominado “Receptación, encubrimiento real y blanqueo: Repercusión sobre la economía”, concluyendo que las conductas de receptación y blanqueo, están afectando directamente a la libre competencia del mercado, debido a la introducción de bienes de procedencia ilícita al sistema económico, generando un status de privilegio o preeminencia al delincuente respecto a los demás operadores económicos.

Chavez Moreno & Garcia Portilla (2013), realizó un trabajo de especialización en derecho penal sobre la receptación en Colombia, concluyendo que el delito de receptación genera consecuencias negativas en el país, logrando afectar a varios sectores de la economía, que son vitales para el desarrollo socioeconómico de la población. En ese sentido, este delito contra el patrimonio ha dado lugar a la aparición de organizaciones delincuenciales y criminales, las cuales se han implementado diversas modalidades aún más peligrosas y evasivas para la justicia penal.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. EL DELITO DE RECEPTACIÓN

2.2.1.1. Evolución Histórica

El antecedente legislativo de la receptación reside en el artículo 243° del Código Penal, bajo la denominación de “encubrimiento”. Es necesario precisar que en este tipo penal se consideraba tanto la “receptación” como el “favorecimiento”, conforme a lo regulado

en los códigos penales de Argentina y Uruguay, así como, el proyecto de soler de 1979 (art. 335 y ss.), e, “incluso la figura penal del favorecimiento era regulada en una sección o apartado diferente a la patrimonial, como ocurrió en el Código Penal de 1924” (Peña Cabrera Freyre, 2019). Al respecto, Rio (2004), manifiesta que “la distinción de estas figuras penales se basa en que el primero (la receptación) es el género, y la segunda la especie (una modalidad delictiva)” (p. 199).

Posteriormente, en el año 1991, “se deja de considerar a la receptación como un tipo de encubrimiento, y, se le denomina a esta última figura penal como delito de favorecimiento, superándose las dificultades en su denominación” (Tomas Aladino Galvez, 2012).

La existencia legislativa de la receptación reside en que el pensamiento del legislador es convencer a la comunidad o ciudadanía de que los hechos o conductas delictivas que atente al patrimonio de las personas (específicamente al hurto y robo de celulares), serán sancionadas, y, entre ellas se encuentra como conducta prohibida la de adquirir o tener bienes muebles de procedencia ilícita.

2.2.1.2. Concepto

Según, Rio (2004), “la receptación supone que el autor toma posesión de un bien de origen ilícito” (p. 123). En ese sentido, en la receptación se sanciona conductas, consistentes en ayudar, contribuir o recibir bienes de origen delictivo, esto es, no contribuyen en la comisión o ejecución del delito previo, como hurto, robo o estafa” (Cortina Cadenas, 1992, p. 43).

En ese sentido, para Pumpido (1955), será autor del delito de receptación “quien, con aminor de lucrarse y sabiendo de la ejecución de un delito patrimonial, pero que no haya intervenido en su ejecución, ayuda a los responsables a poder aprovecharse, o, recibe, adquiere u oculte los efectos del mismo” (p. 224).

Según, Muñoz (2012), sostiene que “el motivo para criminalizar la receptación se

fundamenta en que el autor apoya a otro a beneficiarse de las consecuencias del delito que ha intervenido, por cuanto, al receptor paga al autor del delito previo a cambio de ellos” (p. 189).

2.2.1.3. Naturaleza Jurídica

De acuerdo a la “tesis de la dependencia”, la naturaleza jurídica de la receptación se puede justificar en que “la receptación está condicionada a la relación de un delito anterior o previo”. En ese sentido, para la configuración de la receptación debe haberse cometido previamente un delito precedente, en donde se obtuvo el bien mueble de manera ilícita. Y, conjuntamente a ello, el que adquiere el bien (mueble) tiene conocimiento de su procedencia delictiva, o, dada la forma o circunstancias de su adquisición pudo haber presumido su procedencia ilícita.

Según, Reategui (2015), “tratándose de la tesis de la autonomía, se basa en que el objetivo para sancionar la receptación como un delito es de político criminal, cuya finalidad es evitar a futuro un beneficio de los bienes de procedencia ilícita” (p. 423).

2.2.1.4. Estructura Típica

2.2.1.4.1. Bien Jurídico Protegido. –

Existen diversas teorías que explican el contenido del bien jurídico protegido en el delito de receptación, las cuales son:

A. Teorías que consideran al patrimonio como bien jurídico

A.1. Teoría del Mantenimiento de la ilicitud. -

En esta teoría la receptación “implica una situación antijurídica previamente lesionada, entendiéndose que el autor retira la capacidad de disposición del titular” (Reategui Sanchez, 2015, p. 420), consecuentemente, no puede usar, disfrutar y disponer el bien de su propiedad a su conveniencia.

Se considera que, mediante esta tesis, se favorece a conservar una situación antijurídica producida por un delito precedente (hurto, robo o estafa), consecuentemente, produciéndose una nueva afectación al bien jurídico protegido, o, manteniéndose una “situación lesiva”, ya que, se impide, restringe o reduce las posibilidades de vuelta al estado patrimonial lícito originario.

A.2. Teoría del Aprovechamiento

Según, Reategui (2015), en esta teoría “el delito de receptación, implica a favor del receptor un aprovechamiento de la comisión del ilícito previo, a través de la obtención de un beneficio económico” (p. 421).

Según, Armaza & Zavala (1999), la Sala Mixta de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, adopto esta teoría, mediante la sentencia del Exp. N° 371-1998.

B. Teoría que considera como bien jurídico a la administración de justicia

Según, Reategui (2015), “en este delito la administración de justicia es el bien jurídico protegido, ya que, implica la obstaculización de la acción de la justicia, ya que, impide la localización de las pruebas (bien) del delito previo” (p. 422), consecuentemente, impide la restitución del bien a su titular legítimo, que sería la víctima del delito previo.

Por otro lado, Fernández (1991), nos dice que:

Para tipificación de la receptación, se requiere los siguientes presupuestos: i) la comisión previa de un delito que afecte al bien jurídico “patrimonio”; ii) el autor no debe haber intervenido o participado en el delito previo; iii) pleno conocimiento de la realización de un ilícito previo, o presumir que el bien es de procedencia ilícita. (p. 483).

Por lo tanto, considero que “en el delito de receptación, la conducta lesiva está orientada a mantener indefinidamente la lesión al bien jurídico patrimonio, por cuanto, se le priva al propietario su derecho de disponer del bien”.

2.2.1.4.2. Tipicidad Objetiva. –

Autores como Cabrera (2019), indican que “no necesariamente los bienes receptados provengan de un robo o hurto, sino, también pueden provenir de ilícitos de carácter económico, entonces, los bienes receptados pueden proceder de delitos de infracción de deber (malversación de fondos, peculado, concusión, etc.)” (p. 118)

Lo afirmado por este jurista, de cierta manera no se refleja o ajusta a la finalidad por la cual fue creado el tipo penal de receptación, por cuanto, tiene como objetivo o fin, de poder persuadir a los ciudadanos, de “no recibir en cualquier título posesorio” (adquisición, donación, prenda, entre otro) algún bien de dudosa reputación, de lo contrario será sancionado penalmente con una pena privativa de libertad. En ese sentido, como parte o plan de la estrategia política criminal, para combatir el mercado negro o informal de objetos hurtados y robados, el legislador peruano crea este tipo penal, ya que, si no existen ciudadanos que compren objetos de dudosa procedencia, no se promueve o fomenta la realización delitos patrimoniales.

2.2.1.4.2.1. Sujeto Activo. –

Según, Peña (2019), “no tiene cualidad o condición especial, entonces, puede ser cualquier persona, sin embargo, no debió intervenir de ninguna manera en la ejecución del delito antecedente, de lo contrario se estaría penalizando conductas posteriores a la ejecución del delito” (p. 111).

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, mediante el Recurso de Nulidad N° 937-2018, Lima Norte, se estableció que: “no existe

complicidad post consumativa”. Así mismo, en el Recurso de Nulidad N° 658-2010, Piura, se menciona que “el autor no debió haber intervenido de ninguna manera en la ejecución del delito antecedente”.

Por lo tanto, el autor en la receptación, no debe intervenir o debió haber intervenido en el delito previo.

2.2.1.4.2.2. Sujeto Pasivo. –

Según, Peña Cabrera (2019), “es toda persona, que, como propietario o poseedor, ha sido privada de su derecho, esto es, ha sido desposeída” (p. 112).

2.2.1.4.2.3. Objeto del delito. -

La doctrina mayoritaria, considera que en este delito, el objeto (bien receptado) debe ser un “bien mueble”, cuya procedencia es de un delito contra el patrimonio. Al respecto, Cabrera (2019), nos dice que “la comisión de un delito precedente, se constituye como presupuesto necesario en el delito de receptación, entonces, ante la imposibilidad de poder acreditar la preexistencia de la cosa en el delito antecedente, no se podría tipificar el delito de receptación” (Peña Cabrera, 2019, p. 202).

Así mismo, Vargas (2000), manifiesta que “es importante un delito antecedente para demostrar el delito de receptación, ya que, los bienes adquiridos son de procedencia u origen ilícito” (p. 303). En ese mismo sentido, Reategui (2015), precisa que: “tratándose de procesos penales, cuya imputación sea el delito de receptación, debe necesariamente declararse la pre existencia de hechos ilícitos como constitutivos de un delito antecedente, sin importar la forma o circunstancias de su realización” (p. 425).

En resumidas palabras, el objeto del delito pueden ser bienes muebles de

fácil apoderamiento como: equipos tecnológicos (celular, televisor, entre otros), auto partes de vehículo (moto lineal, auto, entre otros), así como, dinero, cheques, tarjetas de crédito o débito, y otros documentos de estimación económica.

2.2.1.4.2.4. Comportamiento típico

Según, Armaza & Zavala (2019), “en la jurisprudencia peruana se plantea como elemento objetivo la existencia de un delito precedente, siendo necesario acreditar la preexistencia del bien en el delito previo, de lo contrario se procederá a absolver al acusado” (p. 202).

Por otro lado, Rojas (2000), afirma que “es requisito obligatorio para corroborar (probar) la comisión del delito de receptación, la existencia previa de un delito contra el patrimonio, por cuanto, los bienes recibidos por el receptor deben ser de origen ilícito” (p. 303).

Para, Peña Cabrera (2019), también se podrá configurar la receptación, “a pesar que quien recepte es inimputable, ya que, la reacción punitiva de quien entrega (en el presente caso un inimputable) el bien ilícito, no es un dato que repercuta en la imputación delictiva de la receptación” (p. 114).

Por otro lado, Salinas (2015), nos indica que “es irrelevante si en el delito previo, el autor fue denunciado o sentenciado, o, la acción penal a prescrito” (p. 243).

2.2.1.4.2.5. Modalidades típicas

El adquirir debe entenderse como “la acción de apropiarse una cosa o un derecho de manera onerosa o gratuita” (Real Academia Española, 2020), como sería la compra de un celular, televisor, entre otros. Por ejemplo: Se adquiere un bien mueble (como un celular), conociendo su procedencia (naturaleza) delictiva.

El recibir es el acto de agarrar, tomar, apropiarse o hacerse cargo de un objeto o cosa. Por ejemplo, coger un celular, televisor, entre otros. Por ejemplo: Se recibe un bien, conociendo su procedencia (naturaleza) delictiva.

La donación es el acto de liberalidad de una persona que transfiere a título gratuito a otra persona, quien la acepta. Por ejemplo: Se acepta o recibe la donación, conociendo la procedencia (naturaleza) delictiva del bien.

La prenda, consistente en que una persona entrega físicamente un bien mueble con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación crediticia. Por ejemplo: Se acepta o recibe en prenda un bien mueble, cuya procedencia (naturaleza) delictiva se conoce.

El guardar, “significa recibir un bien para depositarlo por un tiempo determinado, con el fin de cuidarlo o custodiarlo, asumiendo la obligación de devolverlo, cuando se lo soliciten” (Freyre L., 1986). En ese sentido, Tomas Aladino (2012), considera que “es un típico ejemplo de posesión temporal, que implica el deber de entrega o devolución” (p. 79). Por ejemplo: Se guarda un bien, conociendo la procedencia (naturaleza) delictiva del mismo.

El esconder, constituye un acto de ocultamiento, consistente en poseer un objeto y ocultarlo. Por ejemplo: Se esconde un bien, conociendo su origen ilícito.

El vender, es un acto de transferencia con fines lucrativos, esto es, se transfiere la propiedad o titularidad del bien a cambio de una contraprestación dineraria, previamente acordada. Por ejemplo: Se vende un bien, conociendo la procedencia (naturaleza) delictiva del mismo.

Ayudar a negociar, significa intervenir como mediador entre el poseedor

del bien y otra persona. Por ejemplo: Se ayuda a vender un bien, en condición de mediador, conociendo la procedencia (naturaleza) delictiva del mismo.

2.2.1.4.3. Tipicidad Subjetiva. –

Según, Reategui (2015), en la configuración del aspecto subjetivo en este delito, existe dos niveles: i) conocer la realización de un delito anterior o antecedente, el cual constituye un “elemento normativo”; ii) el aprovechamiento del bien de procedencia ilícita, ya sea, un disfrute personal, o, su utilización por terceras personas, o, un lucro económico u oneroso, etc.

Por otro lado, Siccha (2015), manifestó que: “el elemento subjetivo esta conformado por un conocimiento cierto o haber presumido la procedencia ilícita del bien” (p. 425).

Por lo tanto, el aspecto subjetivo se tiene un pleno conocimiento de la existencia de un delito precedente, o debió presumir su ilicitud, debido a las circunstancias externas que concurren, como sería concurrir a un lugar de duda reputación, o, comprar un bien de exiguuo valor comercial, o, que no se entregue algún documento que demuestre la titularidad del bien.

2.2.2. CRITERIOS JURÍDICOS-DOCTRINARIOS DE LA POSESION Y LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL POSEEDOR, EN EL DERECHO CIVIL PERUANO

Para abordar los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, es necesario abordar ciertos aspectos teóricos-doctrinarios sobre la posesión; con la finalidad de analizar las “presunciones legales en el derecho de posesión”, lo cual constituye la temática investigativa de la presente tesis.

2.2.2.1. Concepto

Desde una perspectiva jurídica, “es un derecho real en razón de su cualidad, naturaleza y dimensión” (Varsi Rospigliosi, 2019, pág. 26). En ese sentido, Villena (1994), afirma que “la posesión es un aprovechamiento factico o jurídico, del valor de uso o disfrute de la cosa” (p. 278).

La posesión como derecho real se ejercitará cuando el titular de tal derecho, realice ciertos actos sobre la cosa, como sería el uso o disfrute.

Según, Musto (2007), “la posesión es la relación entre una persona con la cosa, prescindiéndose de la existencia de una relación jurídica, permitiendo a quien tiene la cosa de realizar ciertos actos materiales sobre esta” (p. 140-141).

2.2.2.2. Definición

Para Cervantes (2012), “consiste en usar el derecho de propiedad, prescindiéndose si quien lo ejerce como propio sea el titular de dicho derecho” (pp. 27-28). En ese sentido, Gama (2011), considera que “es la utilización de un objeto, susceptible de apropiación, esto es, se trata del dominio material realizado en nombre propio, y, que goza de cierta independencia” (p. 75).

Por otro lado, Gonzales (2013), afirma que “es la dirección o dominio autónomo y voluntario de la cosa, orientado a tenerlo en su beneficio propio, esto es, para sí mismo, con cierta permanencia, en aras, de usarlo y disfrutarlo” (p. 413).

2.2.2.3. Características

Según, Varsi Rospigliosi (2019), son: “constituye un poder de hecho; es un derecho real; genera independencia en las relaciones posesorias; recae sobre objetos materiales o derechos; tiene protección legal; se puede tener o no el bien; y, tiene funciones (protección y publicidad)” (pp. 29-30).

2.2.2.4. Teorías

Según, Lama More (2012), “existen criterios discordantes respecto a la posesión,

surgiendo las siguientes interrogantes: ¿Quién tiene la posesión? ¿Sera poseedor quien ejerce de modo directo o indirecto la posesión, a pesar que no sea titular del derecho?” (p. 50)

Debido a las discrepancias respecto a la posesión, surgen ciertas teorías orientadas a dar una respuesta concreta a las interrogantes planteadas o en todo caso explicar en torno a la posesión. Siendo ello así, Varsi Rospigliosi (2019), nos dice que “surgen las teorías de los juristas alemanes: Karl Von Savigny (1779 - 1861) y Rudolf Von Ihering (1818 - 1892), planteando concepciones jurídicas discrepantes sobre la posesión; posteriormente surgió una teoría ecléctica, representado por Raymond Saleilles (1855 - 1912)” (p. 39).

A. Teoría subjetiva

El responsable de plantear esta teoría es el jurista alemán “Karl Von Savigny”.

Para esta teoría, para la posesión de la cosa no solo basta su detentación, sino, que es necesario conjuntamente el “animus domini” o “voluntad posesoria”. En resumidas palabras, esta teoría exige la concurrencia de un elemento material (detentación de la cosa) y un elemento intelectual (intención de tener la cosa como propia).

Al respecto, Varsi Rospigliosi (2019), nos dice que:

Es necesario distinguir el poseer en “nombre propio” y en “nombre ajeno”. La primera, se basa en el “animus domini”, que es la intención o voluntad de poseer o detentar la cosa en su nombre propio, con la finalidad de usarla, gozarla o disfrutarla como propia, por ello, se dice que es “la intención de actuar como propietario”. En cambio, la segunda se basa en el “animus rem sibi habendi”, que es “la voluntad de poseer para sí, y, actuar como

si fuera el titular o propietario de la cosa”. (p. 32)

Esta teoría es criticada, debido a que un arrendatario, usufructuario, comodatario o depositario, no tienen la cualidad de poseedores, a pesar de ostentar la cosa con “justo título” (contrato), por cuanto, carecen de la intencionalidad de tener la cosa como suya, en cambio, en virtud de esta concepción, si serían poseedores el que se apropió ilegalmente de la cosa (ladrón o invasor), ya que, actúan como dueño de la cosa, a pesar que es evidente la ausencia de titularidad sobre la cosa poseída.

B. Teoría objetiva

Esta teoría es elaborada por el jurista alemán Rudolf Von Ihering, a través de su obra, que se orienta a criticar a la teoría objetiva de Von Savigny.

Mediante esta teoría se argumenta que “la posesión es tener físicamente el bien”, esto es, “solo es suficiente el hecho de tener la cosa”. Esta teoría, se basa en el denominado “corpus”, consistente en el vínculo exterior de la persona (poseedor) con la cosa, el cual genera un “dominio” o “control” sobre la cosa. Por ende, en esta teoría, para ser considerado poseedor, es intranscendente la concurrencia de voluntad o intención de tener la cosa como suya.

Por otro lado, es necesario manifestar que nuestro Código Civil de 1984, define a la posesión como “*el ejercicio de hecho de uno o más poderes a la propiedad*” (art. 896). Conforme a la redacción de este dispositivo legal, se asume esta teoría, ya que, se define a la posesión como “la relación fáctica entre el tenedor con el bien, prescindiéndose de la intención de actuar como propietario (animus)” (Varsi Rospigliosi, 2019, pág. 33).

La crítica que ha recibido esta teoría, se deba a la ausencia de un pronunciamiento para diferenciar “la posesión” y “la detentación”.

C. Teoría Mixta

Esta teoría es básicamente la fusión de la teoría objetiva y subjetiva, esto es, se orienta a conciliar ambas teorías. Siendo lo característico de esta teoría ecléctica, que el elemento determinante en la posesión es “más la tenencia que la intención de tener u ostentar la cosa”.

2.2.2.5. Naturaleza

Para los romanos “la posesión es un hecho, por ello, Papiniano, aseveraba: *possession plurium facti habet*, esto es, la posesión tiene mucho de hecho” (Musto Nestor, 2007, pág. 167). Se menciona que dicho criterio es compartido por el jurista alemán Von Savigny; sin embargo, Musto (2000), afirma que “el maestro alemán Savigny, consideraba a la posesión tanto un hecho como un derecho” (p. 167), ya que, “se fundamenta en una situación fáctica con efectos jurídicos, como la usucapión y acciones posesorias” (Varsi Rospigliosi, 2019, pág. 36). Por ende, de acuerdo a esta concepción, la posesión está conformada por: “el animus” y “el corpus”.

Por otro lado, Von Ihering considera a la posesión como un derecho, ya que, “se justifica esencialmente como el medio imprescindible para que la propiedad pueda producir resultados prácticos” (Musto Nestor, 2007).

A pesar que cierto sector mayoritaria de la comunidad jurídica considera a la posesión como un derecho, aún existe la discusión, respecto a si se trata de un derecho real o personal.

Para, Musto (2000), “la posesión no puede ser concebida como un derecho, por cuanto, un derecho no es la conexión entre una persona y la cosa, entonces, es un hecho legal o jurídico, en la medida que origina facultades, que necesitan protección jurídica” (p. 170).

Según Varsi (2019), “existen ciertas tendencias doctrinarias, que consideran a la

posesión no como un hecho ni como un derecho, sino como un bien jurídico tutelado, un derecho real provisional accesorio, una actitud o un derecho subjetivo” (p. 37).

Según, Maisch Von Humboldt (1984), “es un bien jurídico tutelado la posesión, ya que, es protegido por el derecho positivo” (p. 26), es decir, que como bien jurídico el ordenamiento positivizado garantiza su protección y vigencia. Por ejemplo, la acción reivindicatoria propio de la propiedad daría culminado el ejercicio de la posesión de quien lo tenga, para otorgarlo al real titular del derecho peticionante.

Los que consideran a la posesión como una actitud, se basan desde una perspectiva pragmática, por cuanto, permite al titular de este derecho, poder ejercer uno o más derechos propios de la propiedad, es decir, mediante la posesión se va materializar los derechos derivados de la propiedad.

Según, Lama More (2012), “es un derecho subjetivo, ya que, admite la condición de poseedor al que tiene un bien para sí mismo, a pesar de la ausencia del animus dominio, entonces, se reduce la figura de la detentación como una simple tenencia” (p. 69). Lo dicho por este jurista, se basa en la realización de un análisis sistemático del código civil peruano, mediante el cual se puede evidenciar la fuerte influencia de la teoría objetiva, por cuanto, se establece una distinción entre posesión inmediata y mediata. Por ejemplo, los arrendatarios o comodatarios, a pesar de no tener el “animus domini”, se les reconoce ser poseedores (inmediatos).

La doctrina mayoritaria, considera que el Código Civil de 1984, es claro en definir a la posesión como un “derecho real”, conforme a lo establecido en este cuerpo normativo.

2.2.2.6. Importancia

Torres Vasquez (2010), afirma que “no existe derecho real tan perfecto, directo e inmediato que permita exteriorizar un poder sobre la cosa, como sería la posesión” (p. 349). Al respecto, Varsi Rospigliosi (2019), nos dice que:

La posesión es necesaria en nuestra sociedad moderna, ya que, constituye una actividad humana esencial en el comienzo de la humanidad, que permitió la satisfacción de sus intereses o requerimientos de índole patrimonial. En virtud de este derecho, se garantiza el derecho de goce y uso de los objetos, sin importar quien ostente la titularidad. (p. 38)

Según, Peñailillo Arévalo (2014), “es importante en razón de su dificultad en el ambito juridico, y de los litigios que surgen de ella” (p. 324). En ese sentido, Gonzales Barron (2013), afirma que “existe una gran cantidad de procesos judiciales donde se discute la posesión, lo cual constituye una evidente prueba de la importancia de esta institución” (p. 394).

Para Avendaño (2007), la relevancia de la posesión radica en “ser la esencia de varios derechos reales, como uso, usufructo, servidumbre, habitación y superficie” (p. 896). En cambio, Villegas (2014), indica que “posesión como derecho real, es importante en la sociedad, ya que, recae indirectamente en la posesión de las cosas”.

Independientemente de los criterios descritos en los párrafos precedentes, se comparte el pensamiento del maestro Musto (2007), al afirmar que “la posesión se constituye como el contenido o al menos parte del mismo de los diversos derechos reales, debido a que permite el ejercicio efectivo de los derechos inherentes a la propiedad” (p. 218).

2.2.2.7. Elementos

La posesión está conformada por dos elementos necesarios para constituir la relación posesoria, los cuales son: 1) sujeto y 2) objeto.

A. El sujeto, o, “subjectum” es la persona quien ejerce la posesión, el cual puede ser uno solo (posesión exclusiva) o varias personas (posesión múltiple). Por ejemplo, los cónyuges ejercen de manera conjunta la posesión de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Al respecto Varsi (2019), nos dice lo siguiente:

Los poseedores pueden ser todos los sujetos de derechos como: 1) el concebido, ya que, puede ser un heredero; 2) una persona natural, sin importar su nacionalidad (peruano o extranjero) o capacidad (esto es, puede ser un capaz o incapaz), ya sea en ejercicio de un derecho propio o en representación de un tercero, en calidad de tutor o curador; 3) una persona jurídica, ya que, posee una cosa mediante sus representantes, debidamente designados, que se encuentran en subordinación y dependencia; 4) una entidad no personificada (asociación), que a pesar de no encontrarse inscrita, puede ejercer la válidamente posesión. (pp. 39-40)

Según, Valencia & Ortiz (2012), “el sujeto en la relación posesoria debe tener una capacidad posesoria, entendida como un grado inferior a lo requerido en los negocios jurídicos” (p. 58). Según, Varsi (2019), “hay que diferenciar el ejercicio de la posesión con su disfrute, ya que, la primera se exige una capacidad de ejercicio, en cambio, la segunda solo se necesita una capacidad de goce” (p. 41), es por ello, que los incapaces pueden ejercer directamente la posesión o mediante sus representantes legales (padres, tutor, curador).

B. El objeto, o, “corpus” es la cosa poseída, o a quien recae el acto de la posesión. Pudiendo recaer la posesión sobre “bienes corporales e incorporales”, así como, en derechos (uso, usufructo, habitación, servidumbre, y, superficie).

2.2.2.8. Protección Posesoría

La posesión se encuentra debidamente tutelada por el sistema jurídico civil y el sistema jurídico penal. Esto es, en el derecho civil, la posesión es un “derecho real”, que merece protección legal para su pleno goce y ejercicio, esto es, “se exige normativamente una tutela a la relación posesoria entre el poseedor y el objeto poseído” (Varsi Rospigliosi, 2019, p. 46).

Por lo tanto, el proteccionismo jurídico se basa en proteger a quien ejerce la posesión de cualquier inferencia fáctica de algún tercero, que conlleve a desarmonizar su pleno goce y ejercicio.

2.2.2.9. Clasificación

2.2.2.9.1. Según la Doctrina

A nivel doctrinario existe una variedad de clasificaciones entorno a la posesión. Al respecto, Varsi (2019), nos dice lo siguiente:

La clasificación más importante de la posesión es: 1) ad usucapionem y ad interdicta; 2) legítima e ilegítima; 3) buena fe y mala fe; 4) mediata e inmediata; 5) en nombre propio y en nombre ajeno; 6) viciosa y no viciosa; 7) continua y discontinua; 8) precaria; 9) exclusiva y coposesión; 10) natural y civil; 11) causal y formal; 12) pública y oculta; 13) con justo título y sin justo título. (pp. 48-68)

Para los fines metodológicos del presente trabajo de investigación, teóricamente se abordará determinadas clasificaciones de la posesión, siendo las siguientes:

1) Ad usucapionem y ad interdicta

Respecto a la “ad usucapionem”, Ternera (2015), “el rol legítimo de la posesión es el camino para la usucapión, por cuanto, para que haya usucapión, debe haber posesión previa y continua, en tiempo establecido en la ley” (p. 32). En ese sentido, la usucapio transformara la posesión en propiedad, en la medida que se cumpla los elementos requeridos normativamente.

Para Varsi (2019), “el ad interdicta, se encuentra debidamente protegida por los interdictos, a pesar que la posesión se trate de mala fe e ilegítima” (p. 49).

2) Mediata e inmediata

Sanchez Calero, Moreno Quesada, Gonzalez Porra, & Ossorio Serrano (2018), nos dice lo siguiente:

Esta clasificación es originaria de Alemania, donde la mediación posesoria (posesión mediata) se origina en virtud de una relación jurídica, esto es, cuando una persona, que es titular del derecho, entrega a otra su bien, siendo esta última la nueva poseedora legitimada (esto es, debidamente facultada), durante un tiempo determinado, y, una vez concluido el plazo debe restituir o devolver la cosa entregada. (p. 73)

Según, Varsi (2019), “poseedor mediato, originario o indirecto es quien no tiene el bien en sus manos, más bien, es quien entrega la cosa a favor de un tercero” (p. 56). En ese sentido, la posesión mediata o indirecta “es

la posesión que mantiene quien entrega el bien (esto es, el titular), en virtud de una relación jurídica (contrato de arrendamiento, comodato, entre otros), sin perder el derecho (personal o real) que tiene, o, aparenta tener sobre la cosa” (Sanchez Calero, Moreno Quesada, Gonzalez Porra, & Ossorio Serrano, 2018, p. 73).

Avendaño & Avendaño (2019), indica que:

Tratándose de la posesión inmediata o directa, se debe reunir dos requisitos: temporalidad y la existencia de un título. El primer requisito consiste en que la posesión de la cosa está supeditada a un plazo determinado o determinable, esto es, se va poseer el bien de manera temporal, existiendo la obligación de restituir o devolver la cosa a su legítimo dueño. Tratándose del segundo requisito, el título otorga al poseedor inmediato su legitimidad para poseer la cosa en los términos contractuales pactados, por cuanto, el título crea u origina un vínculo jurídico entre el poseedor inmediato y el mediato, generando derechos (uso y disfrute de la cosa por un cierto tiempo) y obligaciones (devolución de la cosa). (pp. 33-34)

3) Legítima e ilegítima

Según, Varsi (2019), “la posesión legítima se origina mediante un acto jurídico valido, como sería la compraventa, arrendamiento, usufructo, entre otros” (p. 49). En ese sentido, Avendaño & Avendaño (2019), nos dice que “será poseedor legítimo quien tenga derecho a serlo, es decir, la posesión es conforme a derecho” (p. 35).

Para, Pozo Sánchez (2022), “la posesión legítima a diferencia de la ilegítima, esta última tiene una subclasificación: buena fe, mala fe o de otro tipo” (p. 424).

Según, De Vidal (2009), “la posesión ilegítima se caracteriza por la ausencia de título, o, título nulo, o, se adquirió el título de manera insuficiente, o, se adquirió de quien no tiene el derecho real sobre la cosa, o, carece de potestad para transmitirla” (p. 159). En otras palabras, se refiere que la ilegitimidad de la posesión se generaría como consecuencia que el título se adquirió de manera errónea o incorrecta generando su inexistencia, invalidez o ineficacia, como sería adquirir el derecho de posesión a una persona incapaz, o, se adquirió de alguien que ya no es titular de la cosa, por ende, no teniendo legitimidad para disponer.

Por otro lado, Varsi (2019), manifiesta que “la posesión ilegítima deriva de un simple hecho, ya que, no existe derecho que respalde la posesión, entonces, el título es inválido, ineficaz y contrario a la ley” (p. 49). Es por ello que, será poseedor ilegítimo, quien carece de un título válido, por ejemplo, el usurpador, o, el ladrón que se apropia indebidamente de un bien mueble, entre otros.

Por otro lado, Avendaño & Avendaño (2019), nos dice que:

Es poseedor ilegítimo el que no tiene un título para ejercer tal derecho real, es decir, no existe un acto jurídico que le otorgue el derecho a poseer, como sería el usurpador, sin embargo, también, será poseedor ilegítimo quien, teniendo título, este haya vencido o concluido (ya sea, por acuerdo contractual, mandado judicial, u otra circunstancia), así mismo, cuando se encuentre viciado. También, es poseedor ilegítimo, quien le haya otorgado el título no tiene las facultades para hacerlo, entonces, el título es nulo. (pp. 35-36)

En ese sentido, Pozo Sánchez (2022), menciona que:

Sin perjuicio de lo establecido por la Corte Suprema, considero que los supuestos de posesión ilegítima son un “numerus apertus”. Así mismo, es necesario mencionar que se dará una “ilegítima posesión”, cuando: i) inexistencia de un título; ii) el título es inválido o viciado (nulo o anulable); iii) quien otorga el derecho no tenía el poder

Por lo tanto, la ilegitimidad de ejercer la posesión consiste en ejercerla en contravención con el sistema jurídico civil y el sistema jurídico penal (como es el caso de los que cometen usurpación, hurto, abigeato, estelionato), ya que, se vulnera el derecho del titular.

4) Buena fe y mala fe

Para Varsi (2019), “es una de las más importantes clasificaciones existentes, ya que, proviene de la posesión ilegítima” (p. 50). Al respecto, Gomes (2012), manifiesta que “la presencia o ausencia de un vicio nos permitirá diferenciar si estamos ante una posesión de buena fe o de mala fe” (p. 49).

Avendaño & Avendaño (2019), afirma que:

Ante la presencia de un “poseedor ilegítimo”, es necesario saber si es de buena o mala fe, ya que, el primero ignora o desconoce la ilegitimidad de su derecho a poseer, en cambio, el segundo, tiene pleno conocimiento, o, la posibilidad de conocer sobre la ilegitimidad de su derecho a poseer.

Por otro lado, Musto (2007), indica que:

Puede ser “buena fe” o “mala fe” la posesión. Siendo ello así, el primer supuesto será, cuando esté convencido por error o ignorancia, sobre la legitimidad de su derecho a

poseer, esto es, no solamente a la validez y existencia del título posesorio, sino, también a la forma o modo que se adquirió (acto de transferencia o transmisión del derecho). (p. 184)

Del Vidal (2009), indica que “se podrá calificar como tal al poseedor de buena fe cuando haya actuado diligentemente” (p. 160); siendo ello así, se podría asumir que tanto el error y la ignorancia serán excusables en la medida que el poseedor habría actuado diligentemente para conocer la “situación fáctica y jurídica” del bien que se pretende poseer.

Sanchez, Moreno, Gonzalez & Ossorio (2018), manifiestan que “será poseedor de mala fe, quien tiene conocimiento de la irregularidad de su posesión, es decir, es consciente de su falta de titularidad del derecho que aparenta tener, ya sea, por inexistencia del título, o, este viciado, o es insuficiente” (p. 76).

5) En nombre propio y en nombre ajeno

Según Varsi (2019), “por regla general, posesión inmediata es lo mismo que posesión en nombre propio, sin embargo, existe casos, donde el poseedor en nombre ajeno es un poseedor inmediato” (p. 63).

Sanchez, Moreno, Gonzalez & Ossorio (2018), indican que:

En la posesión en “nombre propio” el poseedor actúa para sí mismo, esto es, ejerce la posesión por su cuenta y en su nombre; en cambio, “en nombre ajeno” es ejercida por una persona en nombre de quien tiene o disfruta el bien o derecho (posesión), generando un actuar por cuenta de un tercero, esto es, es el ejercicio de un poder que refleja sus efectos en una esfera legal distinta de quien lo ejercita,

pudiendo ser un gestor, representante o instrumento de la posesión de otro. (p. 75)

6) Viciosa y no viciosa

Según Varsi (2019), “la posesión no solo puede ser obtenida de manera lícita, sino también ilícitamente, donde la primera se justifica en la ley, en cambio, la segunda contraviene la ley (usurpación, hurto o robo)” (p. 63). Al respecto, Sanchez, Moreno, Gonzalez & Ossorio (2018), indica que “estamos ante una posesión viciosa cuando se adquiere con ausencia de voluntad o contra la voluntad del poseedor legítimo, mediante la clandestinidad o violencia (inmuebles), o, de un acto de despojo (tratándose de bienes muebles” (p. 78).

Por otro lado, Musto (2000), nos dice que:

La posesión de mala fe se clasifica en: simple y viciosa, donde esta última puede afectar a bienes muebles e inmuebles. Tratándose de la “mala fe simple”, el poseedor vicioso carece de las acciones posesorias, por ello, es responsable de indemnizar los daños y perjuicios que ocasione a la cosa poseída, así como, no se le llegue a reconocer los gastos y/o mejoras efectuadas sobre la cosa poseída; en cambio, será una “mala fe viciosa” cuando los “bienes muebles” son adquiridas u obtenidos mediante el hurto, estelionato o abuso de confianza, y, tratándose de adquisición de los “bienes inmuebles”, es a través de la violencia o clandestinidad. (p. 238-241)

De acuerdo a lo indicados por los autores mencionados, los vicios de la posesión estarían clasificadas de la siguiente manera:

- i) **Violencia.** - puede ser “física” o “moral”, la cual es ejercida sobre una persona (puede ser el dueño, o, un tercero), con la intención de despojarle la cosa. Considero que este vicio, puede recaer en cualquier tipo de bienes (muebles e inmuebles), por ejemplo: como sería el robo (bienes muebles), y, usurpación (bienes inmuebles).
- ii) **Clandestinidad.** - consiste en tomar la posesión del bien de manera oculta o ante la ausencia del poseedor legítimo (tratándose de inmuebles), o, se tomó las precauciones necesarias para sustraer la cosa del dominio del poseedor legítimo (tratándose de muebles), con la finalidad que desconozca de esta situación, y no pueda oponerse. Por ejemplo: i) puede usurparse un bien inmueble cuando su poseedor se retira del mismo, y, ante su ausencia se toma la posesión de la cosa; ii) sería el caso de un individuo, que ante la “ausencia del poseedor”, aprovecha para sustraer su celular, bicicleta, o moto lineal.
- iii) **Abuso de confianza.** – es cuando se transfiere la posesión a una persona, con la condición de devolver el mismo en un tiempo o plazo determinado, sin embargo, una vez que se ha cumplido el tiempo para su devolución este se niega hacerlo. Por ejemplo: cuando el comodatario se entrega a devolver el bien inmueble al comodante. Siendo ello así, ante esta situación surge la figura del precario.

2.2.2.9.2. Según el Código Civil

Nuestro Código Civil vigente en su capítulo tercero del Título I (sobre la Posesión) de la sección Tercera (sobre los Derechos reales principales), establece una clasificación de la posesión, siendo la siguiente: i) Posesión inmediata y mediata; ii) Posesión ilegítima de buena fe; iii) Posesión precaria.

De acuerdo a la redacción de la normativa civil, sobre la clasificación de la posesión, no se hace expresamente una clasificación diferencia entre “legítima” e “ilegítima”, así como, si esta última es de “buena fe” o “de mala fe”. Es por ello que, algunos juristas consideran que dicha distinción se encuentra implícita en el Código Civil, debiéndose recurrir a la doctrina para conocer la distinción de las mismas.

Para los fines esenciales del presente trabajo de investigación se tomará la siguiente clasificación: i) Posesión legítima e ilegítima; ii) De buena fe y de mala fe. Esto se debe, que trataremos de abordar desde una concepción civilista, las siguientes interrogantes: ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien, sabiendo que no es de su titularidad?, ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien, desconociendo que quien le entrego o transfirió el bien, no es el titular legítimo o dueño? ¿Cuál es el modo en que se debe adquirir la posesión de un bien, para que sea considerada legítima? ¿En qué forma o circunstancias se debe adquirir la posesión de un bien, con la finalidad de asumir que su posesión, a pesar que es ilegítima es de buena fe?

Todas estas preguntas formuladas, serán respondidas oportunamente en el siguiente capítulo a tratar, denominado: “Los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el contexto de la presunción de ilicitud del bien”.

2.2.2.10. Formas de adquisición

Según, Varsi (2019), “se puede adquirir la posesión de diversos modos o maneras, a través de actos o hechos (reales o simbólicos) que impliquen una manifestación del poder que tiene el sujeto (poseedor) sobre la cosa” (p. 90).

Sanchez, Moreno, Gonzalez, & Ossorio (2018), manifiestan que:

La posesión se puede adquirir de manera originaria o derivada, donde la primera se realiza mediante un acto unilateral del adquirente y sin la intervención de un poseedor anterior; en cambio, la adquisición derivada es a través de la intervención de un poseedor anterior o precedente, en virtud de la cesión o transferencia. (p. 83)

Para Varsi (2019), “adquirir la posesión de forma derivada puede ser por tradición real o tradición ficta, en cambio, la adquisición originaria es a través de la aprehensión, la ocupación o despojo” (pp. 91-101). Al respecto, Musto (2000), nos dice que “la posesión se puede adquirir mediante la ocupación, tradición, “traditio brevi manu”, “constituo posseorio”, y, mediante un representante” (p. 249).

a) La ocupación. – en términos generales es entendida como “el modo natural y originario de adquirir la propiedad de ciertas cosas carentes de dueño” (RAE, 2022). Sin embargo, en términos jurídicos se consideraría como la forma de adquirir la posesión, teniéndose en cuenta que nuestro sistema jurídico civil, no admite la adquisición de bienes inmuebles mediante la institución de la “res nullius”, sino tan solo para los bienes muebles.

Al respecto, Varsi (2019), nos dice que “únicamente es aplicable a los inmuebles, que estén vacíos y sin poseedor” (pp. 101-102). En cambio, Musto (2007), considera que “es una manera unilateral de adquirir la posesión de bienes, sin hacer distinción que se trate de muebles o inmuebles, así como, no interesa que se encuentren en posesión de otra persona o tenga dueño” (p. 202), es decir, mediante la ocupación se puede obtener la posesión de un bien o cosa a pesar de la falta o ausencia de consentimiento del titular del derecho real (poseedor inmediato o propietario).

Sanchez, Moreno, Gonzalez, & Ossorio (2018), afirman que “es un acto

unilateral de quien adquiere, consistiendo en la aprehensión física o material de la cosa, siendo irrelevante para efectos de la adquisición, que pertenezca a una persona, ya sea en calidad de dueño o poseedor directo” (p. 82).

Así mismo, Musto (2007), nos dice que “esta manera de adquirir la posesión (ya sea de una cosa mueble e inmueble) está afectada a un vicio” (p. 203), que se le denomina en la doctrina como “posesión viciosa” o “mala fe viciosa”, que puede recaer sobre los “bienes muebles” (cuando son adquiridos mediante un abuso de confianza, hurto, robo, estelionato o estafa) y “bienes inmuebles” (cuando son obtenidos mediante la violencia o clandestinidad).

b) Aprehensión. – consiste en agarrar o coger una cosa mueble. Al respecto, Musto (2007), nos dice que:

Es el elemento material más común o simple para adquirir una cosa (ya sea mueble e inmueble), sin embargo, también debe concurrir la intención de ostentar la cosa como propia, de lo contrario sería una mera aprehensión propia de un detentador, y no de un poseedor. (p. 199)

Por otro lado, Varsi (2019), nos dice que “también es conocida como apropiación, y únicamente es aplicable para los bienes muebles que no tienen poseedor” (pp. 100).

Desde mi perspectiva, considero que esta forma de adquirir la posesión únicamente debe ser aplicable para los “bienes muebles”, descartándose a los bienes inmuebles, ya que, se puede ser poseedor de un bien inmueble sin necesidad de la aprehensión, conforme se indicara más adelante.

c) Despojo. – es entendida como “privar a una persona de lo que tiene y goza,

esto es, desposeerlo mediante la violencia” (RAE, 2022). En ese sentido, Varsi (2019), indica que “implica una expoliación” (p. 101), esto es, “despojar algo o a alguien mediante violencia o iniquidad” (RAE, 2022).

- d) Traditio.** – o también, llamada tradición es “una forma de adquisición derivada, consistente en entregar la cosa, que se caracteriza por la existencia de una doble voluntad (transferente o anterior poseedor y el adquirente o el actual poseedor)” (Avendaño Valdez, 2007, pág. 49). En ese sentido, Musto (2007), afirma que “es una forma bilateral de adquirir la posesión, y, solamente mediante actos materiales puede realizarse la misma” (p. 203).

Al respecto, Varsi (2019), manifiesta que:

La tradición puede ser real o ficta. La primera es la entrega física o material de la cosa, esto es, es el desplazamiento de la cosa a favor de otro. Tratándose de la “tradición ficta”, o, llamada “simbólica” o “no efectiva”, consiste en la entrega no física de la cosa, esto es, implica un acto figurado, representativo o simbólico de la cosa, omitiéndose la entrega física o real de la cosa. Sobre esta última, se clasifican las siguientes: i) tradición simbólica (mediante objeto figurado como llaves o títulos), ii) tradición instrumental (mediante documento que acredite la titularidad, como sería un contrato o comprobante de pago), iii) tradición por la vista (mediante imágenes o gestos de la cosa a entregar), iv) tradición entendida (en lugar acordado). Así mismo tenemos la “traditio brevi manu” (la posesión se transforma en propiedad) y la “constitutum possessorium” (la propiedad se transforma en posesión).

2.2.2.11. Presunciones en el derecho de posesión

Las presunciones legales rigen en todo el ordenamiento jurídico peruano, esto es, en todas las ramas del derecho. Sin embargo, tratándose de las presunciones en materia civil, específicamente en lo que respecta a las “presunciones posesorias”, se debe tener en cuenta que “se fundamentan en una posesión actual” (Arias Schreiber, 1991, pág. 138), siendo de aplicación para los bienes muebles e inmuebles.

Antes de abarcar las presunciones posesorias se debe indicar que en el derecho existen dos tipos de presunciones: relativa (*iuris tantum*) y absolutas (*iure et de iure*). Donde la primera se admite prueba en contrario, esto es, se puede probar la verdad o falsedad de un hecho, en cambio, la segunda, no admite prueba en contrario. Un ejemplo de **presunción relativa** es “la presunción de propiedad y buena fe del poseedor”, conforme a lo estipulado en el artículo 912 y 914 del C.C.; en cambio, la **presunción absoluta** es “el conocimiento del contenido de las inscripciones en registros públicos” (art. 2012 del C.C.).

Según, Varsi (2019), las presunciones legales posesorias se clasificarían de la siguiente manera: “1) Presunción de propiedad; 2) P. de posesión de derivados (de bienes accesorias y de bienes muebles); 3) P. de buena fe del poseedor; 4) P. de continuidad de la posesión; 5) P. no legisladas (unidad de título, no interrupción, y, de legitimidad)” (pp. 69-79).

Por otro lado, Avendaño V. & Avendaño V. (2019), “el Código Civil peruano contempla cinco tipos de presunciones posesorias: P. de propiedad, P. de posesión de los accesorios, P. de posesión de muebles que están dentro de un inmueble, P. de buena fe y P. de continuidad” (p. 47).

- a) **Presunción de propiedad.** - se encuentra prevista en el artículo 912 del C.C., donde se establece que “se presume como propietario al poseedor de un bien (muebles e inmuebles)”. Sin embargo, “tratándose de bienes

muebles inscritos y de bienes inmuebles, esta presunción no puede oponerse al propietario con derecho inscrito, así como, el poseedor inmediato al mediato” (Avendaño V. & Avendaño V., 2019, pág. 47).

Según, Varsi (2019), “por regla general el poseedor es un propietario, y todo propietario es un poseedor, siendo ello así, la carga probatoria recae en quien no tiene la posesión, esto es, le correspondería al propietario o al demandante” (p. 70). En ese sentido, Villena (1994), afirma que “la posesión al ser una manifestación externa del derecho a la propiedad, entonces, la presunción de propiedad se basa en la publicidad material de la posesión” (p. 327).

La excepción de esta presunción, que se constituye como regla general es poseer sin ser propietario, como es el caso de los arrendatarios y usufructuarios.

Para Maisch (1984), “esta presunción es más intensa, tratándose de los bienes muebles” (p. 27), por cuanto, en virtud de lo establecido el artículo 948 del C.C., *se adquirirá el dominio de un bien mueble, a pesar que el enajenante de la posesión no sea el titular, siempre y cuando, quien ha recibido la posesión del bien mueble “actuó de buena fe”*, sin embargo, están exceptuados de este precepto legal, los bienes perdidos y los bienes adquiridos de manera ilícita.

b) Presunción de posesión de los accesorios. - se encuentra prevista en el artículo 913 del C.C., donde se establece que “la posesión de un bien hace o permite presumir la posesión de sus accesorios”.

Las partes accesorias suelen separarse del bien principal, sin que este último se llegue a deteriorar, alterar o destruir. Al respecto, Avendaño V. & Avendaño V. (2019), indica que “la razón para referirse a las partes accesorias, y, mas no a las partes integrantes, se debe a que estas últimas

son esenciales al bien, debido a su integración” (p. 48), entonces, su separación de la cosa (mueble o inmueble) implicaría un deterioro, alteración o destrucción del mismo.

De acuerdo a este tipo de presunción posesoria, se presume que los accesorios de una cosa (mueble o inmueble) pertenecen a quien se encuentra poseyendo directamente la cosa, esto es, se debe presumir que los accesorias de la cosa poseída son de titularidad de quien ejerce directamente la posesión, ya sea como propietario o poseedor legítimo inmediato. Este criterio, en resumidas palabras se justifica, ya que, la posesión del bien principal implica inevitablemente la posesión de todas sus partes, ya sean accesorias o integrantes.

c) Presunción de posesión de muebles que están dentro de un inmueble. -

se encuentra prevista en el artículo 913 del C.C. Al igual que las partes accesorias, suelen separarse del bien principal (inmueble), sin que este último se llegue a “deteriorar, alterar o destruir”. En ese sentido, tienen cierta individualidad y tienen la posibilidad de ser objeto de algún derecho particular. Por ejemplo: en una casa habitada con artefactos, muebles de madera, entre otros, se presumirá que todas las cosas que forman parte de la casa les pertenece a quien la está poseyendo directamente.

d) Presunción de buena fe. - se encuentra prevista en el artículo 914 del C.C.,

donde se establece que “todo poseedor de un bien debe ser reputado de buena fe, salvo prueba en contrario”. Al respecto, Avendaño V. & Avendaño V. (2019), indica que “este tipo de presunción posesoria aplica para el poseedor *per se*, esto es, al poseedor ilegítimo de buena fe, quien cree en la validez o legitimidad de su título posesorio” (p. 48).

Por otro lado, Linares (2012), manifiesta que “en resumidas palabras, la buena fe de poseer, es el convencimiento o creer tener un justo título para poseer un bien, sin embargo, este es nulo, invalido o inexistente” (p. 196).

Por otro lado, Vieira (2008), manifiesta que “la buena fe posesoria se caracteriza por desconocer que la posesión está violentando el derecho de un tercero (buena fe subjetiva psicológica), y, desconocer sin culpa que el ejercicio de la posesión (ilegitima) está vulnerando derechos ajenos (buena fe subjetiva ética)” (p. 571).

De acuerdo a lo regulado por nuestro vigente sistema jurídico civil, “la buena fe posesoria” se basa en los siguientes preceptos legales:

Art. 906 del C.C.	La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título
Art. 907 del C.C.	La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente o, en todo caso, hasta que sea citado en un proceso, si la demanda resulta fundada

(*) Fuente: Código Civil Peruano

- e) **Presunción de continuidad.** - se encuentra prevista en el artículo 915 del C.C., donde se establece que “si el poseedor vigente demuestra estar ejerciendo la posesión con anterioridad, se debe asumir que está poseyendo en un tiempo intermedio, salvo prueba en contrario”. Al respecto, Avendaño V. & Avendaño V. (2019), indica que “en caso no existiera esta presunción, se le imposibilitaría al poseedor de solicitar en un determinado plazo posesorio una prescripción adquisitiva, ya que, se debería probar que en cada año se ha poseído el bien” (p. 49).

Art.	Texto	Presunción
912	El poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con derecho inscrito.	<i>Iuris tantum</i>
913	La posesión de un bien hace presumir la posesión de sus accesorios. La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él.	<i>Iure et de iure</i>
914	Se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. La presunción a que se refiere este artículo no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona.	<i>Iuris tantum</i> <i>Iure et de iure</i>
915	Si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario.	<i>Iuris tantum</i>

(*) Fuente: Código Civil Peruano

2.2.3. LOS ALCANCES JURIDICOS DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL POSEEDOR DE BIENES MUEBLES, EN UN CONTEXTO DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DEL BIEN

Conforme a lo desarrollado en los capítulos precedentes, se podrá calificar aun poseedor de buena fe como tal cuando este haya actuado diligentemente, es decir, ha tomado las medidas necesarias para conocer la titularidad del bien y sus características. En ese sentido, el error y la ignorancia como vicios de la voluntad posesoria (*animus domini*) serán justificables en la medida que el poseedor ha actuado diligentemente para conocer la situación fáctica y jurídica del bien que pretende adquirir su posesión.

La presunción de buena fe del poseedor se constituye como “un azar de creencia en la licitud de los vínculos posesorios de las cosas ” (Varsi Rospigliosi, 2019, pág.

74), por cuanto, en todo momento se debe presumir, que quien tiene la posesión del bien (mueble o inmueble) ha actuado de buena fe para adquirir la titularidad del “dominio posesorio”, ya sea, como poseedor legítimo o propietario, sin embargo, esta presunción se desvanecerá cuando se trate de bienes perdidos o bienes de origen ilícito.

Cuando se trata de la posesión de bienes de origen ilícito, nos referimos a una posesión viciosa, cuya adquisición se debe a una contravención a la norma, como sería: hurto, receptación, robo, apropiación irregular, estafa (simple o agravada), peculado (doloso o culposos), entre otros.

Tratándose de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en un contexto de presumir la procedencia ilícita del bien, se exige a quien pretende adquirir la posesión de la cosa mueble, deba adoptar las medidas preventivas necesarias para descartar la posible existencia de infracción a la ley penal, esto es, el origen ilícito de la cosa mueble.

En virtud de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, surgen las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien mueble, sabiendo que no tiene justo título para ello, ya sea, como poseedor legítimo o propietario?

Cuando una persona conoce plenamente que la posesión ejercida no tiene justificación legal mediante un justo título, significa que es una “posesión viciosa” o “una posesión ilegítima de mala fe”. Siendo ello así, la persona que está poseyendo un bien mueble, sabiendo que no tiene justo título para ello, será considerada como “un poseedor ilegítimo de mala fe”.

La posesión ilegítima de mala fe de un bien mueble, se puede adquirir: 1) La adquisición de bienes perdidos; 2) La adquisición de bienes que infringen la ley

penal como el hurto, robo, receptación, apropiación ilícita, apropiación irregular, estafa (simple o agravada), peculado (doloso o culposo), entre otros.

2. ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien, desconociendo que quien le entrego o transfirió el bien mueble, no es el titular legítimo o dueño?

Cuando una persona desconoce, ya sea por error o ignorancia, que quien le entrego o transfirió el bien mueble, no es el titular legítimo o dueño, consecuentemente, la posesión que está ejerciendo sobre el bien no tiene justificación legal mediante un “justo título”, significa que estamos ante un supuesto “posesión ilegítima de buena fe”. Siendo ello así, la persona que está poseyendo un bien mueble, sabiendo la situación jurídica del bien mueble poseído, será considerada como “un poseedor ilegítimo de buena fe”.

3. ¿Cuál es el modo en que se debe adquirir la posesión de un bien, para que sea considerada legítima?

Para responder esta interrogante se debe mencionar que “la posesión ilegítima se caracteriza por la ausencia de un título justo, o, existencia de un título nulo, o, se adquirió, de quien no tiene el derecho sobre la cosa, o, carece de potestad para transmitirla, o, de manera insuficiente” (Mariani De Vidal, 2009, pág. 159). Al respecto, Varsi (2019), manifiesta que “la posesión ilegítima deriva de un simple hecho, ya que, no existe derecho que respalde la posesión, entonces, el título es inválido, ineficaz y contrario a la ley” (p. 49).

En otras palabras, se refiere que la ilegitimidad de la posesión se generaría como consecuencia que el título se adquirió de manera errónea o incorrecta generando su inexistencia, invalidez o ineficacia, como sería adquirir el derecho de posesión a una persona incapaz (menor de edad, o, un loco), o, se adquirió de alguien que ya no es titular de la cosa (no ser propietario, o, carecer de facultades especiales para disponer o enajenar).

Por lo tanto, será poseedor ilegítimo, quien carece de un título válido, por ejemplo, el usurpador, o, el ladrón que se apropia indebidamente de un bien mueble, entre otros.

De acuerdo a lo indicado, se adquirirá una “posesión legítima”, cuando “quien entregue o transfiera la posesión sea el titular legítimo o el dueño”, de lo contrario el título posesorio entregado estará viciado, generando su “inexistencia”, “invalidéz” o “nulidad”.

4. ¿En qué forma o circunstancias se debe adquirir la posesión de un bien mueble, con la finalidad de asumir que su posesión, a pesar que es ilegítima es de buena fe?

Se debe tener en cuenta que cualquiera sea la forma o circunstancias en que adquirió la posesión de un “bien mueble”, necesariamente el poseedor debe actuar diligentemente, esto es, debe adoptar las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular). En ese sentido, el error y la ignorancia como vicios que afectan la adquisición de la posesión del bien, serán justificables en la medida que el poseedor haya actuado diligentemente para conocer la situación fáctica y jurídica del bien que pretende adquirir su “dominio” o “posesión”.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

1. METODOLOGÍA

1.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Tipo de investigación

Es básica, por cuanto, se justifica en un aspecto teórico-dogmático, ya que, contribuirá a la comunidad jurídica (específicamente a fiscales, jueces y abogados litigantes), ciertos conocimientos jurídicos sobre cómo se debe presumir la procedencia ilícita del bien en la receptación como delito, sin contravenir la “presunción de buena fe del poseedor de un bien mueble”.

1.1.2. Nivel de investigación

De acuerdo a su alcance es descriptiva simple, por cuanto, se describe académicamente sobre ciertas instituciones del derecho penal, específicamente aspectos de imputación, y de la estructura típica del delito de receptación e identificar los criterios jurisprudenciales que se han aplicado para determinar la consumación (ejecución) de este delito, en el supuesto de “presumir la procedencia ilícita del bien”. Así mismo, instituciones jurídicas sobre el derecho civil, en cuanto a la “presunción de buena fe en la posesión”

1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Es no experimental, de corte transversal, porque “se recolecto varios datos en un momento determinado, con el fin de describir las variables de estudio, así como, analizar su interacción e incidencia, pero sin manipularlas” (Palella & Martims, 2010, p. 104).

De acuerdo a su enfoque es cualitativa, ya que, “no busca un manejo de datos o información consistente en la estadística que permita dar números o cifras” (Barrientos, 2006, pág. 40). Esto es, con la presente tesis, se exploro, describió y

analizo el problema jurídico investigado, el cual es inherente a las ciencias sociales y humanidades, permitiendo desarrollar ciertas capacidades como de observación, análisis y comprensión, utilizando como técnicas e instrumentos lo siguiente: las entrevistas, análisis documental y la guía de observación” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 07).

En ese sentido, se recabo la información mediante la entrevista a especialistas en las materias de derecho civil y penal, para conocer sus perspectivas sobre esta problemática jurídica, esto es, se describió e interpreto los hechos percibidos por las experiencias vividas de los participantes especializados (docentes universitarios, jueces y fiscales, así como, abogados litigantes especializados en derecho civil y penal), la cuales han servido de base para contrastar la hipótesis planteada.

Así mismo, es una investigación cuantitativa, por cuanto se aplicó una encuesta a la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho) con la finalidad de conocer su perspectiva sobre esta problemática de índole jurídica, es decir, lo que se pretendió es conocer: “si consideran al deber de presumir la procedencia delictuosa del bien en el delito de receptación como una afectación a la presunción de buena fe de la posesión de un bien, o, por el contrario, no consideran la existencia de una afectación a dicha presunción civil”.

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

1.3.1. Población

Está conformada por las acusaciones fiscales y las disposiciones de archivo del distrito fiscal de Lambayeque (809 casos del año 2019, y 706 del año 2020), para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor, en el periodo 2019-2020. Así mismo, se tomó como población de estudio para la presente tesis, la opinión de participantes especializados en derecho civil y penal (jueces, fiscales, y abogados litigantes

especializados en derecho civil y penal). Y, conjuntamente para reforzar la investigación realizada, se consideró pertinente la participación (mediante encuesta) de los miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho), con la finalidad de conocer su perspectiva socio-jurídica sobre la problemática investigada.

1.3.2. Muestra

Está conformada por cuatro (04) acusaciones fiscales y nueve (09) disposiciones de archivo del distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor, en el periodo 2019-2020. Así mismo, se tomó como la población de estudio para la presente tesis, la opinión (mediante entrevista) de diez (10) participantes especializados en derecho civil y penal (jueces, fiscales, y abogados litigantes especializados en derecho civil y penal). Y, conjuntamente para reforzar la investigación realizada, se consideró pertinente la participación (mediante encuesta) de cien (100) miembros de la comunidad jurídica chiclayana (conformada por bachilleres y titulados en derecho), con la finalidad de conocer su perspectiva socio-jurídica sobre la problemática a investigada.

1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.4.1. Técnicas

Fidias (2016), indica que “las técnicas a utilizarse dependerán del diseño de investigación, los cuales pueden ser: i) un diseño de investigación documental; o, ii) un diseño de investigación de campo” (p. 70).

La presente investigación tiene un diseño documental y de campo, entonces, se utilizaron las siguientes técnicas: el análisis documental, la observación, la entrevista y la encuesta.

La observación, implica una participación activa del investigador en relación a la problemática que se abordara en el trabajo de investigación. El análisis documental, “permite revisar y analizar las diversas fuentes documentales, como libros, revistas, informes, normas, entre otros, que están relacionadas con la problemática estudiada” (Rodríguez, Gil Flores, & García Jimenez, 1996, p. 04).

La entrevista “es una técnica mediante la cual una persona (llamado entrevistador) solicita cierta información de otra o de un grupo determinado, con la finalidad de obtener datos o información relevante sobre un problema específico” (Rodríguez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996, p. 04). Se aplicará con la finalidad de conocer los diversos criterios y perspectivas de los especialistas en derecho civil y penal, específicamente sobre el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, para efectos de imputar el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor.

La encuesta, consiste en la elaboración de ciertas preguntas cerradas, y, se aplicarán dependiendo si es una encuesta oral (se aplicará como instrumento una guía de encuesta, grabadora o cámara de video) o una encuesta escrita (se aplicara como instrumento un cuestionario).

En ese sentido, se procederá a la recolección de datos e información, con la revisión documental de literatura bibliográfica consistente en libros, revistas, así como, requerimientos acusatorios y disposiciones fiscales de archivo. También se utilizó la entrevista a diez (10) participantes especializados en derecho civil y penal (jueces, fiscales, y abogados litigantes especializados en derecho civil y penal). Y, conjuntamente la encuesta, que estuvo dirigida a los miembros de comunidad jurídica chiclayana, específicamente a estudiantes de derecho, egresados, bachilleres, y, abogados (litigantes y fiscales).

Es necesario precisar que la entrevista se realizó de manera virtual (video llamada), obteniendo las opiniones y criterios sobre el tema investigado en la presente tesis.

1.4.2. Instrumentos

Según, Fidias (2016), un instrumento de recolección de datos “es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 71).

La ficha bibliográfica, es un instrumento que permite identificar las fuentes documentales que se van a examinar o estudiar en el presente trabajo de investigación como: libros, folletos, revistas, artículos, informes, normas, entre otros, que están relacionadas con el tema a investigarse.

El cuestionario, es un instrumento que nos permite recolectar información, consistente en una serie de preguntas claras, precisas y cerradas. Estas pueden realizarse de manera verbal o escrita, de acuerdo a los fines de la investigación a realizarse.

La guía de entrevista permitirá llevar a cabo las entrevistas a los expertos en derecho penal, conformadas por abogados litigantes, jueces y fiscales. Este instrumento contendrá varias preguntas abiertas y orientadas a explorar minuciosamente las perspectivas, opiniones, experiencias de los entrevistados en relación a la problemática investigada.

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son: la ficha bibliográfica, cuestionario, y la Guía de entrevista.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS

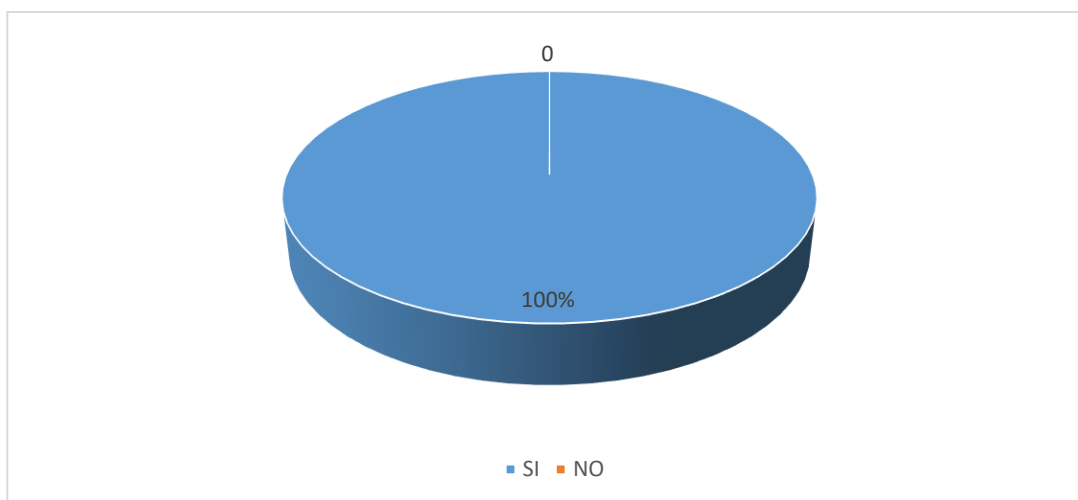
En el presente trabajo de investigación, se han obtenidos ciertos datos a través de la encuesta efectuada a los miembros de la comunidad del derecho (conformada por bachilleres y titulados en derecho). Siendo un total de 100 personas encuestadas, formulándose ocho (08) preguntas referidas al tema investigado; siendo los siguientes resultados:

A. ¿Considera que la receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana?

Del 100% de los encuestados, todos respondieron que “SI” consideran que la receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana. Este resultado está representado en la Tabla N° 1 y Grafica N° 1.

FIGURA 1

La receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde todos los encuestados consideran que la receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana.

TABLA 1

Los encuestados que consideran a la receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana

Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
------------	------------	-------------------

SI	100	100%	100%
NO	0	0%	0%
TOTAL	100	100%	100%

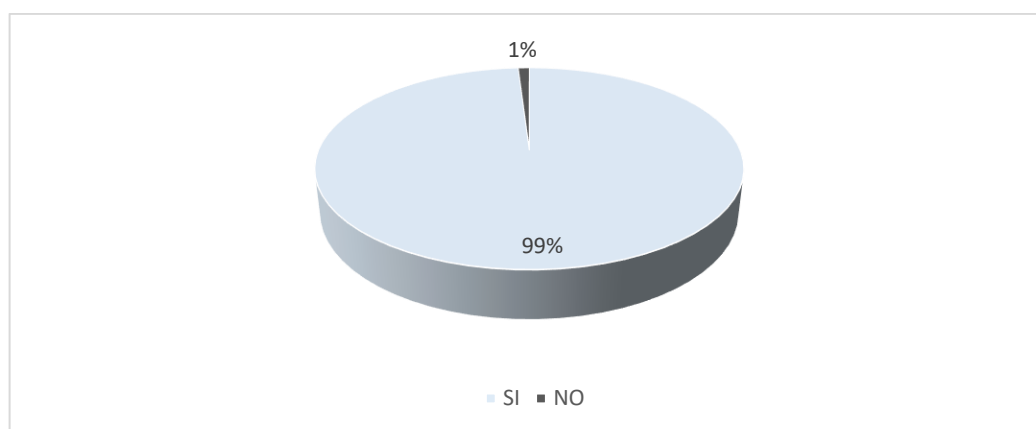
Nota: Esta tabla muestra que todos los encuestados consideran que la receptación es una actividad ilícita muy perniciosa para la sociedad peruana.

B. ¿Considera que la receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia de los delitos de hurto y robo?

Del 100% de los encuestados, el 99% respondió que “SI” considera que la receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia de los delitos de hurto y robo; en cambio, solo el 1% respondió que “NO” considera que la receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia de los delitos de hurto y robo. Este resultado está representado en la Tabla N° 2 y Grafica N° 2.

FIGURA 2

La receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia los delitos de hurto y robo



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde prácticamente casi todos los encuestados, representado por el 99%, consideran que la receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia de los delitos de hurto y robo.

TABLA 2

Los encuestados que consideran a la receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia los delitos de hurto y robo

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	99	99%	99%
NO	1	1%	1%
TOTAL	100	100%	100%

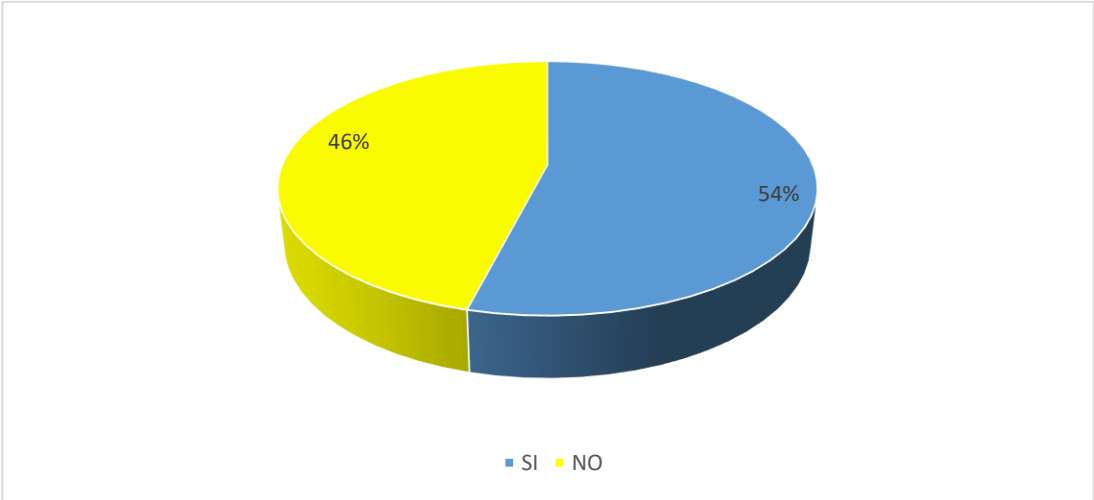
Nota: Esta tabla muestra cuantos encuestados consideran que la receptación de bienes ilícitos tiene como principal procedencia los delitos de hurto y robo.

C. ¿Considera que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal?

Del 100% de los encuestados, el 54% respondió “SI” considera que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal; en cambio, el 46% respondió que “NO” considera que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal. Este resultado está representado en la Tabla N° 3 y Grafica N° 3.

FIGURA 3

Todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde se puede apreciar que algunos están a favor (54%) y otros en contra (46%) en cuanto a que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal.

TABLA 3

Los encuestados consideran que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal

Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
------------	------------	-------------------

SI	54	54%	54%
NO	46	46%	46%
TOTAL	100	100%	100%

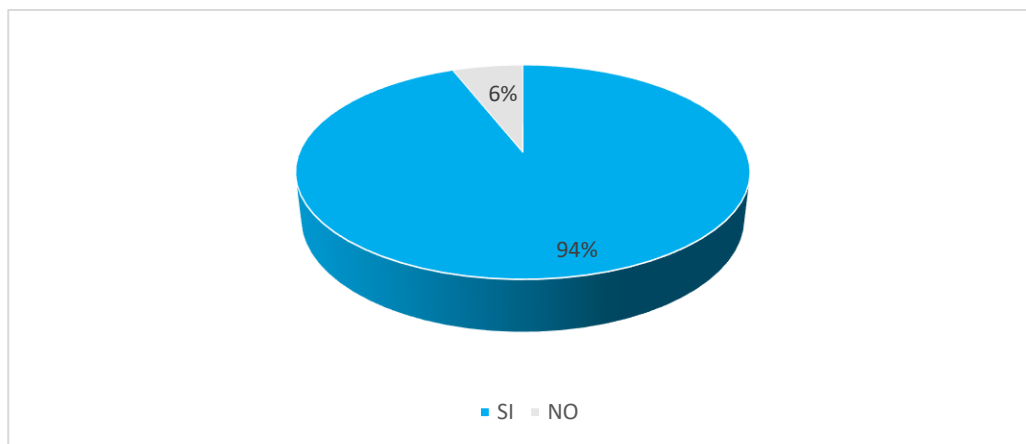
Nota: Esta tabla muestra cuantos encuestados consideran que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal.

D. ¿Usted tiene conocimiento de los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano?

Del 100% de los encuestados, el 94% respondió que, “SI” tiene conocimiento de los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano; en cambio, el 6% respondió que “NO” tiene conocimiento de los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano. Este resultado está representado en la Tabla N° 4 y Grafica N° 4.

FIGURA 4

Los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde la mayoría (94%) tienen conocimiento de los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano, y, solo un grupo reducido los desconoce.

TABLA 4

Los encuestados que tienen conocimiento sobre los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	94	94%	94%
NO	6	6%	6%
TOTAL	100	100%	100%

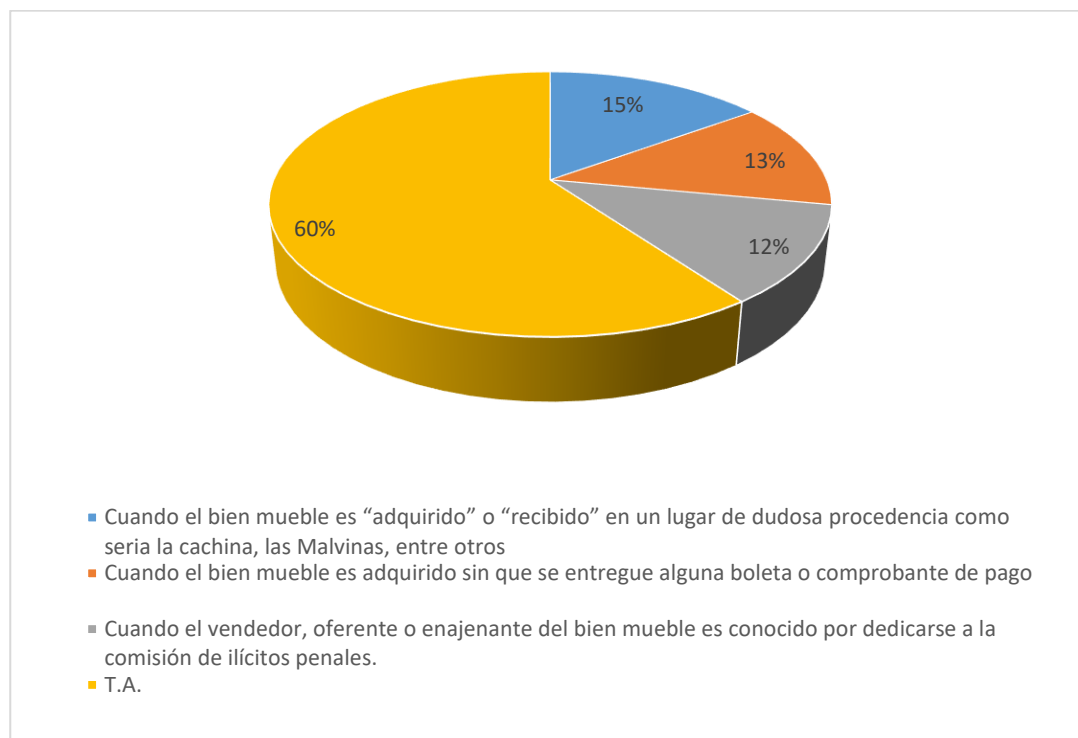
Nota: Esta tabla muestra cuantos encuestados tienen conocimiento sobre los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano.

E. ¿Cuál de las siguientes situaciones fácticas, considera que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión?

Del 100% de los encuestados, el 15% considera que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión cuando el bien mueble es “adquirido” o “recibido” en un lugar de dudosa procedencia como sería la cachina, las Malvinas, entre otros; el 13% considera que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión cuando el bien mueble es adquirido sin que se entregue alguna boleta o comprobante de pago; el 12% considera que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión cuando el vendedor, oferente o enajenante del bien mueble es conocido por dedicarse a la comisión de ilícitos penales; en cambio, el 60% considera que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión en todos los supuestos mencionados. Este resultado está representado en la Tabla N° 5 y Grafica N° 5.

FIGURA 5

Situaciones fácticas, en que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde se aprecia que los encuestados tienen opiniones divididas en cuanto a las situaciones fácticas, en que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión; sin embargo, más de la mitad de los encuestados (60%) considera que es procedente su aplicación en la mayoría de las situaciones fácticas establecidas (cuando el bien mueble es “adquirido” o “recibido” en un lugar de dudosa procedencia, o, cuando el bien mueble es adquirido sin que se entregue alguna boleta o comprobante de pago, o, cuando el vendedor, oferente o enajenante del bien mueble es conocido por dedicarse a la comisión de ilícitos penales).

TABLA 5

Respuestas u opiniones de los encuestados sobre las situaciones fácticas, en que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
Cuando el bien mueble es “adquirido” o “recibido” en un lugar de dudosa procedencia como seria la cachina, las Malvinas, entre otros.	15	15%	15%
Cuando el bien mueble es adquirido sin que se entregue alguna boleta o comprobante de pago	13	13%	13%
Cuando el vendedor, oferente o enajenante del bien mueble es conocido por dedicarse a la	12	12%	12%

comisión de ilícitos
penales.

T.A.	60	60%	60%
TOTAL	100	100%	100%

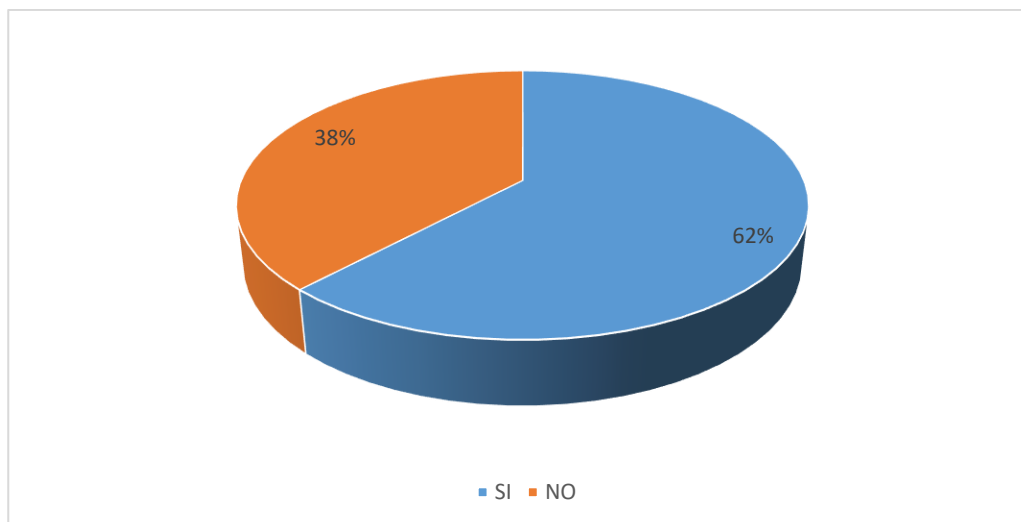
Nota: Esta tabla muestra las respuestas de los encuestados sobre las situaciones fácticas, en que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión.

F. El Tipo penal de receptación, contempla como segunda modalidad delictiva, el presumir que el bien mueble tiene procedencia ilícita, en ese sentido ¿Considera que esta exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor?

Del 100% de los encuestados, el 38% respondió que “SI” considera que la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor; en cambio, el 62% respondió que “NO” considera que la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor. Este resultado está representado en la Tabla N° 6 y Grafica N° 6.

FIGURA 6

La exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde la mayoría (62%) considera que la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor.

TABLA 6

Respuestas de los encuestados sobre la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	62	62%	62%
NO	38	38%	38%
TOTAL	100	100%	100%

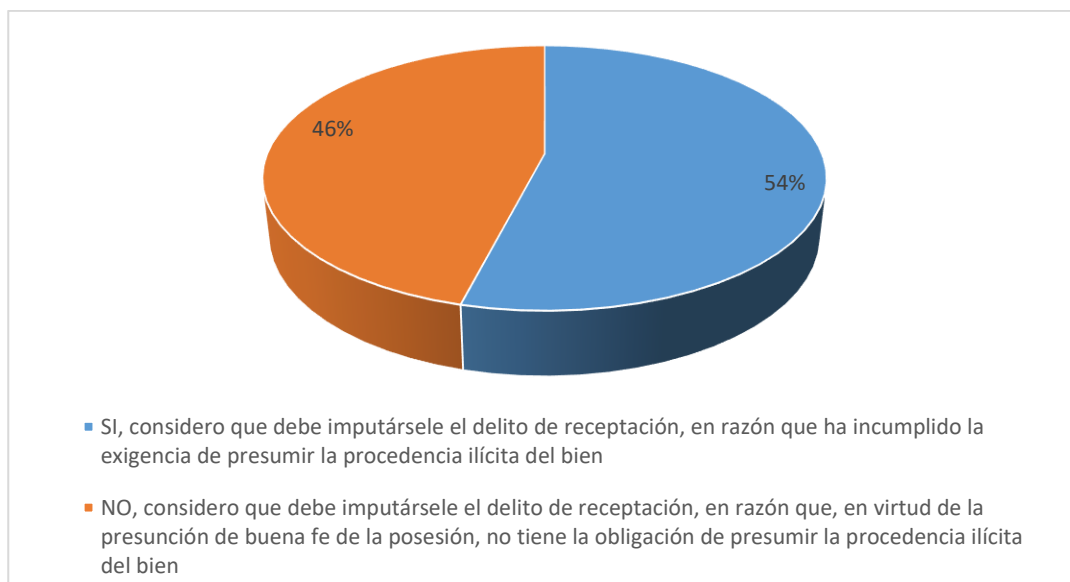
Nota: Esta tabla muestra cuantos encuestados consideran que la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, contraviene la presunción de buena fe del poseedor.

G. ¿Considera quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona el dominio y/o la posesión de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo, debe imputársele el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien?

Del 100% de los encuestados, el 54% respondió que “SI” debe imputársele el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien; en cambio, el 46% respondió que “NO” debe imputársele el delito de receptación, en razón que, en virtud de la presunción de buena fe de la posesión, no tiene la obligación de presumir la procedencia ilícita del bien. Este resultado está representado en la Tabla N° 7 y Grafica N° 7.

FIGURA 7

Quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona el dominio y/o la posesión de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión careza de facultad para hacerlo, debe imputársele el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde se aprecia que los encuestados tienen opiniones divididas en cuanto a quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona el dominio y/o la posesión de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo, por ello, debe imputarse el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien.

TABLA 7

Respuestas de los encuestados sobre quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona el dominio y/o la posesión de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo, debe imputársele el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	54	54%	54%
NO	46	46%	46%
TOTAL	100	100%	100%

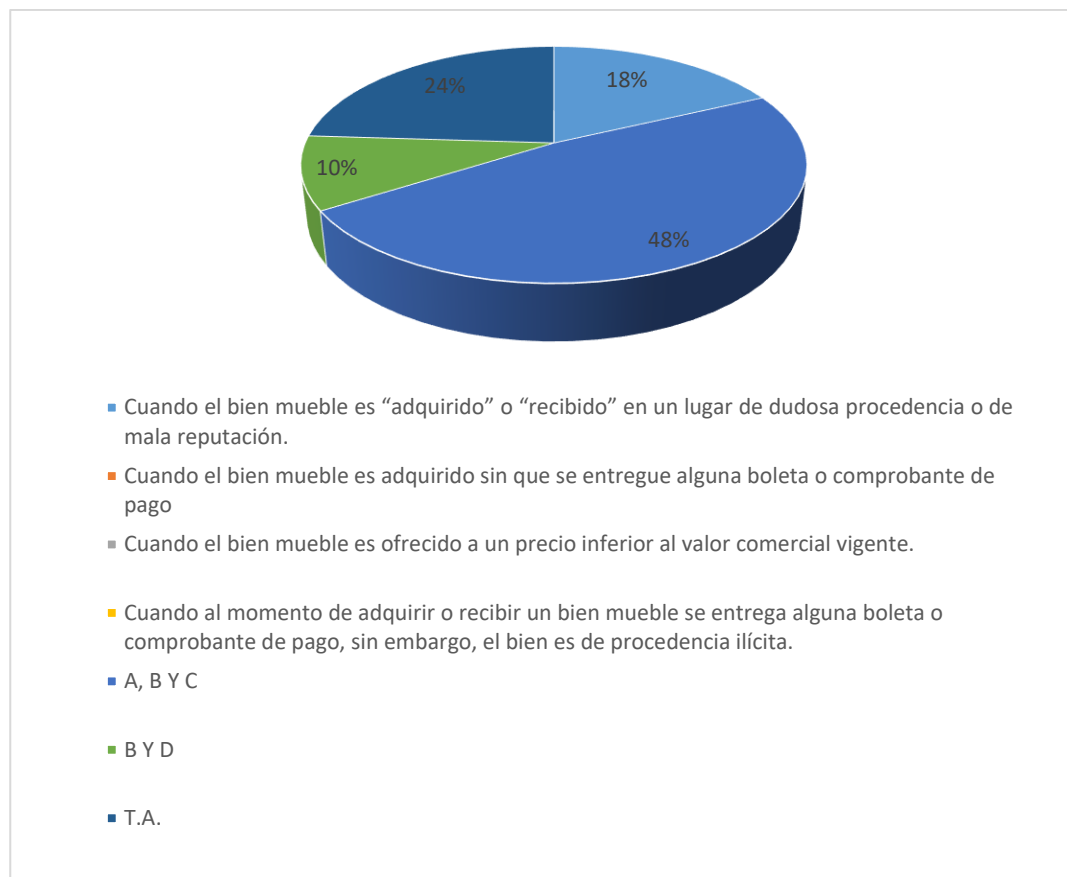
Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los encuestados respecto a quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona el dominio y/o la posesión de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo, debe imputársele el delito de receptación, en razón que ha incumplido la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien

H. ¿Usted cuándo considera que se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación?

Del 100% de los encuestados, el 18% respondió cuando el bien mueble es “adquirido” o “recibido” en un lugar de dudosa procedencia o de mala reputación; el 48% considera que se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin que se contravenga la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación en los supuestos A, B y C; el 10% considera que se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin que se contravenga la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación en los supuestos B y D; y, el 24% considera que se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin que se contravenga la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación en todos los supuestos mencionados. Este resultado está representado en la Tabla N° 8 y Grafica N° 8.

FIGURA 8

Cuando se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación



Nota: El grafico representa el resultado obtenido de la encuesta aplicada a cien miembros de la comunidad jurídica (conformada por bachilleres y titulados en derecho); en donde se aprecia que los encuestados tienen opiniones divididas en lo que respecta, a cuando se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación.

TABLA 8

Cuando se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
A. Cuando el bien mueble es “adquirido” o “recibido” en un lugar de dudosa procedencia o de mala reputación.	18	18%	18%
B. Cuando el bien mueble es adquirido sin que se entregue alguna boleta o comprobante de pago	0	0%	0%
C. Cuando el bien mueble es ofrecido a un precio inferior al valor comercial vigente.	0	0%	0%
D. Cuando al momento de adquirir o recibir un bien mueble se entrega alguna boleta o comprobante de pago, sin embargo, el bien es de procedencia ilícita.	0	0%	0%
E. A, B Y C	48	48%	48%
F. B Y D	10	10%	10%
G. T.A.	24	24%	24%
TOTAL	100	100%	100%

Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los encuestados respecto a cuando se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación.

En el presente trabajo de investigación, se han obtenidos ciertos datos a través de una entrevista realizada a diez profesionales del derecho, obteniéndose los siguientes resultados:

A. ¿Qué opinas sobre la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación?

TABLA 9

Opiniones de los expertos sobre la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación

Entrevistado	Respuesta
Wilson Manayalle Sánchez (juez especializado penal de la corte superior de justicia de la libertad)	Mi postura es que en todo ordenamiento existen presunciones, una ellas es la de presumir la procedencia ilícita, y que considero que todo ciudadano que participa en el tráfico jurídico tiene el deber mínimo de conocimiento o de cuidado sus acciones, pues no puede ser muy confiado, pues debe tomar cuidado de lo que adquiere, recibe o guarda, pues debe actuar con el cuidado del hombre promedio, es decir, debe actuar diligentemente.
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (fiscal provincial titular lima centro)	Mi postura es que, en este delito como el delito de Lavado de activos, se hace uso de una terminología propio del Derecho procesal que no se ajusta a los contenidos propios del tipo subjetivo del injusto; propiamente de distinguir el dolo de la culpa, propiamente desde el rasgo objetivo de la evidencia; por tanto, se sabe o no se sabe, que es el componente crucial del dolo, en cuanto a su variante por “eventualidad”.

Víctor Hugo

Manayay

Rodríguez

(abogado

litigante del

Estudio

Jurídico

Manayay

Pravia y

Asociados)

Considero que la exigencia normativa en el tipo penal de receptación, responde a los fines de una política criminal para sancionar a las personas que adquieren cosas sin el mínimo cuidado que estas puedan ser de procedencia ilícita, contribuyendo a la comisión de delitos. Sin embargo, este deber de presumir la ilicitud del bien, no es más que un “deber de cuidado” atribuible al ciudadano común, que únicamente es propio de los delitos culposos o imprudente, mas no doloso, por ello, existe la crítica al respecto.

Erik Neill

Izaguirre

Espadin

(abogado

litigante)

No es correcto exigir que se presuma la procedencia ilícita de un bien, por cuanto, sería una arbitrariedad, y, atenta con el derecho a la presunción de inocencia.

Angel Hugo

Manayay

Pravia

(abogado

litigante del

Estudio

Jurídico

Manayay

Pravia y

Asociados)

La exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento objetivo del delito de receptación, se justifica en la necesidad de reducir los índices de realización de los delitos contra el patrimonio, así como, prevenir y sancionar a los ciudadanos que adquieren de diversas formas los bienes muebles de procedencia ilícita. En ese sentido, se constituye como un deber general, que todo ciudadano respetuoso del ordenamiento jurídico debe cumplir, con la finalidad de no contribuir a la comisión de delitos.

**Elias Regulo
Gonzales
Bazán**
(abogado
litigante en
derecho civil)

En principio, me muestro en desacuerdo. Salvo que esta presunción sea meramente inicial para el inicio de la investigación (por la existencia de ciertos indicios que acompañen al hecho de la posesión del bien) y exija para su consideración ilícita procesal un nivel de verificación fáctico.

**Juan Carlos
Portugal
Sánchez**
(abogado
litigante)

Es importante dejar a neutralizar a través del conocimiento y la intención, las diversas fórmulas o fenómenos delictivos de compra y venta que puede realizar un ciudadano en estos espacios clandestinos comerciales, y eso involucra no solamente una responsabilidad de quienes venden o comercian, sino también, a través de la fórmula legislativa, el legislador neutraliza, impide y genera una reflexión importante en el ciudadano, de evitar conductas, cuyos contextos normativos a partir del conocimiento pueda en efecto vincularse a un determinado delito, de manera que este delito exige una auto responsabilidad como un mecanismo de límite al propio ciudadano.

**Sergio
Emerson
Chávez
Panduro**
(abogado de la
fiscalía
anticorrupción
de Lima)

Resulta siendo necesario probar la procedencia ilícita del delito en razón de que para la configuración de este tipo penal, quien recepta tiene que saber o debe presumir que este es de procedencia ilícita. Si no tuviera una procedencia ilícita entonces no estaríamos ante la configuración de un tipo penal, por el contrario, nos encontraríamos ante un suceso que no tiene ninguna relevancia de carácter penal. En ese sentido la presunción está relacionado a los deberes de autoprotección que se deben dar al momento de adquirir un bien. Por ejemplo, si una persona va a un lugar donde suelen vender productos robados,

entonces si una persona adquiere un producto, debe de pedir un Boucher de venta, el no hacerlo va a acarrear en una negligencia por parte de quien adquirió el producto.

Ronald Chiguala Villanueva
(fiscal provincial)

El derecho penal, es la rama más dura del derecho, en tanto se interfiere con la libertad de tránsito como sanción, siendo así, es necesario que, se demuestre cada uno de los elementos del tipo penal, tanto objetivo como subjetivo, no pudiendo presumirse ninguno de ellos, siendo así, mi opinión es que no debe procederse con presumir la procedencia ilícita de un bien en la receptación.

Perci Denis Vergara Vásquez
(abogado litigante en derecho civil)

Considero que es adecuado porque en el compra y venta de bienes o mercancías, la transferencia debe realizarse con diligencia por parte de los intervinientes. Con ello, los sujetos podrán advertir sobre circunstancias que hagan sospechar o no que el bien es objeto de un delito anterior. En consecuencia, pese a haber actuado diligentemente y conforme la habitualidad de su rol que desempeña, si esta presunción no es posible de advertirlo el sujeto, los hechos no podrían subsumirse al tipo penal de receptación, pues no estaría presente la tipicidad subjetiva.

Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los entrevistados respecto a la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación

B. ¿Cuáles son los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano?

TABLA 10

Opiniones de los expertos sobre los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano

Entrevistado	Respuesta
Wilson Manayalle Sánchez (juez especializado penal de la corte superior de justicia de la libertad)	<p>Yo creo que los límites de la presunción de buena fe, es la actuación diligente del hombre promedio, como es actuar positivamente cuando compra un bien, que no solo se debe basar en la versión del vendedor, sino que mínimamente debe corroborarlo, ya sea en entidades públicas como registros públicos, cuya finalidad es brindar publicidad, así como la mínima corroboración como el precio de mercado, datos correctos de quienes venden. Entonces los límites de la buena fe, debe ser la actuación diligente o razonable de cualquier persona, es decir, buena fe, no significa ceguera o confianza a ciegas o complicidad.</p>
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (fiscal provincial titular lima centro)	<p>Los alcances de la presunción de buena fe, tiene ciertos límites en cuanto a la veracidad del contenido de quien aparece en el registro público como su propietario y quien lo adquiere de manera onerosa; es una presunción de iuris tantum es decir admite prueba en contrario, dependiendo de la naturaleza jurídica de las cosas que compromete el negocio jurídico.</p>

Víctor Hugo Manayay Rodríguez
(abogado litigante)

Como regla general en el derecho civil, se presume quien tenga la posesión inmediata o directa de un bien (mueble o inmueble) es su poseedor legítimo (ya sea como propietario o tiene el derecho de uso), sin embargo, la misma tiene excepciones, por cuanto, la posesión puede estar viciada, como sería: quien transfiere la posesión de la cosa no es titular legítimo. Es por ello que, quien pretenda adquirir la posesión un bien u objeto, debe adoptar las medidas preventivas necesarias para descartar la posible existencia de infracción a la ley penal, esto es, el origen ilícito de la cosa mueble

Erik Neill Izaguirre Espadin
(abogado litigante)

La buena fe se presume, y la mala fe se prueba según el código civil.

Angel Hugo Manayay Pravia
(abogado litigante del Estudio Jurídico Manayay Pravia y Asociados)

Los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano, consiste en quien tenga la posesión inmediata o directa de un bien (mueble o inmueble) se presume que su poseedor es legítimo (ya sea como propietario o tiene el derecho de uso), sin embargo, la misma tiene excepciones, esto es, cuando la posesión es ilegítima se está infringiendo la ley, como sería la compra de bien hurtado o robado.

Elias Regulo Gonzales Bazán (abogado litigante en derecho civil)	<p>Nuestro código civil señala que se presume que quien posee un bien lo está haciendo de buena fe, siendo esta una presunción que admite prueba en contrario. La posesión que se ejerce, en ese sentido, debe, en primer lugar, suponerse, pero no llanamente, sino que esta debe ser razonablemente verosímil. No debemos perder de vista que la buena fe, en general, es un estado de creencia razonable, de ignorancia en el vicio. De creencia en el título que justifica la posesión; en ese sentido no podríamos estar ante una buena fe del poseedor que no confía en su título posesorio, que conoce del vicio o que está en condiciones de conocerlo.</p>
Juan Carlos Portugal Sánchez (abogado litigante)	<p>Los alcances jurídicos de la presunción de buena fe de la posesión, se encuentran establecidos en el vigente Código Civil Peruano de 1984, consiste como regla general que quien tenga la posesión directa e inmediata de un bien, ya sea mueble o inmueble, se debe presumir que el ejercicio de este derecho real es de buena fe, sin embargo, la misma tiene excepciones, por la ilegitimidad del ejercicio de la posesión en razón de la existencia de vicios, que el poseedor conocía o debió conocer. Por ejemplo, cuando se está infringiendo la ley, como sería la compra de bien hurtado o robado o usurpado.</p>
Sergio Emerson Chávez Panduro (abogado de la fiscalía)	<p>El que, de buena fe, adquiere algún bien mueble o inmueble. Ello está relacionado a que el poseedor, realiza todos los trámites correspondientes para poder adquirir un bien sin pensar que este tenga por ejemplo un origen ilícito, lo que no sucede por ejemplo con el delito de receptación, puesto que en este caso el sujeto activo sabe que algún acontecimiento de carácter irregular se está</p>

anticorrupción de Lima) suscitando y no exige las formalidades correspondientes como para exigir un comprobante de compra, por ejemplo.

Ronald Chiguala Villanueva
(fiscal provincial)

Se entiende que existe una presunción juris tantum de la buena fe en la sociedad peruana, es decir, se presume que la actuación social es de buena fe en cada acto, mientras no haya prueba en contrario, en consecuencia, esta buena fe no es absoluta, sin embargo, se reputa poseedor de buena fe a aquel que tenga bajo su poder un mueble cualquiera.

Perci Denis Vergara Vásquez
(abogado litigante en derecho civil)

Respecto a ello, el artículo 948 del Código Civil sostiene que la transferencia a non domino es válida si el adquirente actúa de buena fe y como propietario, es decir, compra el bien del propietario aparente. Cabe mencionar que la buena fe que se exige aquí es la de tipo subjetiva, aquella basada en la creencia de la legitimidad del derecho que se adquiere cuando se ignora al verdadero titular del bien.

En este caso, la venta del bien mueble transfiere al adquirente la posesión y la propiedad.

Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los entrevistados respecto a los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano.

C. ¿Cuándo la presunción de buena fe de la posesión no es aplicable a favor del poseedor de un bien mueble?

TABLA 11

Opiniones de los expertos sobre cuando la presunción de buena fe de la posesión, no es aplicable a favor del poseedor de un bien mueble

Entrevistado	Respuesta
Wilson Manayalle	
Sánchez (juez especializado penal de la corte superior de justicia de la libertad)	Bueno la ley ha establecido, que cuando un bien está inscrito en registros públicos, no puede ampararse la buena fe, es decir, nadie puede decir que actuó de buena fe, si existía información pública que decía lo contrario.
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (fiscal provincial titular lima centro)	Ello tomará lugar cuando esta ha sido asumida por vías de hecho, es decir de manera contraria a lo que permite el ordenamiento jurídico; en cuanto al abuso de un derecho o de hacerse de aquel a sabiendas que tiene una procedencia lícita, es decir producto de la comisión de un hecho punible.
Víctor Hugo Manayay Rodríguez	Considero que la presunción de buena fe de la posesión, no es aplicable a favor del poseedor de un bien mueble, cuando una persona conoce plenamente que la posesión ejercida no tiene justificación legal mediante un justo título, es decir, es un

(abogado litigante) “posesión viciada” o “posesión ilegítima de mala fe”. Por ejemplo, se tiene conocimiento que la cosa adquirida proviene o pueda provenir de un delito de hurto o robo, ya que, quien vendió la cosa se dedica a las actividades ilícitas, o donde se adquirió es un lugar de mala reputación.

Erik Neill

Izaguirre Espadin
(abogado litigante) Cuando el bien sea de naturaleza ilícita y el poseedor conocía de esta situación o debió de presumirlo, esto por la máxima de la experiencia.

Angel Hugo

Manayay Pravia
(abogado litigante del Estudio Jurídico Manayay Pravia y Asociados) La presunción de buena fe de la posesión, no es aplicable, a quien tiene conocimiento que la posesión ejercida al bien tiene justificación legal mediante un justo título, es decir, es un “posesión viciada” o “posesión ilegítima de mala fe”. En este tipo de casos, se encuentra los poseedores que han adquirido un bien de procedencia de un ilícito previo como un hurto, robo o apropiación ilícita, entre otros.

Elias Regulo Gonzales Bazán
(abogado) El Código Civil señala que cuando el bien se encuentra inscrito a nombre de otra persona; sin embargo, esto no debe ser tomado como una aseveración absoluta, pues existen diversos escenarios en los que quien posee no es quien aparece en el registro formal, pero que posee derecho legítimo.

litigante en
derecho civil)

Juan Carlos
Portugal
Sánchez
(abogado
litigante)

El legislador no establece a mi perspectiva un estándar de prueba en el propio tipo, y no tendría por qué, porque únicamente el tipo penal regula una conducta de carácter prohibitiva, sin embargo, dentro de la probática judicial, es el fiscal quien tendrá que demostrar, a partir de datos de contexto, el nivel educación e instrucción del ser humano investigado por este delito, que estuvo en las condiciones de prever o conocer de la existencia de este bien que va comprar y por consecuencia lo adquiere de buena fe, y eso involucra cuando se hace alusión al contexto, que sea un lugar donde socialmente se determine como un lugar clandestino, por ejemplo el hueco, polvos azules, en nuestra realidad nacional en donde hay una presunción general y consensuada en que los productos que allí se venden son de origen delictivo y que la persona además de conocer el contexto, deba saber qué factores como la marca, por ejemplo hablando de celulares, para sintetizarlo a través de un ejemplo más sincero, que a través del costo esta, un iPhone no te va costar de ninguna forma S/. 500.00, de manera que, la persona sabe que yendo a un lugar que, colectivamente se reputa como clandestino o cuyo de venta irregular o ilícita, pero además sumado a los detalles del producto en particular, hacen más reprochable la conducta por parte del investigado, y si a eso le sumas que es una persona con instrucción, con capacidad de determinación estos factores influyen en la determinación del dolo eventual o el dolo directo en la forma de su comisión como está regulado en el propio

código penal, de esta manera, se podría aceptar la buena fe o rechazarla a través de estos contextos, es decir, en la perspectiva del delito de recepción, a partir de los datos de contexto señalados en la pregunta N° 1, así como también, los datos vinculados a la formación, a la instrucción y al conocimiento de la realidad que tiene el propio investigado.

Sergio

Emerson

Chávez

Panduro

(abogado de la
fiscalía
anticorrupción
de Lima)

Cuando este debía presumir de la ilicitud del bien, en esos casos no se podría realizar alguna presunción, puesto que al momento de adquirir un producto, será importante por ejemplo que se entregue alguna factura o Boucher de pago, es decir se deben seguir los deberes de cuidado.

Ronald

Chiguala

Villanueva

(fiscal
provincial)

No es aplicable la buena fe, cuando se ha demostrado que conoce de posible maquinaciones para burlar el sistema jurídico, por ejemplo, una simulación de compra venta, o cuando conociendo que existe litis sobre el bien, adquiere de supuesta buena fe el bien.

Perci Denis

Vergara

Vásquez

(abogado
litigante en
derecho civil)

La presunción de buena fe es inoperante cuando se trata de bienes muebles perdidos o adquiridos delictuosamente.

Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los entrevistados respecto a cuando la presunción de buena fe de la posesión, no es aplicable a favor del poseedor de un bien mueble

D. ¿Considera que se debe presumir que toda posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario?

TABLA 12

Opiniones de los expertos sobre tener que presumir que toda posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario

Entrevistado	Respuesta
Wilson Manayalle Sánchez (juez especializado penal de la corte superior de la justicia de la libertad)	Yo considero que sí, pero debe establecerse que se entiende buena fe, pues en este mundo de la información y la tecnología, con tanta facilidad para obtener información, no puede entenderse como la forma primigenia la buena fe, esta debe tener ciertos requisitos acorde con el mundo digital y de facilidades por la obtención información. Es decir, buena fe sí, pero para el que actuado diligentemente.
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (fiscal provincial titular lima centro)	Si debe procederse de tal forma, en cuanto a una inferencia de la cual se puede colegir razonablemente ello, siempre que concurren los presupuestos que así lo muestren; de manera que serán las características de cada caso en particular las que determinen ello, por tanto, estoy de acuerdo a que se admita su prueba en contrario.

Víctor Hugo Manayay Rodríguez
(abogado litigante)

Estoy de acuerdo que se debe presumir que toda posesión inmediata de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario, con la finalidad que se puedan realizar con normalidad las actividades comerciales, confiando en que las personas involucradas en el tráfico comercial actúan de acuerdo a las normas. Sin embargo, dependerá de la forma o circunstancias en que se adquirió la posesión del bien mueble, la que será determinante para desvirtuar la presunción de buena fe del poseedor.

Erik Neill Izaguirre Espadin
(abogado litigante)

Estoy de acuerdo que se deba presumir que toda posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario.

Angel Hugo Manayay Pravia
(abogado litigante del Estudio Jurídico Manayay Pravia y Asociados)

Si estoy de acuerdo que se debe presumir que la posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario, ya que, permite confiar en las personas involucradas en el tráfico comercial, que están actúan dentro del marco legal. Sin embargo, esta presunción de buena fe será desvirtuada de acuerdo a las circunstancias en que se habría adquirió la posesión del bien mueble.

Elias Regulo Gonzales Bazán (abogado litigante en derecho civil) Sí, esto pues, por regla general los bienes son poseídos de buena fe en su gran mayoría de veces, por lo que no sería práctico invertir la regla. Por lo tanto, la presunción no afectaría la posibilidad demostrar razonablemente cuando una posesión no es honesta o muestra indicios de ilicitud por los hechos que la rodean (inexistencia de verosimilitud de buena fe).

Juan Carlos Portugal Sánchez (abogado litigante) Correcto, la afirmación es válida, no se puede presumir si no hasta la admisión de prueba en contrario, a partir de los factores exógenos que hecho mención o los propios factores endógenos.

La presunción como tal, es una patología probatoria que más propiamente está vinculado a un estándar de duda que a un estándar de probabilidad, pero no así a un estándar de certeza, de manera que esa presunción, necesariamente tiene que estar acompañada de los datos que permitan inferir la existencia de buena o de mala fe, esto es prueba en contrario del adquiriente.

Sergio Emerson Chávez Panduro (abogado de la fiscalía anticorrupción de Lima) Considero que existen deberes de autoprotección, las cuales están relacionados por ejemplo al lugar donde se compra el producto, asimismo el comprobante de compra, la boleta correspondiente, entre otros. Cuando existe ello podríamos presumir que la compra se está realizando bajo los estándares de la buena fe. El hacer lo contrario nos pondría en un contexto donde se debería de presumir que la compra de algún producto tuvo alguna ilicitud o irregularidad.

Ronald

Chiguala

Villanueva

(fiscal
provincial)

Exactamente, el derecho civil tiene su base en que la conducta de un ciudadano se realiza de manera adecuada al derecho, esto es, de buena fe, salvo que se demuestre lo contrario.

Perci Denis

Vergara

Vásquez

(abogado
litigante en
derecho civil)

Sí, hasta cierto punto, me explico: Los bienes son parte del desarrollo de las personas, todos los días estamos en posesión de bienes muebles, por lo que debe presumirse que somos poseedores legítimos. No obstante, si un día se acerca una persona, que nunca antes ha poseído una moto de última gama y me ofrece a la venta por un precio muy exiguo, la primera presunción no será la buena fe, sino la posible procedencia ilícita del bien. En esta última situación, la presunción ya no será afirmativa, sino en modo negativo.

En consecuencia, considero que las presunciones son concurrentes con las circunstancias que rodeen a la persona, el bien y su adquisición.

Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los entrevistados respecto a tener que presumir que toda posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario

E. ¿Usted qué opina sobre quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona la posesión inmediata de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo?

TABLA 13

Opiniones de los expertos sobre quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona la posesión inmediata de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo

Entrevistado	Respuesta
Wilson Manayalle Sánchez (juez especializado penal de la corte superior de justicia de la libertad)	Sin duda dependerá de las particularidades de cada caso concreto, pues conforme lo vengo sosteniendo, si se actuó con diligenciamiento, entonces, la buena fe será válida, de lo contrario, no puede alegarse buena fe, cuando en realidad existe ceguera o no querer darse cuenta de lo que adquiere.
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (fiscal provincial titular lima centro)	Habría que depender el juicio de valor conforme las características del caso en cuestión, en el sentido de que pueda tratarse de un asunto que luego pueda ser subsanado con la persona portador de las atribuciones que la ley le pueda conferir, más si de plano ello se avizora como un imposible jurídico, dicha traslación fáctica del bien no podrá tener el mismo ropaje alguno de legalidad.

Víctor Hugo Manayay Rodríguez (abogado litigante) Cuando una persona desconoce, que quien le entrego o transfirió la posesión de un bien mueble, no es el titular legítimo o dueño, significa que estamos ante un supuesto “posesión ilegítima de buena fe” a pesar que su derecho a poseer no se basa en un “justo título”. En cambio, si la persona que está poseyendo un bien mueble, conoce de esta “situación jurídica irregular”, entonces, será considerada como “un poseedor ilegítimo de mala fe”. Tratándose del segundo supuesto mencionado, se debe sancionar penalmente.

Erik Neill Izaguirre Espadín (abogado litigante) Que no es un delito porque desconocía de la procedencia ilícita y no pudo presumirlo.

Angel Hugo Manayay Pravia (abogado litigante del Estudio Jurídico Manayay Pravia y Asociados) Considero quien de “buena fe” adquiere o recibe de otra persona la posesión inmediata de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión careza de facultad para hacerlo, no responderá penalmente en la medida que desconozca esta situación, salvo que debía presumirlo, por cuanto, dado el contexto o circunstancias de la adquisición, ameritaba presumir dicha situación irregular o ilícita. En este último supuesto, el poseedor es “ilegítimo” y la “buena fe” se desvirtuará de facto, ya que, debía presumir esta “situación jurídica irregular”.

**Elias Regulo
Gonzales
Bazán**
(abogado
litigante en
derecho civil)

Si la adquisición estuvo acompañada de un contexto que le impida “conocer” o “estar en posibilidad de conocer” el vicio, debería conservar su derecho; caso contrario, el derecho no debería proteger esta adquisición, pues la adquisición no habría sido diligente y más bien viciosa.

**Juan Carlos
Portugal
Sánchez**
(abogado
litigante)

Definitivamente quien adquiere un producto de una persona que no tenga la titularidad o que no tenga el poder para realizarlo, conforme a la última parte de la pregunta, podríamos presumir la existencia de una mala fe y por correlato de tal que la incorporación de ese bien al patrimonio obedeció a un error intencional o a un error imprudente, que pudo ser resuelto por el comprador del bien, de manera que estaríamos frente a un factor de falta de agotamiento de diligencia por parte del comprador, más aun sabiendo de que quién lo está comercializando no tiene título o no está en la condición para poder realizarlo, esto por supuesto deberá verse caso por caso, porque, si alguien adquiere un vehículo es obvio que el titular debe ser el propietario del vehículo, ahí el nivel de reproche es mucho mayor, pero si es que se trata de otro bien que no involucra o no depende su comercio necesariamente de la titularidad de este, el nivel de reproche será nulo o será neutral, dependerá del bien mueble, y si es que este depende para su comercialización de manera exclusiva la titularidad de su propietario, dependerá en ese sentido del bien que adquirió.

**Sergio
Emerson**

Bajo esa misma línea, considero que en todo acto de adquisición, se debe de cumplir con las obligaciones de autoprotección, la

Chávez	buena fe tiene también sus límites, en ese sentido si quien recibe
Panduro	un bien sabía que no debería de hacerlo, puesto que el que le
(abogado de la	entrega el bien, no es una persona facultada para ello, entonces
fiscalía	no se debería haber aceptado la entrega del bien.
anticorrupción	
de Lima)	
Ronald	Las actuaciones de buena fe, no pueden ser sancionadas, de lo
Chiguala	contrario, dejaríamos de tener base el derecho privado y
Villanueva	tendríamos que buscar a cada conducta una prueba en contrario,
(fiscal	hecho que detendría no sólo las relaciones económicas, sino las
provincial)	sociales.
Perci Denis	
Vergara	Es una situación típica en el tráfico de bienes muebles, por lo que
Vásquez	me parece adecuado que el ordenamiento jurídico haga valedera
(abogado	esa transferencia si se cumplen con los presupuestos del art. 948
litigante en	CC. El objetivo es proteger el intercambio, siempre que haya
derecho civil)	buena fe y la transferencia sea onerosa.

Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los entrevistados respecto a quien de buena fe adquiere o recibe de otra persona la posesión inmediata de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión careza de facultad para hacerlo.

F. ¿A su criterio en qué situaciones fácticas se debe exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor?

TABLA 14

Opiniones de los expertos sobre en qué situaciones fácticas se debe exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor

Entrevistado	Respuesta
Wilson	
Manayalle	Yo considero, que se debe exigir el cumplimiento del deber de
Sánchez (juez especializado penal de la corte superior de justicia de la libertad)	presumir la procedencia ilícita de bien en todos los casos, debiendo excluirse solo cuando se ha actuado diligentemente, con el debido cuidado, es decir, como el hombre promedio, entonces, si se actuó con el debido cuidado y pese a ello no se logra determinar la procedencia ilícita, entonces, existe buena fe.
Alonso Raúl Peña Cabrera	Primero, el origen del bien, esto es su procedencia debe ir sustentada con la documentación que ello requiera, de orden contable, tributaria;
Freyre (fiscal provincial titular lima centro)	Segundo, el precio del bien, dependiendo de su valor en el mercado según el libre juego de la oferta y la demanda; y, Tercero, quien lo está transfiriendo o enajenando no se tenga sospecha de que esté involucrado en algún delito o que tena

relación con personas o estructuras de personas habituados a cometer hechos punibles.

Víctor Hugo Manayay Rodríguez (abogado litigante) Desde la perspectiva dogmática penal en concordancia con el derecho civil, la exigencia del “cumplimiento de presumir la procedencia ilícita del bien (mueble)” en el delito de receptación, está supeditada al “contexto social” en que se adquirió la posesión del bien, como sería adquirir un celular en un lugar de dudosa reputación, o, adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando).

Erik Neill Izaguirre Espadin (abogado litigante) En el derecho se usa mucho el criterio del juez, y el juez usará la máxima de la experiencia para saber si el sujeto pudo saber o no si conocía del hecho ilícito, como por ejemplo el clásico vendedor callejero que te ofrece un celular barato y te dice que es de él, y que te lo vende ahí es donde se debe de presumir que es producto de delito ese bien, y si lo compra estará cometiendo el delito de receptación.

Considero que las situaciones fácticas para exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor, sería lo siguientes: i) adquirir un celular en lugares de mala o dudosa reputación como sería la llamada “cachina”, “el hueco”, entre otros; ii) adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando); iii) adquirir el bien a un precio irrisorio, a pesar que se tiene conocimiento que su valor en el mercado es superior; iv) adquirir el bien (como un celular), sin que se entregue una boleta o documento que acredite la compraventa, y consecuentemente la titularidad de la cosa.

Elias Regulo

Gonzales

Bazán

(abogado
litigante en
derecho civil)

Cuando el contexto lo determine. Por ejemplo: mercados de venta de objetos de segundo uso sin documentación, ni registro, ni control de transferencias anteriores.

Juan Carlos

Portugal

Sánchez

(abogado
litigante)

A partir de datos exógenos y datos internos del propio adquiriente, datos exógenos como conocimiento del lugar en donde se va adquirir el bien, digamos el concepto socialmente dado al lugar en donde se va adquirir el bien, la reputación del lugar en donde se va adquirir el bien, el costo a nivel del precio del mercado del bien que se va adquirir, la falta de documentación de transferencia de comercialización, con factura o boleta, que inclinan una posesión a una documentación relajada sin los requisitos que involucra la formalidad de toda compra y venta,

como factores externos o exógenos entre otros, y como factores vinculados propiamente a la persona, no podría afectarse a una buena fe de aquel que conoce sus factores exógenos, y sin hacer la pausa o el control como garante que es de su propia comercio, los acepta como válidos, conociendo el contexto y le sumas eso los factores de edad, de instrucción, los factores de realidad económica incluso de la propia persona, y los factores incluso vinculados también a precedentes de propias compras en otros lugares, piden por ejemplo boletas y facturas, mientras que aquí no porque sabe perfectamente que es un contexto de clandestinidad, entonces eso factores externo y factores internos van a determinar siempre, si es que estamos frente a un adquirente de buena fe o de mala fe, a partir de esos detalles con mayor claridad saber si es que estamos frente a un bien de procedencia delictiva o a un bien de procedencia legal.

Sergio

Emerson

Chávez

Panduro

(abogado de la
fiscalía
anticorrupción
de Lima)

La buena fe estaría relacionada al hecho de que una persona a cumplido con los deberes iniciales de cuidado, por ejemplo, si adquieren un bien inmueble que ha sido comprado por los titulares, producto de un origen ilícito dinerario, en ese sentido, el tercero que de buena fe haya comprado la casa no será perjudicado, puesto que dicho bien lo compro de buena fe.

Ronald

Chiguala

Villanueva

Considero que no puede presumirse la procedencia ilícita de un bien, bajo circunstancia alguna para sustentar una sanción, menos aún si es sanción penal, considero que debe demostrarse la procedencia ilícita del bien y demostrarse también que conocía

(fiscal provincial) de dicha procedencia ilícita, para tener un delito doloso cometido, caso contrario, no puede penarse dicha conducta.

La presunción se realiza en función a las especiales circunstancias que se advierten de los hechos. Por ejemplo, cuando el sujeto tenga a a vista un bien con un precio muy exiguo, una transferencia clandestina o informal, situación de necesidad económica o insuficiencia del enajenante, entre otros.

Perci Denis

Vergara

Vásquez

(abogado litigante en derecho civil)

Cabe resaltar que en este delito hablamos de una presunción, es decir, una mirada preliminar para saber si los hechos se subsumen al delito de receptación. Luego de ello se procederá con la investigación, de manera que, se deberá probar si hubo las circunstancias para advertir de la procedencia ilícita y, en efecto enervar la buena fe del poseedor o no; tal es el caso de un mecánico que recibe para reparar una moto robada. En este caso no se configura el delito de receptación porque el mecánico simplemente ejecutaba su rol sin necesidad de verificar si el bien era producto de un delito anterior.

Nota: Esta tabla muestra las respuestas u opiniones de los entrevistados respecto a en qué situaciones fácticas se debe exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor.

CAPÍTULO V: CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1.1. DISCUSIÓN SOBRE EL PRIMER OBJETIVO: Analizar la estructura del delito de receptación.

TABLA 15

La estructura típica del delito de receptación

La receptación	
Bien jurídico protegido	Existen varias concepciones teóricas orientadas a establecer el bien jurídico tutelado en el delito de receptación, entre ellas tenemos:
	1) La teoría del mantenimiento de la ilicitud , sostiene que se favorece a mantener un hecho antijurídico, previamente ocasionado (hurto, robo o estafa), consecuentemente, produciéndose una nueva afectación al bien jurídico protegido, o, manteniéndose una “situación lesiva”, ya que, se impide, restringe o reduce las posibilidades de vuelta al estado patrimonial lícito originario
	2) La teoría del aprovechamiento , sostiene que el delito de receptación implica a favor del receptor un aprovechamiento de la comisión del ilícito previo, a través de la obtención de un beneficio económico.
	Tratándose de la teoría que concibe a la justicia como bien jurídico, ya que, implica la obstaculización de la acción de la

justicia, ya que, impide la localización de las pruebas (bien) del delito previo.

Sujeto activo

Según, Peña (2019), “no tiene cualidad o condición especial, entonces, puede ser cualquier persona, sin embargo, no debió intervenir de ninguna manera en la ejecución del delito antecedente, de lo contrario se estaría penalizando conductas posteriores a la ejecución del delito” (p. 111).

Sujeto pasivo

Según, Peña Cabrera (2019), “es toda persona, que, como legítimo propietario y/o poseedor, ha sido privada de su derecho, esto es, ha sido desposeída” (p. 112).

Objeto del delito

La doctrina mayoritaria, considera que, en este delito, el objeto (bien receptado) debe ser un “bien mueble”, cuya procedencia es de un delito contra el patrimonio. Al respecto, Cabrera (2019), nos dice que “la comisión de un delito precedente, se constituye como presupuesto necesario en el delito de receptación, entonces, ante la imposibilidad de poder acreditar la preexistencia de la cosa en el delito antecedente, no se podría tipificar el delito de receptación” (Peña Cabrera, 2019, p. 202).

En resumidas palabras, el objeto del delito pueden ser bienes muebles de fácil apoderamiento como: equipos tecnológicos (celular, televisor, entre otros), auto partes de vehículo (moto lineal, auto, entre otros), así como, dinero, cheques, tarjetas de crédito o débito, y otros documentos de estimación económica, que hayan sido robados o hurtados.

Comportamiento	<p>Según, Armaza & Zavala (2019), “en la jurisprudencia peruana se plantea como elemento objetivo la existencia de un delito precedente, siendo necesario acreditar la preexistencia del bien en el delito previo, de lo contrario se procederá a absolver al acusado” (p. 202).</p>
Típico	<p>Por otro lado, Rojas (2000), afirma que “es requisito obligatorio para corroborar (probar) la comisión del delito de receptación, la existencia previa de un delito contra el patrimonio, por cuanto, los bienes recibidos por el receptor deben ser de origen ilícito” (p. 303).</p>
Tipicidad Subjetiva	<p>Según, Reategui (2015), en la configuración del aspecto subjetivo en este delito, existe dos niveles: i) conocer la realización de un delito anterior o antecedente, el cual constituye un “elemento normativo”; ii) el aprovechamiento del bien de procedencia ilícita, ya sea, un disfrute personal, o, su utilización por terceras personas, o, un lucro económico u oneroso, etc.</p> <p>Por lo tanto, el aspecto subjetivo el autor tiene pleno conocimiento de la existencia de un delito precedente, o debió presumir su ilicitud, debido a las circunstancias externas que concurren, como sería concurrir a un lugar de duda reputación, o, comprar un bien de exiguo valor comercial, o, que no se entregue algún documento que demuestre la titularidad del bien.</p>

Nota: Esta tabla muestra una descripción precisa y concisa de la estructura del delito de receptación, en cuanto a su aspectos objetivo y subjetivo.

5.1.2. DISCUSIÓN SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO: Explicar los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en un contexto del deber u obligación de presumir la procedencia ilícita del bien, conforme a lo previsto en el Código Civil Peruano.

Desde una perspectiva jurídica, “es un derecho real la posesión en virtud de su naturaleza, características y dimensión” (Varsi Rospigliosi, 2019, p. 26). En ese sentido, Villena (1994), afirma que “la posesión es un aprovechamiento factico o jurídico, del valor de uso o disfrute de la cosa” (p. 278).

Nuestro Código Civil vigente en su capítulo tercero del Título I (sobre la Posesión) de la sección Tercera (sobre los Derechos reales principales), establece una clasificación de la posesión, siendo la siguiente: i) Posesión inmediata y mediata; ii) Posesión ilegítima de buena fe; iii) Posesión precaria.

Nuestra normativa civil realiza una clasificación de la posesión, sin embargo, no se hace expresamente una clasificación diferenciadora de la posesión entre “legítima” e “ilegítima”, así como, si esta última es de “buena fe” o “de mala fe”. Es por ello que, algunos juristas consideran que dicha distinción se encuentra implícita, debiéndose recurrir a la doctrina para conocer la distinción de las mismas.

Para los fines esenciales del presente trabajo de investigación se tomará la siguiente clasificación: i) Posesión legítima e ilegítima; ii) De buena fe y de mala fe; iii) Viciada y no viciada. Esto se debe, que trataremos de abordar desde una concepción civilista, las siguientes interrogantes: ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien, sabiendo que no es de su titularidad?, ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien, desconociendo que quien le entrego o transfirió el bien, no es el titular legítimo o dueño? ¿Cuál es el modo en que se debe adquirir la posesión de un bien, para que sea considerada legítima? ¿En qué forma o circunstancias se debe adquirir la posesión de un bien,

con la finalidad de asumir que su posesión, a pesar que es ilegítima es de buena fe?

A. POSESIÓN LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA

Según, Varsi (2019), “la posesión legítima se origina mediante un acto jurídico valido, como sería la compraventa, arrendamiento, usufructo, entre otros” (p. 49). En ese sentido, Avendaño & Avendaño (2019), nos dice que “será poseedor legitimo quien tenga derecho a serlo, es decir, la posesión es conforme a derecho” (p. 35).

Para, Pozo Sánchez (2022), “la posesión legítima a diferencia de la ilegítima, esta última tiene una subclasificación: buena fe, mala fe o de otro tipo” (p. 424).

Según, De Vidal (2009), “la posesión ilegítima se caracteriza por la ausencia de título, o, título nulo, o, se adquirió el título de manera insuficiente, o, se adquirió de quien no tiene el derecho real sobre la cosa, o, carece de potestad para transmitirla” (p. 159). En otras palabras, se refiere que la ilegitimidad de la posesión se generaría como consecuencia que el titulo se adquirió de manera errónea o incorrecta generando su inexistencia, invalidez o ineficacia, como sería adquirir el derecho de posesión a una persona incapaz, o, se adquirió de alguien que ya no es titular de la cosa, por ende, no teniendo legitimidad para disponer.

B. POSESIÓN DE BUENA FE Y MALA FE

Para Varsi (2019), “es una de las más importantes clasificaciones existentes, ya que, proviene de la posesión ilegítima” (p. 50). Al respecto, Musto (2007), indica que:

Puede ser “buena fe” o “mala fe” la posesión. Siendo ello así, el primer supuesto será, cuando esté convencido por error o ignorancia, sobre la legitimidad de su derecho a poseer, esto es, no solamente a la validez y existencia del título posesorio, sino, también a la forma

o modo que se adquirió (acto de transferencia o transmisión del derecho). (p. 184)

Del Vidal (2009), indica que “se podrá calificar como tal al poseedor de buena fe cuando haya actuado diligentemente” (p. 160); siendo ello así, se podría asumir que tanto el error y la ignorancia serán excusables en la medida que el poseedor habría actuado diligentemente para conocer la “situación fáctica y jurídica” del bien que se pretende poseer.

C. POSESIÓN VICIOSA Y NO VICIOSA

Según Varsi (2019), “la posesión no solo puede ser obtenida de manera lícita, sino también ilícitamente, donde la primera se justifica en el respeto de la ley, en cambio, la segunda contraviene la ley (usurpación, hurto o robo)” (p. 63). Al respecto, Sánchez, Moreno, González & Ossorio (2018), indica que “estamos ante una posesión viciosa cuando se adquiere con ausencia de voluntad o contra la voluntad del poseedor legítimo, mediante la clandestinidad o violencia (tratándose de bienes inmuebles), o, de un acto de despojo (tratándose de bienes muebles)” (p. 78).

De acuerdo a lo indicados por los autores mencionados, los vicios de la posesión estarían clasificadas de la siguiente manera:

- i) Violencia. - puede ser “física” o “moral”, la cual es ejercida sobre una persona (puede ser el dueño, o, un tercero), con la intención de despojarle la cosa. Considero que este vicio, puede recaer en la posesión de bienes muebles como inmuebles, por ejemplo: como sería el robo (bienes muebles), y, usurpación (bienes inmuebles).
- ii) Clandestinidad. - consiste en tomar la posesión del bien de manera oculta o ante la ausencia del poseedor legítimo (en el caso de los bienes inmuebles), o, se tomó las precauciones necesarias para sustraer la cosa del dominio del

poseedor legítimo (en el caso de bienes muebles), con la finalidad que desconozca de esta situación, y no pueda oponerse. Por ejemplo: i) puede usurparse un bien inmueble cuando su poseedor se retira del mismo, y, ante su ausencia se toma la posesión de la cosa; ii) sería el caso de un individuo, que ante la “ausencia del poseedor”, aprovecha para sustraer su celular, bicicleta, o moto lineal.

- iii) Abuso de confianza. – es cuando se transfiere la posesión a una persona, con la condición de devolver el mismo en un tiempo o plazo determinado, sin embargo, una vez que se ha cumplido el tiempo para su devolución este se niega a hacerlo. Por ejemplo: cuando el comodatario se entrega a devolver el bien inmueble al comodante. Siendo ello así, ante esta situación surge la figura del precario.

La Presunción de buena fe de la posesión se encuentra prevista en el artículo 914 del C.C., donde se establece que “todo poseedor de un bien debe ser reputado de buena fe, salvo prueba en contrario”. Al respecto, Avendaño V. & Avendaño V. (2019), indica que “este tipo de presunción posesoria aplica para el poseedor *per se*, esto es, al poseedor ilegítimo de buena fe, quien cree en la validez o legitimidad de su título posesorio” (p. 48).

Vieira (2008), manifiesta que “la buena fe posesoria se caracteriza por desconocer que la posesión está violentando el derecho de un tercero (**buena fe subjetiva psicológica**), y, desconocer sin responsabilidad que la posesión está vulnerando derechos ajenos (**buena fe subjetiva ética**)” (p. 571).

Por otro lado, Linares (2012), manifiesta que “en resumidas palabras, la buena fe de poseer, es el convencimiento o creer tener un justo título para poseer un bien, sin embargo, este es nulo, inválido o inexistente” (p. 196).

De acuerdo a lo regulado por nuestro vigente sistema jurídico civil, “la buena fe posesoria” se basa en lo establecido en los artículos 906 y 907 del Código Civil.

En todo momento se debe presumir, que quien tiene la posesión del bien (mueble o inmueble) ha actuado de buena fe para adquirir la titularidad del “dominio posesorio”, ya sea, como poseedor legítimo o propietario, sin embargo, esta presunción se desvanecerá cuando se trate de bienes perdidos o bienes de origen ilícito.

De acuerdo a lo establecido en los fundamentos precedentes, **se ha formulado preguntas para establecer en la praxis legal cómo debe aplicarse la presunción de buena fe de la posesión en un contexto de presumir la procedencia ilícita del bien, siendo las siguientes interrogantes:**

1. ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien mueble, sabiendo que no tiene justo título para ello, ya sea, como poseedor legítimo o propietario?

Cuando una persona conoce plenamente que la posesión ejercida no tiene justificación legal mediante un justo título, significa que es una “posesión viciosa” o “una posesión ilegítima de mala fe”. Siendo ello así, la persona que está poseyendo un bien mueble, sabiendo que no tiene justo título para ello, será considerada como “un poseedor ilegítimo de mala fe”.

La posesión ilegítima de mala fe de un bien mueble, se puede adquirir: 1) La adquisición de bienes perdidos; 2) La adquisición de bienes que infringen la ley penal como el hurto, robo, receptación, apropiación ilícita, apropiación irregular, estafa (simple o agravada), peculado (doloso o culposos), entre otros.

2. ¿Cómo debe considerarse a la persona que está poseyendo un bien, desconociendo que quien le entrego o transfirió el bien mueble, no es el titular legítimo o dueño?

Cuando una persona desconoce, ya sea por error o ignorancia, que quien le entrego o transfirió el bien mueble, no es el titular legítimo o dueño, consecuentemente, la

posesión que está ejerciendo sobre el bien no tiene justificación legal mediante un “justo título”, significa que estamos ante un supuesto “posesión ilegítima de buena fe”. Siendo ello así, la persona que está poseyendo un bien mueble, sabiendo la situación jurídica del bien mueble poseído, será considerada como “un poseedor ilegítimo de buena fe”.

3. ¿Cuál es el modo en que se debe adquirir la posesión de un bien, para que sea considerada legítima?

Para responder esta interrogante se debe mencionar que “la posesión ilegítima se caracteriza por la ausencia de un título justo, o, existencia de un título nulo, o, se adquirió, de quien no tiene el derecho sobre la cosa, o, carece de potestad para transmitirla, o, de manera insuficiente” (Mariani De Vidal, 2009, pág. 159). Al respecto, Varsi (2019), manifiesta que “la posesión ilegítima deriva de un simple hecho, ya que, no existe derecho que respalde la posesión, entonces, el título es inválido, ineficaz y contrario a la ley” (p. 49).

En otras palabras, se refiere que la ilegitimidad de la posesión se generaría como consecuencia que el título se adquirió de manera errónea o incorrecta generando su inexistencia, invalidez o ineficacia, como sería adquirir el derecho de posesión a una persona incapaz (menor de edad, o, un loco), o, se adquirió de alguien que ya no es titular de la cosa (no ser propietario, o, carecer de facultades especiales para disponer o enajenar).

Por lo tanto, será poseedor ilegítimo, quien carece de un título válido, por ejemplo, el usurpador, o, el ladrón que se apropia indebidamente de un bien mueble, entre otros.

De acuerdo con lo indicado, se adquirirá una “posesión legítima”, cuando “quien entregue o transfiera la posesión sea el titular legítimo o el dueño”, de lo contrario el título posesorio entregado estará viciado, generando su “inexistencia”, “invalidez” o “nulidad”.

4. ¿En qué forma o circunstancias se debe adquirir la posesión de un bien mueble, con la finalidad de asumir que su posesión, a pesar que es ilegítima es de buena fe?

Se debe tener en cuenta que cualquiera sea la forma o circunstancias en que adquirió la posesión de un “bien mueble”, necesariamente el poseedor debe actuar diligentemente, esto es, debe adoptar las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular). En ese sentido, el error y la ignorancia como vicios que afectan la adquisición de la posesión del bien, serán justificables en la medida que el poseedor haya actuado diligentemente para conocer la situación fáctica y jurídica del bien que pretende adquirir su “dominio” o “posesión”

5.1.3. DISCUSIÓN SOBRE EL TERCER OBJETIVO: Analizar los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020.

Se procederá analizar cuales fueron los criterios utilizados en las acusaciones fiscales al momento imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020. Así mismo, los criterios que se aplicaron para disponer el archivo de los casos de receptación, cuando se incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, en el periodo 2019-2020.

Numero de la	Criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la
--------------	---

carpeta fiscal	ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020
4271-2020	<p>A la acusada María Juana Neira V., se le imputa haber “guardado” las auto partes de la unidad vehicular (trimoto) con placa de rodaje 2871-2M y motor WY3652MIB6589 en uno de los ambientes internos de su domicilio, así como, en ese ambiente era utilizado como cochera, y se encontró herramientas de mecánica y otras autopartes de vehículo, conforme se corrobora con el acta de denuncia verbal, acta de intervención policial y la declaración del agraviado. Así mismo, el acusado Roberto Lozano Mendoza, conviviente de la acusada, se encargó de poder dismantelar y sacar las autopartes y accesorias de la unidad vehicular, entonces, el acusado y acusada han cometido el delito de receptación agravada, previsto en el inciso 1 del artículo 195 del C.P.</p>
4739-2020	<p>Al acusado Luis Chero Vásquez, se le imputa de haber adquirido una batería hurtada, que le ofrecieron a un precio inferior a lo ofertado en el mercado formal, y conocía que su vendedor no se dedicaba a la venta de baterías de mototaxis, ni mucho manejaban mototaxi; y, se decidió a su adquisición de la batería, a pesar de que tenía conocimiento de los datos mencionados. Siendo ello así, se le imputa a Luis Chero Vásquez el haber adquirido un bien de procedencia delictiva, y, se le imputa a Cesar García Aguinaga, de haber ayudado a negociar la venta de un bien de procedencia delictiva, conforme a lo previsto en el artículo 194 del Código Penal.</p>

2050-2019	A los acusados Henry Santisteban Sandoval se le imputa de haberse encontrado en su bolsillo derecho (al momento de realizarse el registro personal) la posesión de un celular marca “HTC” color blanco con batería, y, en su bolsillo izquierdo un celular marca VERY KOOL de color blanco, los cuales habían sido reportados como hurtados, horas previas a la intervención policial. Y, al acusado Yesmir Campoverde Salazar, se le imputa de haberse encontrado en su cintura por sus partes íntimas, un celular marca SAMSUNG color blanco con batería, y, un celular marca MOBILE. Siendo ello así, se les imputa a los acusados el delito de receptación (en su tipo base), previsto en el artículo 194 del Código Penal.
3984-2019	Al acusado Oscar Saldaña Nauca , se le imputa de haber adquirido un balón de gas a un precio exiguo o debajo de lo normal (S/.25.00 soles), debiendo presumir de su procedencia ilícita o delictiva, al haberlo adquirido en el interior de su taller mecánico, de la persona de Frank Coronado Quepuy. Siendo ello así, se le imputa el delito de receptación (en su tipo base), previsto en el artículo 194 del Código Penal.

De acuerdo al cuadro precedente, se puede concluir que los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020; son los siguientes: i) Necesariamente debe acreditarse un delito previo con elementos de convicción periféricos u objetivos (denuncia policial, acta de intervención policial, declaración de la víctima, entre otras), siendo insuficiente e inidóneo solo un reporte de OSIPTEL, sobre que la cosa (celular) ha sido hurtada, robada o

sustraída, es decir, la cosa (como un celular) encontrada en posesión del investigado, este plenamente probada de su procedencia ilícita; ii) que el investigado no haya participado o intervenido en la realización del delito previo (como un hurto o robo); iii) el investigado tenga conocimiento de la procedencia ilícita de la cosa, o, debió asumir su procedencia ilícita, de acuerdo al contexto o características en que se adquirió o recibió la cosa (un celular o artefacto electrónico), como sería a un precio exiguo (inferior a lo normal), un lugar de dudosa reputación, entre otros. Este último criterio es corroborado con la propia declaración del investigado que en ciertos casos acepta en saber la procedencia ilícita de la cosa, o, de los propios elementos de convicción recabados se asume que si tenía conocimiento, o, debió haber presumido su procedencia ilícita.

Desde mi perspectiva, considero que, cualquiera sea la forma o circunstancias en que se adquirió la posesión de un “bien mueble”, necesariamente el poseedor debe actuar diligentemente, esto es, debe adoptar las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien o la cosa (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular). En ese sentido, el error y la ignorancia como vicios que afectan la adquisición de la posesión del bien, serán justificables en la medida que el poseedor haya actuado diligentemente para conocer la situación fáctica y jurídica del bien que pretende adquirir su “dominio” o “posesión”.

Numero de Carpeta Fiscal	Criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para disponer el archivo de los casos de receptación, en el periodo 2019-2020
3326-2020	Se le imputa a Rolando Rivasplata Saucedo, de potar dos equipos celulares, que han sido reportado como sustraídos el 18.08.2018 y 04.10.2019, siendo el único elemento que los incrimina el reporte de OSIPTEL. De acuerdo a los elementos de convicción

	<p>recabados, se aprecia que no se ha podido acreditar la procedencia delictiva de los celulares reportados por OSIPTEL; si bien existe un reporte de esta entidad, sin embargo, no constituye un documento idóneo o suficiente para acreditar la “procedencia delictiva del bien” (celulares) como si lo es una denuncia debidamente fundamentada con la declaración de la víctima, reconocimiento médico, entre otros. Es por ello que, el despacho Fiscal, disponer el archivo de los actuados, al no existir manera de atribuir objetivamente una responsabilidad penal, y, poder fundamentar una imputación sólida y coherente.</p>
2865-2020	<p>Se le imputa a Sebastián Rivas Azalde, de potar un equipo celular (marca LG con IMEI 35689245113657881), que han sido reportado por OSIPTEL como sustraído el 20.05.2018, siendo el único elemento que los incrimina el reporte de OSIPTEL. De acuerdo a los elementos de convicción recabados, se aprecia que no se ha podido acreditar la procedencia delictiva de los celulares reportados por OSIPTEL; si bien existe un reporte de esta entidad, sin embargo, no constituye un documento idóneo o suficiente para acreditar la “procedencia delictiva del bien” (celulares) como si lo es una denuncia debidamente fundamentada con la declaración de la víctima, reconocimiento médico, entre otros. Es por ello que, el despacho Fiscal, disponer el archivo de los actuados, al no existir manera de atribuir objetivamente una responsabilidad penal, y, poder fundamentar una imputación sólida y coherente.</p>
2506-2020	<p>Si bien los bienes adquiridos y comercializados por el investigado son de procedencia ilícita; sin embargo, de acuerdo al contexto</p>

	<p>de los hechos, y, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades económicas informales en el Perú, y, conjuntamente a esta situación, por la pandemia del COVID-19, la informalidad laboral y económica aumento, representando un 90% de sus trabajadores, significando que varios trabajadores deban realizar sus compras y ventas a fuera de sus locales, sin la emisión de un comprobante de pago o algún documento de similar naturaleza, siendo este uno de las principales razones que manifiestan los investigados; siendo de recibo por este despacho fiscal, ya que, <u>se encontraban restringidos de tomar conocimiento o poder presumir que los bienes adquiridos (guantes de látex) son de procedencia ilícita</u>; por ello, se dispone el archivo de los actuados por el delito de receptación.</p>
1773-2020	<p>Se le imputa a Antony Pier Mil Cordova, de potar un equipo celular (marca Huawei con IMEI 8627562156811254), que han sido reportado por OSIPTEL como sustraído el 05.03.2019, siendo el único elemento que los incrimina el reporte de OSIPTEL. De acuerdo a los elementos de convicción recabados, se aprecia que no se ha podido acreditar la procedencia delictiva de los celulares reportados por OSIPTEL; si bien existe un reporte de esta entidad, sin embargo, no constituye un documento idóneo o suficiente para acreditar la “procedencia delictiva del bien” (celulares) como si lo es una denuncia debidamente fundamentada con la declaración de la víctima, reconocimiento médico, entre otros. Es por ello que, el despacho Fiscal, disponer el archivo de los actuados, al no existir manera de atribuir objetivamente una responsabilidad penal, y, poder fundamentar una imputación sólida y coherente.</p>

4129-2020	<p>Se imputa a David Muñoz Livaque, de haber ayudado a guardar o esconder el vehículo menor - mototaxi de placa de rodaje 6073FM, de propiedad de Juan Francisco Peralta Palomino, donde ha sido hurtado el día 31 de diciembre de 2020. De acuerdo a los actuados, no se aprecia algún elemento de convicción periférico que permita acreditar que el investigado tenía conocimiento de la procedencia ilícita de la unidad vehicular, por cuanto, la conducta del investigado, no muestra negativa alguna de la intervención policial, sino una conducta permisiva para el ingreso a su establecimiento (enllantadora), permitiendo asumir que <u>su conducta se limito a prestar un servicio de cochera en su establecimiento, desconociendo la procedencia ilícita del vehículo</u>. De acuerdo con lo indicado, el investigado actuado dentro de “rol” como dueño de una enllantadora, sin transgredir sus deberes o limites, siendo una conducta neutral o estereotipada en el hecho delictivo, constituyendo en atípica la conducta que se le atribuye al investigado; disponiéndose el archivo de los actuados.</p>
2556-2019	<p>Se le imputa al investigado Carlos Álvarez Monteza, de potar un equipo celular (marca SAMSUNG con IMEI 353562154544475), que han sido reportado por OSIPTEL como sustraído el 15.01.2019. Habiéndose procedido a realizar las consultas respectivas, solo se ha recabo como elemento de convicción un reporte de OSIPTEL, mas no otros elementos de convicción que nos permita acreditar la procedencia delictiva del celular reportado por OSIPTEL; si bien existe un reporte de esta entidad, sin embargo, no constituye un documento idóneo o suficiente para acreditar la “procedencia delictiva</p>

	<p>del bien” (celulares). Por lo tanto, no se ha logrado acreditar, durante la investigación preliminar, que el referido equipo de telecomunicación esté en poder del investigado como consecuencia de una adquisición ilegal a uno o varios sujetos desconocidos que se dediquen a cometer delitos contra el Patrimonio (hurtos, robos, apropiaciones ilícitas, etc), por lo que objetivamente no se configura el ilícito penal denunciado.</p>
2147-2020	<p>Se le imputa al investigado Walter Agip Sánchez, de portar un equipo celular (marca SAMSUNG con IMEI 353562154544475), que han sido reportado por OSIPTEL como sustraído el 19.09.2019. Habiéndose procedido a realizar las consultas respectivas, solo se ha recabo como elemento de convicción un reporte de OSIPTEL, mas no otros elementos de convicción que nos permita acreditar la procedencia delictiva del celular reportado por OSIPTEL; si bien existe un reporte de esta entidad, sin embargo, no constituye un documento idóneo o suficiente para acreditar la “procedencia delictiva del bien” (celulares). Por lo tanto, se procede a disponer el archivo de la investigación.</p>
4798-2019	<p>Se le imputa al investigado Eduar Cabrera Hoyos, de portar un equipo celular (marca Balckberry con IMEI 3559633259004475), que han sido reportado por OSIPTEL como sustraído el 05.07.2018. Habiéndose procedido a realizar las consultas respectivas, solo se ha recabo como elemento de convicción un reporte de OSIPTEL, mas no otros elementos de convicción que nos permita acreditar la procedencia delictiva del celular reportado por OSIPTEL; si bien existe un reporte</p>

	de esta entidad, sin embargo, no constituye un documento idóneo o suficiente para acreditar la “procedencia delictiva del bien” (celulares). Por lo tanto, se procede a disponer el archivo de la investigación.
3374-2019	Se le imputa al investigado Angello Antony Ferreccio Ojeda, la presunta comisión de delito de Receptación, toda vez que con fecha 06 de febrero de 2019 fue intervenido conduciendo el vehículo menor de placa de rodaje 8684-4M, la misma que estaba reportaba como hurtada con fecha 14 de agosto de 2018, conforme a la denuncia interpuesta por Luisin Andre Pastor Ruiz. Del estudio de las declaraciones del investigado Angello Ferreccio y del testigo Jeinner Vásquez, de la denuncia interpuesta por el investigado por la pérdida de la tarjeta de propiedad del vehículo presuntamente hurtado y del récord de papeletas interpuestas al investigado, se concluye que este último adquirió el vehículo de buena fe a la persona de Jeinner Vásquez por el precio de S/3,000.00, habiendo tenido en posesión dicho vehículo desde abril de 2016, mucho antes de la denuncia interpuesta por Luisin Pastor, reportándola como hurtada. Siendo así, al advertirse que dicho vehículo nunca fue hurtado, sino vendida por Luisin Andre Pastor Ruiz a la persona de Jeinner Vásquez Chimpen y éste luego la vendió al investigado, se concluye que el bien adquirido por el investigado no provenía de un hecho ilícito, requisito indispensable para la comisión del delito en comento; debiendo disponerse el archivo de todo lo actuado por los fundamentos antes expuestos.

De acuerdo al cuadro precedente, en el distrito fiscal de Lambayeque, los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para disponer el archivo

de los casos de receptación, en el periodo 2019-2020; son los siguientes: i) No se ha podido acreditar la existencia de un delito previo (hurto o robo), siendo insuficiente un reporte de OSIPTEL (en el caso de los celulares), esto es, no existen elementos de convicción para acreditar la procedencia ilícita de la cosa reportada como hurtada o robada; ii) De acuerdo al contexto de los hechos, no se le puede exigir al investigado, que debió haber presumido la procedencia ilícita de la cosa que recibió o adquirió. Por ejemplo: 1) adquirir una docena de caja de guantes de látex en una botica, desconociendo que han sido hurtada de una clínica u hospital.

Es necesario precisar que se han aplicado criterios de imputación objetiva (funcionalismo), propiamente la “prohibición de regreso”. Por ejemplo: cuando el investigado se ha basado en su “rol social” (trabajador de una playa de estacionamiento), para recibir la cosa (como un vehículo) y la estacionan, sin embargo, desconoce que su actuar estereotipado está contribuyendo con la realización de un ilícito (receptación agravada). Sin embargo, ante los novedosos criterios de la imputación objetiva este comportamiento es irrelevante para el derecho penal.

5.1.4. DISCUSIÓN SOBRE EL CUARTO OBJETIVO: Proponer los criterios para imputar correctamente responsabilidad penal, al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, para efectos de imputar el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor.

Los criterios para imputar correctamente responsabilidad penal, al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor, sería lo siguientes: i) adquirir una cosa en lugares de mala o dudosa reputación como sería la llamada “cachina”, “el hueco”, entre otros; ii) adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando); iii) adquirir la cosa a un precio irrisorio, a pesar que se tiene

conocimiento que su valor en el mercado es superior a lo ofertado; iv) adquirir la cosa (como un celular), sin que se entregue una boleta o documento que acredite la compraventa, y consecuentemente la titularidad de la cosa.

En los casos mencionados, se debe imputar el delito de receptación por haber incumplido el “deber u obligación de presumir” la procedencia ilícita del bien, por las siguientes razones: 1) En razón del contexto desarrollado al momento de adquirir el bien, se tiene la posibilidad de representarse mentalmente que el bien adquirido es de procedencia ilícita; 2) Dada las circunstancias inusuales o irregulares en que se desarrolló la adquisición del bien mueble (equipo electrónico), por máximas de la experiencia se debe inferir que el bien adquirido es de procedencia delictuosa.

En el caso se adquiere un equipo electrónico (televisor) en una tienda, galería o centro comercial, ya sea, un celular, televisor, parlantes de sonido, computadora, entre otros, se debe solicitar una boleta de compra o factura, con la finalidad de acreditar la adquisición legítima del bien, así como, que se actuado diligentemente en la adquisición de la posesión del bien.

De acuerdo a lo mencionado, uno de los ejemplos o supuestos facticos para imputar correctamente responsabilidad penal, al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, para efectos de imputar el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor; serían los siguientes:

1. Cuando se adquiere un equipo electrónico en una tienda, galería o centro comercial, ya sea, un celular, televisor, computadora, entre otros, se debe solicitar una boleta de compra o factura, con la finalidad de acreditar la adquisición legítima del bien, así como, que se actuado diligentemente en la adquisición de la posesión del bien.

2. Cuando se adquiere un objeto de cualquier tipo en algún lugar de duda reputación, o adquiriéndose de un lugar que inspira seguridad, no se exige la entrega de un comprobante de venta, factura, o algún otro documento para acreditar la titularidad de la adquisición. Siendo ello así (en este supuesto), automáticamente se debe inferir que el bien adquirido es de procedencia delictuosa.

5.2. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LAS VARIABLES

5.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación

El deber de presumir la ilicitud del bien, constituye un elemento subjetivo del tipo penal, entendido como un “dolo eventual” mas no una “culpa consciente” (el quebrantamiento de un deber de cuidado), ya que, quien ha adquirido o recibido una cosa o bien mueble, se ha representado mentalmente que la cosa provenía de un ilícito previo (hurto, robo, entre otros) debido a las “circunstancias concretas” que se presentaron, pero a pesar de ello, procedió a su adquisición o a recibirlo de manera consciente y voluntaria, generando una situación encubridora del delito previo.

Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020; son los siguientes: i) Necesariamente debe acreditarse un delito previo con elementos de convicción periféricos u objetivos (denuncia policial, acta de intervención policial, declaración de la víctima, entre otras), siendo insuficiente e inidóneo solo un reporte de OSIPTEL, sobre que la cosa (celular) ha sido hurtada, robada o sustraída, es decir, la cosa (como un celular) encontrada en posesión del investigado, este plenamente probada de su procedencia ilícita; ii) que el

investigado no haya participado o intervenido en la realización del delito previo (como un hurto o robo); iii) el investigado tenga conocimiento de la procedencia ilícita de la cosa, o, debió asumir su procedencia ilícita, de acuerdo al contexto o características en que se adquirió o recibió la cosa (un celular o artefacto electrónico), como sería a un precio exiguo (inferior a lo normal), un lugar de dudosa reputación, entre otros. Este último criterio es corroborado con la propia declaración del investigado que en ciertos casos acepta en saber la procedencia ilícita de la cosa, o, de los propios elementos de convicción recabados se asume que, si tenía conocimiento, o, debió haber presumido su procedencia ilícita.

Desde mi perspectiva, considero que, cualquiera sea la forma o circunstancias en que se adquirió la posesión de un “bien mueble”, necesariamente el poseedor debe actuar diligentemente, esto es, debe adoptar las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien o la cosa (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular). En ese sentido, el error y la ignorancia como vicios que afectan la adquisición de la posesión del bien, serán justificables en la medida que el poseedor haya actuado diligentemente para conocer la situación fáctica y jurídica del bien que pretende adquirir su “dominio” o “posesión”.

Por otro lado, en el distrito fiscal de Lambayeque, los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para disponer el archivo de los casos de receptación, en el periodo 2019-2020; son los siguientes: i) No se ha podido acreditar la existencia de un delito previo (hurto o robo), siendo insuficiente un reporte de OSIPTEL (en el caso de los celulares), esto es, no existen elementos de convicción para acreditar la procedencia ilícita de la cosa reportada como hurtada o robada; ii) De acuerdo al contexto de los hechos, no se le puede exigir al investigado, que debió haber presumido la procedencia ilícita de la cosa que recibió o adquirió. Por ejemplo: 1) adquirir una docena de caja de guantes de látex en una botica, desconociendo que han sido hurtada de una clínica u hospital.

Es necesario precisar que se han aplicado criterios de imputación objetiva (funcionalismo), propiamente la “prohibición de regreso”. Por ejemplo: cuando el investigado se ha basado en su “rol social” (trabajador de una playa de estacionamiento), para recibir la cosa (como un vehículo) y la estacionan, sin embargo, desconoce que su actuar estereotipado está contribuyendo con la realización de un ilícito (receptación agravada). Sin embargo, ante los novedosos criterios de la imputación objetiva este comportamiento es irrelevante para el derecho penal.

Desde la perspectiva dogmática penal en concordancia con el derecho civil, la exigencia del “cumplimiento de presumir la procedencia ilícita del bien (mueble)” en el delito de receptación, está supeditada al “contexto social” en que se adquirió la posesión del bien, como sería adquirir un celular en un lugar de dudosa reputación, o, adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando).

Por otro lado, conforme a las encuestas realizadas se obtuvo el siguiente resultado:

1. Del 100% de los encuestados, el 54% respondió “SI” considera que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal; en cambio, el 46% respondió que “NO” considera que todo ciudadano cuando adquiere o recibe la posesión de un bien mueble, está en la obligación de presumir que pueda provenir de un ilícito penal, conforme a lo establecido en el artículo 194 del Código Penal.

5.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: La contravención de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles.

La Presunción de buena fe de la posesión se encuentra prevista en el artículo 914 del C.C., donde se establece que “todo poseedor de un bien debe ser reputado de buena fe, salvo prueba en contrario”. Al respecto, Avendaño V. & Avendaño V.

(2019), indica que “este tipo de presunción posesoria aplica para el poseedor *per se*, esto es, al poseedor ilegítimo de buena fe, quien cree en la validez o legitimidad de su título posesorio” (p. 48).

Vieira (2008), manifiesta que “la buena fe posesoria se caracteriza por desconocer que la posesión está violentando el derecho de un tercero (buena fe subjetiva psicológica), y, desconocer sin culpa que el ejercicio de la posesión (ilegítima) está vulnerando derechos ajenos (buena fe subjetiva ética)” (p. 571).

Por otro lado, Linares (2012), en resumidas palabras manifiesta que “la buena fe de poseer, es el convencimiento o creer tener un justo título para poseer un bien, sin embargo, este es nulo, inválido o inexistente” (p. 196).

La presunción de buena fe del poseedor se constituye como “una suerte de presunción de licitud en las relaciones posesorias de las cosas” (Varsi Rospigliosi, 2019, p. 74), por cuanto, en todo momento se debe presumir, que quien tiene la posesión del bien (mueble o inmueble) ha actuado de buena fe para adquirir la titularidad del “dominio posesorio”, ya sea, como poseedor legítimo o propietario, sin embargo, esta presunción se desvanecerá cuando se trate de bienes perdidos o bienes de origen ilícito.

Tratándose de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en un contexto de presumir la procedencia ilícita del bien, se exige a quien pretende adquirir la posesión de la cosa mueble, deba adoptar las medidas preventivas necesarias para descartar la posible existencia de infracción a la ley penal, esto es, el origen ilícito de la cosa mueble.

De acuerdo de los requerimientos acusatorios y disposiciones fiscales de archivo, analizados se concluye que los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, no han contravenido la presunción de buena fe del poseedor, en el periodo 2019-2020; ya que, se ha tenido en cuenta la forma o circunstancias en que se adquirió o recibió

la posesión de la cosa o bien mueble (como un celular, artefacto, vehículo automotor, entre otros). De acuerdo a estos criterios de la fiscalía, necesariamente todo ciudadano debe actuar diligentemente, esto es, debe adoptar las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien o la cosa (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular) que se pretende adquirir o recibir, no omitiendo la forma o circunstancias en que se adquiere o recibe la cosa. En ese sentido, el error y la ignorancia como vicios que afectan la adquisición de la posesión del bien, serán justificables en la medida que el poseedor haya actuado diligentemente para conocer la situación fáctica y jurídica del bien que pretende adquirir su “dominio” o “posesión”.

De las encuestas realizadas, se concluye que: i) la mayoría tiene conocimiento de los alcances legales de la presunción de buena fe la posesión (96% de los encuestados); ii) la mayoría considera que no es aplicable la presunción de buena fe de la posesión en todos los supuestos mencionados en la pregunta numero cinco (60% de los encuestados); iii) la mayoría considera que la presunción de ilicitud del bien en el delito de receptación, no contraviene la presunción de buena fe del poseedor (62% de los encuestados); iv) la mayoría considera que debe imputarse el delito de receptación, cuando se incumple en tener que presumir la procedencia ilícita del bien (54% de los encuestados); v) la mayoría considera que se debe presumir la procedencia ilícita del bien mueble, sin que se contravenga la presunción de buena fe de la posesión, para efectos de imputar el delito de receptación en todos los supuestos mencionados (Cuando el bien mueble es “adquirido” o “recibido” en un lugar de dudosa procedencia o de mala reputación, Cuando el bien mueble es adquirido sin que se entregue alguna boleta o comprobante de pago, Cuando el bien mueble es ofrecido a un precio inferior al valor comercial vigente, Cuando al momento de adquirir o recibir un bien mueble se entrega alguna boleta o comprobante de pago, sin embargo, el bien es de procedencia ilícita) en la pregunta número ocho.

Tratándose de las entrevistas realizadas a los diez profesionales expertos en derecho penal y civil, se obtuvieron las siguientes respuestas relevantes:

- 1) En todo ordenamiento existen presunciones, una ellas es la de presumir la procedencia ilícita, y, todo ciudadano que participa en el tráfico jurídico tiene el deber mínimo de conocimiento o de cuidado a sus acciones, pues no puede ser muy confiado, pues debe tomar cuidado de lo que adquiere, recibe o guarda, pues debe actuar con el cuidado del hombre promedio, es decir, debe actuar diligentemente.
- 2) La exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento objetivo del delito de receptación, se justifica en la necesidad de reducir los índices de realización de los delitos contra el patrimonio, así como, prevenir y sancionar a los ciudadanos que adquieren de diversas formas los bienes muebles de procedencia ilícita. En ese sentido, se constituye como un deber general, que todo ciudadano respetuoso del ordenamiento jurídico debe cumplir, con la finalidad de no contribuir a la comisión de delitos.
- 3) Los límites de la presunción de buena fe, es la actuación diligente del hombre promedio, como es actuar positivamente cuando compra un bien, que no solo se debe basar en la versión del vendedor, sino que mínimamente debe corroborarlo, ya sea en entidades públicas como registros públicos, cuya finalidad es brindar publicidad, así como la mínima corroboración como el precio de mercado, datos correctos de quienes venden. Entonces los límites de la buena fe, debe ser la actuación diligente o razonable de cualquier persona, es decir, buena fe, no significa ceguera o confianza a ciegas o complicidad.
- 4) Como regla general en el derecho civil, se presume quien tenga la posesión inmediata o directa de un bien (mueble o inmueble) es su poseedor legítimo (ya sea como propietario o tiene el derecho de uso), sin embargo, la misma tiene excepciones, por cuanto, la posesión puede estar viciada, como sería: quien transfiere la posesión de la cosa no es titular legítimo. Es por ello que, quien pretenda adquirir la posesión un bien u objeto, debe adoptar las medidas

preventivas necesarias para descartar la posible existencia de infracción a la ley penal, esto es, el origen ilícito de la cosa mueble

- 5) La presunción de buena fe de la posesión, no es aplicable a favor del poseedor de un bien mueble, cuando esta ha sido asumida por vías de hecho, es decir de manera contraria a lo que permite el ordenamiento jurídico; en cuanto al abuso de un derecho o de hacerse de aquel a sabiendas que tiene una procedencia lícita, es decir producto de la comisión de un hecho punible.
- 6) La presunción de buena fe de la posesión, no es aplicable a favor del poseedor de un bien mueble, cuando una persona conoce plenamente que la posesión ejercida no tiene justificación legal mediante un justo título, es decir, es un “posesión viciada” o “posesión ilegítima de mala fe”. En este tipo de casos, se encuentra los poseedores que han adquirido un bien de procedencia de un ilícito previo como un hurto, robo o apropiación ilícita, entre otros.
- 7) Se debe presumir que la posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario, pero debe establecerse que se entiende por “buena fe”, pues en este mundo de la información y la tecnología, con tanta facilidad para obtener información, no puede entenderse como la forma primigenia la buena fe, esta debe tener ciertos requisitos acorde con el mundo digital y de facilidades por la obtención información. Es decir, buena fe sí, pero para el que actuado diligentemente.
- 8) Se debe presumir que la posesión de un bien mueble es de buena fe, salvo prueba en contrario, ya que, permite confiar en las personas involucradas en el tráfico comercial, que están actúan dentro del marco legal. Sin embargo, esta presunción de buena fe será desvirtuada de acuerdo a las circunstancias en que se habría adquirió la posesión del bien mueble.
- 9) Considero quien de “buena fe” adquiere o recibe de otra persona la posesión inmediata de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión careza de facultad para hacerlo, dependerá de las particularidades de cada caso concreto,

pues conforme lo vengo sosteniendo, si se actuó con diligenciamiento, entonces, la buena fe será validad, de lo contrario, no puede alegarse buena fe, cuando en realidad existe ceguera o no querer darse cuenta de lo que adquiere.

- 10) Considero quien de “buena fe” adquiere o recibe de otra persona la posesión inmediata de una cosa mueble, aunque el enajenante de la posesión careza de facultad para hacerlo, no responderá penalmente en la medida que desconozca esta situación, salvo que debía presumirlo, por cuanto, dado el contexto o circunstancias de la adquisición, ameritaba presumir dicha situación irregular o ilícita. En este último supuesto, el poseedor es “ilegitimo” y la “buena fe” se desvirtuará de facto, ya que, debía presumir esta “situación jurídica irregular”.
- 11) Considero que se debe exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita de bien en todos los casos, debiendo excluirse solo cuando se ha actuado diligentemente, con el debido cuidado, es decir, como el hombre promedio, entonces, si se actuó con el debido cuidado y pese a ello no se logra determinar la procedencia ilícita, entonces, existe buena fe.
- 12) Desde la perspectiva dogmática penal en concordancia con el derecho civil, la exigencia del “cumplimiento de presumir la procedencia ilícita del bien (mueble)” en el delito de receptación, está supeditada al “contexto social” en que se adquirió la posesión del bien, como sería adquirir un celular en un lugar de dudosa reputación, o, adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando).
- 13) Considero que las situaciones fácticas para exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor, sería lo siguientes: i) adquirir un celular en lugares de mala o dudosa reputación como sería la llamada “cachina”, “el hueco”, entre otros; ii) adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando); iii) adquirir el bien a un precio irrisorio, a pesar que se tiene conocimiento que su valor en el mercado es superior; iv) adquirir el bien (como un celular), sin que

se entregue una boleta o documento que acredite la compraventa, y consecuentemente la titularidad de la cosa.

Conforme a las encuestas (100) y a las entrevistas realizadas a los diez especialistas en el derecho civil y penal, se asume los siguientes postulados: 1) Cualquiera sea la forma o circunstancias en que se adquirió la posesión de un “bien mueble”, necesariamente el poseedor debe actuar diligentemente, esto es, debe adoptar las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien o la cosa (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular). En ese sentido, el error y la ignorancia como vicios que afectan la adquisición de la posesión del bien, serán justificables en la medida que el poseedor haya actuado diligentemente para conocer la situación fáctica y jurídica del bien que se pretende adquirir su “dominio” o “posesión”.

5.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Una vez que se ha analizado los resultados obtenidos en virtud de un cuestionario, y, haberse analizado cada requerimiento acusatorio, así como, haberse discutido doctrinariamente cada objetivo. Es necesario, se proceda a elaborar el siguiente cuadro, para fines de contrastar la hipótesis inicialmente formulada:

TABLA 16

Contrastación de la hipótesis

HIPÓTESIS INICIAL	HIPÓTESIS FINAL
Si los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al	Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al

<p>ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, no ha tenido consideración que el sujeto haya actuado de buena fe, al momento de la adquisición u obtención del bien mueble (compra, donación, entre otros), entonces, contravendría la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el periodo 2019-2020.</p>	<p>ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, si han tenido consideración que el sujeto ha actuado de buena fe, al momento de la adquisición u obtención del bien mueble (compra, donación, entre otros), entonces, no ha contravenido la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el periodo 2019-2020.</p>
--	--

Nota: Esta tabla muestra una corroboración y contrastación de la hipótesis formulada inicialmente y con la hipótesis final o conclusiva.

Conforme se puede apreciar del precedente cuadro comparativo, la hipótesis final, coincide con la hipótesis inicial planteada en el presente trabajo de investigación, siendo la diferencia sustancial que se concluye de manera objetiva (conforme a la información recopilada en el marco teórico y las entrevistas) lo siguiente: “Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, si han tenido consideración que el sujeto ha actuado de buena fe, al momento de la adquisición u obtención del bien mueble (compra, donación, entre otros), entonces, no ha contravenido la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, en el periodo 2019-2020”.

La hipótesis final tiene su fundamento en que “no se contraviene la presunción de buena fe de la posesión (tratándose de los bienes muebles), quien ha adquirido o recibido un bien mueble (ya sea como propietario o poseedor inmediato legítimo), incumplió en adoptar las medidas necesarias para conocer las “características” y la “titularidad” del bien mueble, permitiendo inferir que, el autor a pesar que se ha

representado mentalmente o tenía la posibilidad de representarse mentalmente que la cosa pudiera provenir de un ilícito previo (hurto, robo, entre otros) debido a las “circunstancias concretas” que se presentaron o concurrieron, procedió a adquirirlo o a recibirlo de manera consciente y voluntaria”.

5.4. APORTE CIENTÍFICO

Conforme a lo desarrollado en la presente tesis, es necesario formular una “propuesta” para un “Pleno Jurisdiccional en materia Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque”, donde se debe abordar sobre: ¿Cuándo se debe exigir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, para efectos de imputar el delito de receptación sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor?

TEMA No 1: ¿CUÁNDO SE DEBE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DEL BIEN, PARA EFECTOS DE IMPUTAR EL DELITO DE RECEPCIÓN SIN CONTRAVENIR LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL POSEEDOR?

Para imputar correctamente responsabilidad penal, al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, en el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor, sería lo siguientes: i) adquirir una cosa en lugares de mala o dudosa reputación como sería la llamada “cachina”, “el hueco”, entre otros; ii) adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando); iii) adquirir la cosa a un precio irrisorio, a pesar que se tiene conocimiento que su valor en el mercado es superior a lo ofertado; iv) adquirir la cosa (como un celular), sin que se entregue una boleta o documento que acredite la compraventa, y consecuentemente la titularidad de la cosa.

De acuerdo a lo indicado, las situaciones fácticas para exigir el cumplimiento del “deber de presumir la procedencia ilícita del bien”, para efectos de imputar el delito de receptación, sin contravenir la presunción de buena fe del poseedor, sería lo siguientes: i) adquirir un celular en lugares de mala o dudosa reputación como sería

la llamada “cachina”, “el hueco”, entre otros; ii) adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando); iii) adquirir el bien a un precio irrisorio, a pesar que se tiene conocimiento que su valor en el mercado es superior; iv) adquirir el bien (como un celular), sin que se entregue una boleta o documento que acredite la compraventa, y consecuentemente la titularidad de la cosa.

En los casos mencionados, se debe imputar el delito de receptación por haber incumplido el “deber de presumir” la procedencia ilícita del bien, por las siguientes razones: 1) En razón del contexto desarrollado al momento de adquirir el bien, se tiene la posibilidad de representarse mentalmente que el bien adquirido es de procedencia ilícita; 2) Dada las circunstancias inusuales o irregulares en que se desarrolló la adquisición del bien mueble (equipo electrónico), por máximas de la experiencia se debe inferir que el bien adquirido es de procedencia delictuosa.

En el caso se adquiere un equipo electrónico (televisor) en una tienda, galería o centro comercial, ya sea, un celular, televisor, parlantes de sonido, computadora, entre otros, se debe solicitar una boleta de compra o factura, con la finalidad de acreditar la adquisición legítima del bien, así como, que se actuado diligentemente en la adquisición de la posesión del bien.

DECISION PLENARIA

En atención a lo expuesto en el presente pleno jurisdiccional en materia penal, los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, reunidos de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por unanimidad acuerdan aplicar los criterios indicados para efectos de mejorar la administración de justicia en los casos judicializados sobre la segunda modalidad de receptación, tipificado en el artículo 194 del Código Penal.

Publicar esta sentencia plenaria en el Diario Oficial “El Peruano” o el de mayor circulación. Hágase saber.

Independientemente de lo indicado en los fundamentos precedentes, considero necesario se realice una modificación del texto normativo que regula el delito de receptación (artículo 194 del Código Penal), respecto a la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien, ya que, actualmente en las fiscalías se ha tomado el criterio que toda persona con un bien reportado como hurtado o robado, ha incumplido este deber, y, consecuentemente es merecedor(a) de ser procesado y sancionado(a), dando lugar al incumplimiento de un “deber de cuidado” o “debida diligencia” que es propio de los delitos culposos, donde su fundamento esencial es que debido a ciertas acciones derivadas de una falta de cuidado o de una escasa diligencia, se debe sancionar penalmente. Siendo ello así, la modificación de este texto normativo (suprimiendo esta exigencia), tienen como finalidad disolver toda clase de dudas o interrogantes respecto a la exigencia de presumir la procedencia ilícita del bien, mediante un nuevo texto normativo, sin perjuicio de las interpretaciones jurídicas que se realicen al mismo, para efectos de tipificar el delito en análisis.

CONCLUSIONES

El delito de receptación, previsto en el artículo 194 del Código Penal, está conformado por elementos objetivos y subjetivos. Tratando de los elementos objetivos, son los siguientes: a) el bien jurídico protegido es el patrimonio, de acuerdo a la doctrina mayoritaria; b) el sujeto activo, no tiene ninguna condición especial, solo se le exige no haber intervenido o participado en el delito previo; c) El sujeto pasivo (puede ser cualquier persona, en su condición de titular de un bien, ha sido desposeído del mismo, por el autor del delito previo); d) El objeto del delito (es un bien mueble cuya procedencia es de un delito previo, y, que son de fácil apoderamiento); e) Las modalidades típicas (están regidos por los verbos rectores adquirir, recibir, esconder, guardar, vender, o, ayudar a vender). Tratándose del elemento subjetivo, se debe actuar con pleno conocimiento y voluntad, esto es, que el bien es de procedencia ilícita.

De acuerdo a lo establecido en el Código Civil Peruano, los alcances jurídicos de la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles, se encuentra establecido en el artículo 914 del C.C., donde se establece que todo poseedor de un bien debe ser reputado de buena fe, salvo prueba en contrario. Siendo ello así, se aplicaría la presunción de buena fe del poseedor de un bien mueble en un contexto de presumir la procedencia ilícita del bien, cuando se ha actuado diligentemente, esto es, con el “debido cuidado”, es decir, se adoptó todas las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular). En ese sentido, no puede alegarse buena fe, cuando dado el contexto o circunstancias de la adquisición, ameritaba presumir dicha situación irregular o ilícita. En este último supuesto, el poseedor es “ilegitimo” y la “buena fe” se desvirtuará de facto, ya que, debía presumir esta “situación jurídica irregular”.

Los criterios que se han aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar responsabilidad penal al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa en el delito de receptación, en el periodo 2019-2020; son los siguientes: i) Necesariamente debe acreditarse un delito previo con elementos de convicción periféricos u

objetivos (denuncia policial, acta de intervención policial, declaración de la víctima, entre otras), siendo insuficiente e inidóneo solo un reporte de OSIPTEL, sobre que la cosa (celular) ha sido hurtada, robada o sustraída, es decir, la cosa (como un celular) encontrada en posesión del investigado, este plenamente probada de su procedencia ilícita; ii) que el investigado no haya participado o intervenido en la realización del delito previo (como un hurto o robo); iii) el investigado tenga conocimiento de la procedencia ilícita de la cosa, o, debió asumir su procedencia ilícita, de acuerdo al contexto o características en que se adquirió o recibió la cosa (un celular o artefacto electrónico), como sería a un precio exiguo (inferior a lo normal), un lugar de dudosa reputación, entre otros. Este último criterio es corroborado con la propia declaración del investigado que en ciertos casos acepta en saber la procedencia ilícita de la cosa, o, de los propios elementos de convicción recabados se asume que, si tenía conocimiento, o, debió haber presumido su procedencia ilícita.

Los criterios para imputar correctamente responsabilidad penal, al ciudadano que incumplió el deber u obligación de presumir la ilicitud de la cosa, para efectos de imputar el delito de receptación, sin que se contravenga la presunción de buena fe del poseedor, son los siguientes: i) adquirir una cosa en lugares de mala o dudosa reputación como sería la llamada “cachina”, “el hueco”, entre otros; ii) adquirirlo de una persona dedicada a la comisión de ilícitos penales (hurto, robo, contrabando); iii) adquirir la cosa a un precio irrisorio, a pesar que se tiene conocimiento que su valor en el mercado es superior a lo ofertado; iv) adquirir la cosa (como un celular), sin que se entregue una boleta o documento que acredite la compraventa, y consecuentemente la titularidad de la cosa. Estos criterios de imputación se fundamentan por las siguientes razones: 1) En razón del contexto desarrollado al momento de adquirir el bien, se tiene la posibilidad de representarse mentalmente que el bien adquirido es de procedencia ilícita; 2) Dada las circunstancias inusuales o irregulares en que se desarrolló la adquisición del bien mueble (equipo electrónico), por máximas de la experiencia se debe inferir que el bien adquirido es de procedencia delictuosa.

RECOMENDACIONES

Se recomienda para efectos de imputar correctamente el delito de receptación en su modalidad de incumplir el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, que cualquiera sea la forma o circunstancias en que adquirió la posesión de un “bien mueble”, necesariamente el poseedor debe actuar diligentemente, esto es, debe adoptar las medidas necesarias para conocer las características (cantidad, calidad, dimensiones, entre otros) y la titularidad del bien (a quien le pertenece, y, si quien ofrece su transferencia es el titular).

Se recomienda a los fiscales al momento de imputar el delito de receptación en su modalidad de haber incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, sin contravenir la presunción de buena fe de la posesión, evaluar los siguientes aspectos: 1) Dada las circunstancias en que se desarrolló la adquisición del bien mueble, **el autor tiene la posibilidad de representarse mentalmente que el bien adquirido es de procedencia ilícita**; 2) Dada las circunstancias inusuales o irregulares en que se desarrolló la adquisición del bien mueble (equipo electrónico), **por máximas de la experiencia, el autor pudo haber inferido que el bien adquirido es de procedencia delictuosa**.

Se recomienda que se realice un Pleno Jurisdiccional en materia Penal en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde se debe abordar sobre el ilícito de receptación en su modalidad de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, establecido en el artículo 197 del Código Penal, y su aparente contravención con la presunción de buena fe del poseedor de bienes muebles conforme a los lineamientos jurídicos en materia civil y penal.

BIBLIOGRAFIA

- Arce y Cervantes, J. (2012). *De los bienes*. Mexico: Porrúa.
- Arias Schreiber, M. (1991). *xégesis del Código Civil peruano. Los derechos reales. Tomo IV*. Lima: Studium.
- Arias, F. G. (2016). *EL PROYECTO DE INVESTIGACION. Introduccion a la metodología científica*. Caracas: Episteme.
- Armaza Galdos, J., & Zavala Toya, F. (1999). *La Decisión Judicial*. Lima: Gaceta Jurídica.
- ARMAZA GALDOS, Jorge; ZAVALA TOYA, Fernando. (1999). *La Decisión Judicial*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Avendaño V., J., & Avendaño V., F. (2019). *Derechos Reales*. Lima: PUCP.
- Avendaño Valdez, J. (2007). Definición de la propiedad. En W. Guiterres Camacho, & M. Muro Rojo, *Codigo Civil Comentado* (págs. 137-139). Lima: Gaceta Juridica.
- Bajo Fernandez, M. (1991). *Manueal de Derecho Penal: Parte Especial*. Madrid: Centro de Estudios Ramon Areces.
- Barrientos, P. (2006). *La Investigación científica. Enfoques metodológicos*. Lima: UGRAPH S.A.C.
- Bregalia Arias, O. (2003). *Codigo Penal y Leyes Complementarias* (Vol. II). Buenos Aires: Astrea de A. y R. Depalma.
- Chavez Moreno, M. D., & Garcia Portilla, G. G. (2013). *La receptación: Un delito de alto impacto en Colombia*. Bogota: Universidad Militar de Nueva Granada.
- Cornejo Sanchez, M. (2017). *La imposición de la pena privativa de la libertad y la participacion en el delito de receptacion en la provincia de Cusco. Tesis para optar el grado academico de magister en derecho penal*. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- Cuadros Villena, C. F. (1994). *Derechos Reales*. Lima.
- Davalos Aldas, H. F. (2015). *El delito de receptación y su concepción jurídica doctrinaria. Tesis para optar el grado académico de maestro en Derecho Penal y Criminología*. Ambato: Universidad Regional Autónoma de los Andes.
- De Reina Tartière, G. (2012). *Derecho Civil. Derechos Reales*. Madrid: CEF.

- Freyre, A. R. (2013). *Derecho Penal: Parte Especial*. Lima: IDEMSA.
- Freyre, L. R. (1986). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial* (Vol. III). Lima: Editorial y Distribuidora de Libros S.A.
- Gama, G. (2011). *Direitos reais*. Sao Paulo: Atlas.
- Gomes, O. (2012). *Direitos reais*. Río de Janeiro: Forense.
- Gonzales Barron, G. (2013). *Tratado de Derechos Reales*. Lima: Jurista.
- Gonzales Linares, N. (2012). *Derecho Civil Patrimonial*. Lima: Jurista.
- Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mexico: Mc Graw Hill.
- Lama More, H. E. (2012). El título posesorio en el Código Civil peruano. *Revista Oficial del Poder Judicial*, 139-158.
- Lozano Castañeda, L. F. (2019). *Propuesta Modificatoria del art. 194 del Código Penal Peruano para incorporar la culpa en el delito de receptación. Tesis para optar por el título profesional de abogado*. Pimentel: Universidad Señor de Sipán.
- Maisch Von Humboldt, L. (1984). *Los Derechos Reales*. Lima: Studium.
- Mariani De Vidal, M. (2009). *Derechos Reales*. Buenos Aires: Zavalia.
- Meine Mendez, I. (2005). *El delito de receptación. La receptación "sustitutiva" y la receptación "en cadena" según el criterio de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema*. Lima: Instituto de Defensa legal de la Facultad y Departamento de Derecho de la PUCP.
- Mendoza Torres, N. E. (2020). *El elemento subjetivo "debía presumir" en el delito de receptación en el Código Penal Peruano. Tesis para obtener el título profesional de abogado*. Trujillo: Universidad Cesar Vallejo.
- MUÑOZ CONDE, F. (2012). *Derecho Penal: Parte Especial*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Musto Nestor, J. (2007). *Derechos Reales* (Vol. I). Buenos Aires: Astrea.
- Musto, N. J. (2000). *Derechos Reales. Tomo I*. Buenos Aires: Astrea.
- NUÑEZ, R. (1979). *Tratado de Derecho Penal*. Buenos Aires: Cordoba.
- Palella, S., & Martims, F. (2010). *Metodología de la Investigación Cuantitativa* (Tercera ed.). Caracas: Fedupel.

- Penteado, L. (2008). *Direito das coisas. Dos Tribunais*.
- Peña Cabrera Freyre, A. R. (2019). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial*. Lima: Ediciones Legales.
- Peña Cabrera, A. R. (2019). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial*. Lima: Ediciones Legales.
- Peñailillo Arévalo, D. (2014). *Los bienes, la propiedad y otros derechos reales*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
- Pozo Sanchez, J. E. (2022). Comentario al artículo 906 del Código Civil Peruano. En J. Espinoza Espinoza, *Nuevo Comentario del Código Civil Peruano. Tomo V* (págs. 423-427). Lima: Instituto Pacífico.
- PUMPIDO FERREIRO, C. C. (1955). *Encubrimiento y Receptación*. Barcelona: Bosch S.A.
- RAE. (2022). *Diccionario de la Real Academia Española*. Obtenido de Diccionario de la Real Academia Española: <https://dle.rae.es/despojar>
- RAE. (2022). *Diccionario de la Real Academia Española*. Obtenido de Diccionario de la Real Academia Española: <https://dle.rae.es/expoliar>
- RAE. (2022). *Diccionario Jurídico de la Real Academia Española*. Obtenido de Diccionario Jurídico de la Real Academia Española: <https://dpej.rae.es/lema/ocupaci%C3%B3n#:~:text=1.,ciertas%20cosas%20carentes%20de%20due%C3%B1o>.
- Ramos Nuñez, C. (2018). *Como hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento*. Lima: Lex & Juris.
- Real Academia Española. (14 de mayo de 2020). *Diccionario del Español Jurídico de la RAE*. Obtenido de Diccionario del Español Jurídico de la RAE: <https://dej.rae.es/lema/adquirir>
- Reategui Sanchez, J. (2015). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial* (Primera ed.). Lima: Instituto Pacífico.
- Reategui Sanchez, J. (2015). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial* (Primera ed.). Lima: Instituto Pacífico.
- Rio, F. G. (2004). *Manual de derecho penal: Parte General y Especial*. Lima: Legales Iberoamericanas E.I.R.L.
- Rodriguez, G., Gil Flores, J., & Garcia Jimenez, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. *ALIJIBE*, 02-36.

- Rojas Vargas, F. (2000). *Jurisprudencia Penal Patrimonial*. Lima: Grijley.
- Rojina Villegas, R. (2014). *Compendio de derecho civil. Bienes, derechos reales y sucesiones*. Mexico: Porrúa.
- Sacramento, R. B. (2017). *ficp*. Obtenido de ficp: <https://ficp.es/wp-content/uploads/2016/11/Ruiz-Bosch-Receptaci%C3%B3n-encubrimiento-real-y-blanqueo.pdf>
- Sanchez Calero, F. J., Moreno Quesada, B., Gonzalez Porra, J. M., & Ossorio Serrano, J. M. (2018). *CURSO DE DERECHO CIVIL III. DERECHOS REALES Y REGISTRO INMOBILIARIO*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Siccha, R. S. (2015). *Delitos contra el patrimonio*. Lima: Pacifico Editores.
- Tenera Barrios, F. (2015). *Derechos reales*. Mexico: Porrúa.
- Tomas Aladino Galvez, W. D. (2012). *Derecho Penal: Parte Especial* (Primera ed., Vol. II). Lima: Jurista Editores.
- Torres Vasquez, A. (2010). *Derechos Reales*. Lima: Moreno S.A.
- Varsi Rospigliosi, E. (2019). *TRATADO DE DERECHOS REALES. Posesión y propiedad. Tomo 2*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
- Vieira, J. A. (2008). *Direitos Reais*. Coimbra: Almedina.
- Yanes Sevilla, M. D. (2015). *ANALISIS DEL DELITO DE RECEPCION Y SU INCIDENCIA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL EN EL ECUADOR*. Ambato: Universidad Pontificia Catolica de Ecuador.